



Universidad de Chile
Instituto de la Comunicación e Imagen
Escuela de Periodismo

MEGAINCENDIO EN VALPARAÍSO

La historia de precariedad y corrupción que devastó al Puerto Principal

VALENTINA PAZ ANDRADE LILLO

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE PERIODISTA

Categoría: Reportaje periodístico

Profesora guía: Tania Fabiola Tamayo Grez



Santiago de Chile
Noviembre 2016

DEDICATORIA

A todas las porteñas y porteños que, pese a los embistes del destino, continúan luchando diaria e incansablemente por mejorar sus condiciones de vida.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de decenas de personas. En primer lugar, gracias a mi madre, Mariana Lillo, por deberle todo lo que soy, por educarme, alentarme y sostenerme en los momentos más difíciles. A mi padre, Jorge Andrade, por inculcarme el amor por Valparaíso y el trabajo arduo. A mi querida Amanda, por acompañarme con amor en la vida y en los desvelos. Gracias a Luz, Daisy, Karina, Ingrid, Leslie y Mario por abrirme las puertas de su hogar y confiarme su lucha, sus sueños, sus anhelos y sus más profundas tristezas. Gracias a todos los que compartieron conmigo sus conocimientos, ideas, críticas y sugerencias: a Iván Vuskovic, Sótero Apablaza, Enzo Gagliardo, Alejandro Corvalán, Miguel Castillo, Uriel Padilla, Claudio Reyes, Daniel Morales y tantos otros. Y, por último, infinitamente gracias a la maestra Tania Tamayo Grez por ser mi guía y mentora en este vertiginoso mundo del periodismo.

ÍNDICE

Capítulo 1: La tragedia	7
Un día nefasto.....	7
Perderlo todo.....	10
Medidas de Gobierno.....	16
Cadena humana.....	22
“Manos negras”.....	24
Capítulo 2: Los pobres no escogen dónde vivir	28
Cuestionados.....	28
La lucha por la radicación.....	33
Capítulo 3: El histórico foco de incendios	40
Todo jugando en contra	40
El bosque: una bomba de tiempo.....	45
Capítulo 4: El saqueo y el olvido	51
El abandono de Valparaíso.....	51
La endémica corrupción.....	60
Capítulo 5: Un futuro en construcción	76
Las propuestas para la reactivación.....	76
El Plan Maestro para la reconstrucción.....	81
Bibliografía.....	87

INTRODUCCIÓN

“Los españoles fueron generalmente sabios para elegir sitios donde fundar sus ciudades. Por eso a Valparaíso no lo fundó nadie. Simplemente lo parió Juan de Saavedra, con una sonrisa. Y los que vinieron después recogieron esa sonrisa amarga, porque sin una sonrisa en el corazón no se puede vivir en una ciudad como ésta, tan demasiado llena de demasiados”. Así definía la esencia de Valparaíso el escritor y dibujante porteño Renzo Pecchenino, más conocido como Lukas. Efectivamente, entre las tantas particularidades que tiene esta ciudad resaltan dos: que nunca ha sido fundada y que siempre ha sido víctima de los excesos.

Quizás lo primero fue lo que instauró la cultura de la autoconstrucción entre sus habitantes, la arraigada costumbre de ser ellos quienes definen hacia dónde y cómo se expande la ciudad. Para esto debieron en primer lugar aprender a lidiar con las particularidades topográficas que ofrecía Valparaíso: un muy breve espacio plano y 42 empinados cerros que generan abruptas pendientes, lo que no dejó otra alternativa para los porteños que construir sus viviendas literalmente colgando de las laderas, desafiando por completo la ley de gravedad.

Con los años, la ciudad se lograría perfilar como el puerto principal de Chile y uno de los más importantes de Sudamérica, recibiendo el apodo de “Joya del Pacífico” en el mundo mercantil. Esto le significó un auspicioso pasar económico y motivó la llegada de numerosos capitalistas extranjeros, quienes instalaron allí una suerte de pionerismo a nivel nacional, lo que se tradujo en que Valparaíso fue la primera ciudad de Chile en tener: periódico (El Mercurio de Valparaíso), equipo profesional de fútbol, bolsa de comercio, transporte público y transporte público eléctrico, alumbrado público a gas y eléctrico, red cerrada de agua potable y Cuerpo de Bomberos.

Esto último resultaría imprescindible en una ciudad que se destacaría durante toda su historia por ser una víctima constante del fuego; desde sus orígenes más primitivos, cuando los nativos la llamaron “Alimapu” (tierra quemada), pasando por el siglo XX cuando el escritor Joaquín Edwards Bello la definió como una “Pirópolis” y llegando hasta nuestros días. Precisamente el trabajo que a continuación comienza a escribirse habla de una de estas ocasiones en que Valparaíso sucumbió ante las llamas, esa ocurrida el desastroso 12 de abril de 2014 cuando un incendio de grandes proporciones consumió cientos de viviendas y marcó la vida de miles de personas.

El presente reportaje es fruto de una investigación periodística extensa, de dos años de duración, y cuyo objetivo es retratar las falencias que condujeron a este desastre. Las informaciones aquí contenidas fueron recabadas mediante la revisión de documentos históricos, bibliográficos y principalmente con la realización de más de 30 entrevistas con protagonistas de la catástrofe, académicos locales, organizaciones ciudadanas y las más diversas autoridades municipales y de Gobierno, entre ellas el alcalde de la comuna, miembros del Concejo municipal, los seremis de Vivienda, Bienes Nacionales y Salud, el director regional de Onemi y el delegado presidencial para la catástrofe, entre otros.

Gracias a estas apreciaciones y aportes fue posible comprender y delinear este Valparaíso de contrastes y exageraciones que describía Lukas. Esta ciudad poseedora de una gran riqueza intelectual y artística, una feroz potencia económica, un gran valor cultural y arquitectónico -que le ha otorgado la condición de Patrimonio de la Humanidad- y un protagónico rol político. Pero al mismo tiempo albergadora de una misérrima pobreza, un crudo abandono de gestión y un historial interminable de corrupción política. Valparaíso es todo lo que esconde el “jaguar de Latinoamérica”, por eso ésta es una de esas historias que nunca nos podemos permitir olvidar.

Los ejes centrales de este trabajo los constituyen las narraciones y descripciones de las historias de vida de seis pobladores de campamentos, sus luchas diarias y su noble manera de trabajar por la comunidad; también la exposición de las distintas condiciones urbanas, materiales y psicosociales que confabularon para la generación de esta tragedia; y las enquistadas prácticas de corrupción que han enflaquecido los dineros fiscales destinados para el progreso de la región y ciudad, así como el mejoramiento de las condiciones de seguridad que atañen a la misma. Sobre este tema, que involucra incluso a autoridades aún vigentes, se detallan las malversaciones de fondos públicos en la región, que totalizan más de 4 mil 500 millones de pesos, y que fueron obtenidos mediante la desviación de fondos de la empresa estatal RPC, del Programa de Generación de Empleos implementado por el Ministerio del Trabajo, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Ministerio del Interior y la Intendencia regional.

Finalmente, se constata el lento avance de la reconstrucción de las viviendas y barrios afectados, y las ideas que surgen desde las organizaciones ciudadanas para sacar a flote a Valparaíso y mejorar de esta manera el diario vivir de sus habitantes.

LA TRAGEDIA

Un día nefasto

Desde hace varios días que se arrastraba una sequedad intensa en Valparaíso. Las oleadas de calor se hacían sentir en la población porteña, al mismo tiempo que calentaban los suelos y su cobertura, mayoritariamente compuesta por vegetación, maleza y pastizales. Esto derivó en la formación de un incendio forestal a diario en la ciudad, desde el miércoles 9 de abril de 2014 en adelante. El más peligroso de ellos ocurrió el jueves 10 en el Sexto Sector del cerro Playa Ancha y motivó la implementación de “Alerta Roja” por parte de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Al día siguiente, el viernes 11, sería nuevamente afectado el mismo cerro, esta vez en su sector Montedónico.

Pero fue el sábado 12 de abril el día que rompió todos los esquemas. Contra el pronóstico del tiempo que anticipaba un máximo de 20°C para ese día, en la ciudad puerto y otras de la quinta región se llegaron a percibir hasta 30° de temperatura, lo que desencadenó a lo largo de la jornada la formación de ocho focos de incendios forestales: tres en San Antonio, dos en Viña del Mar, uno en La Ligua y dos en Valparaíso, gestándose el primero de ellos en la parte alta de los cerros a eso de las 16:10 horas, específicamente en el Fundo Los Perales, y resultando ser el más nefasto de todos.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) tomó conocimiento de este siniestro a las 16:12 horas, según sus registros, y 23 minutos más tarde dio comienzo al primer ataque con su Plan Básico que consta de dos brigadas, dos aviones Dromader y un helicóptero; además de ocho unidades de Bomberos que se sumaron. El fuerte viento que soplaba a esa hora sobre los cerros de Valparaíso fue probablemente el factor más determinante en esta instancia, pues aleonaba las llamas, al mismo tiempo que desviaba con forma de “L” los lanzamientos de agua de los bomberos e impedía el actuar de los aviones y helicópteros de Conaf. Junto con ello, las dificultosas o inexistentes vías de acceso al terreno entorpecían el paso de los brigadistas,

mientras que la vegetación de la zona, compuesta mayoritariamente por eucaliptus, no daba tregua y brindaba un verdadero espectáculo pirotécnico.

De esta forma, el fuego se volvió incontenible y consiguió avanzar hasta el vertedero El Molle, un depósito de basura y escombros de propiedad privada, ubicado al interior del fundo Los Perales. Una vez allí la situación no hizo más que empeorar, pues el gas metano acumulado bajo los desechos generaba pequeñas explosiones, volviendo a este material aún más combustibles que la propia vegetación. A esas alturas, el humo ya podía divisarse desde distintos sectores de la ciudad, lo que alertó a la población y las autoridades.

Ante el riesgo que significaba para los habitantes aledaños el inminente traspaso del fuego al sur del Camino La Pólvara –de 50 metros de ancho-, a las 16:55 horas, cuando se habían consumido ya dos hectáreas, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decidió declarar “Alerta Amarilla” que se entiende como “la posibilidad de no controlar el incendio a tiempo”, estableciendo una coordinación entre Conaf, Bomberos, Municipalidad, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, servicios hospitalarios y el Ministerio de Obras Públicas.

Junto con ello, el “jefe de incendio” -como denomina Conaf a quien está a cargo de un evento- solicitó a la central regional cierta cantidad y tipos de refuerzos para atacar el fuego, siéndole asignado sólo los que estaban disponibles en el momento, pues paralelamente se estaban atacando otros tres siniestros: el del sector “Las siete hermanas” de Viña del Mar, el de “Villa Linda Sur” también de Viña del Mar y el último en Concumén en San Antonio, iniciado exactamente a la misma hora del que motiva esta investigación. Ello complicó la respuesta de Conaf, según precisa el director regional de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Mauricio Bustos:

“Los recursos que tiene Conaf son regionales, de hecho son nacionales, pueden derivarse a otras regiones, y muchas veces tenemos situaciones complejas a nivel regional porque hay muchos incendios simultáneos. Me acuerdo una vez en el 2010 ó 2011 que tuvimos 23 alertas rojas al mismo tiempo; se estaba quemando toda la región. Entonces si hubiese sido el único incendio se podrían haber destinado más recursos ahí, pero había varios otros que también eran complejos”.

Los refuerzos obtenidos no dieron abasto y sólo 15 minutos más tarde la Onemi decidió declarar “Alerta Roja”, que significa “la certeza de no poder controlar el incendio, y éste amenaza a la población”. El Comandante de Bomberos de Valparaíso, Enzo Gagliardo Leiva, se constituyó en el lugar y hoy recuerda que con el cruce del fuego la situación empeoró aún más, pues los nuevos fondos que comenzaron a consumirse estaban en iguales o peores condiciones que el que cobijó el comienzo del siniestro:

“El fuego traspasó la vía y se metió a la parte de bosques particulares, que están muy mal mantenidos: los accesos están hechos tira, llenos de escombros, de basura y de zanjas que se producen después de la temporada de invierno, además que no tienen ningún cortafuego. Con los vehículos íbamos pisando sobre toda esa hojarasca. Hay empresas que son dueñas de esos predios y no cumplen con las normas, como señalar la enumeración de las puertas de acceso, o informar con qué productos trabajan. No tenemos idea quiénes tienen productos químicos, quiénes tienen combustibles, nada”.

Como si fuera poco, a las 17:50 horas se inició un nuevo foco en el fundo Las Cenizas, ubicado en el sector de Placilla, a 10 kilómetros del evento más preocupante. Esto obligó a dividir la dotación de Conaf, pero -afortunadamente en este caso- el fuego logró ser extinto en breve (45 minutos), suerte que no se corrió con el otro, donde las llamas continuaban propagándose y cambiando de dirección a cada momento. Su llegada a las viviendas más próximas a La Pólvora era inminente; lo único que quedaba para la población era evacuar.

En ese momento las autoridades locales ya estaban constituidas en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en la central de la Onemi, instancia que, según recuerda el entonces gobernador de la provincia de Valparaíso, Omar Jara, fue bastante tensa: “nos instalamos a las 17:00 horas en la Onemi, donde funcionaba el comité de emergencia, y ahí empezó el largo camino. Era bien impactante porque estábamos en un cuarto piso y teníamos plena visual hacia los cerros. Podíamos ver el avance del fuego y no había forma de detenerlo, por lo que sentíamos una impotencia muy grande”, relata.

La primera medida adoptada por las autoridades -y espontáneamente por la misma comunidad- fue la implementación de albergues para dar acogida a las personas que rápidamente comenzaron a abandonar sus hogares. Los primeros centros que se habilitaron fueron el Centro

Comunitario Las Cañas en el cerro del mismo nombre, la Escuela España en el cerro Monjas, la Escuela Grecia en el centro de la ciudad, la Unidad Vecinal N° 66 del cerro Mariposas, la Unidad Vecinal N° 15 del cerro La Cruz, y la Escuela Pablo Neruda.

Paralelamente el fuego, luego de arrasarse los bosques privados, continuó consumiendo las quebradas y de allí fue cuestión de segundos para que alcanzara las primeras seis viviendas en el sector René Lagos del cerro Mariposas y del sector vecino, El Vergel, en la parte más alta del cerro La Cruz. Ahí empezó la peor pesadilla para los pobladores de la periferia porteña, cuando fueron los protagonistas del incendio más grande y cruento que Valparaíso y Chile hayan conocido en toda su historia.

Perderlo todo

Mario Puga (58) es Presidente del Comité de Emergencia del campamento El Vergel, donde vive hace más de 30 años. Esa tarde estaba trabajando cerca de su casa y vio desde allí cómo nació y se fue expandiendo la columna de humo, al punto de aproximarse peligrosamente hasta las viviendas del sector. Dejó lo que estaba haciendo y caminó hasta la cúspide del cerro para tener una mejor visual de lo que acontecía; vio al fuego descender y dar un vuelco para introducirse en el Fundo El Pajonal. Como buen conocedor del terreno, supo de inmediato que las cosas se ponían preocupantes. “Ahí quedó la grande, siempre es así, porque tiene mucho bosque de eucalipto y pino ese fundo. Vez que entra el fuego a ese sector, queda ‘la escoba’”, asegura.

Del fundo El Pajonal, el fuego continuó por la quebrada y abrazó las casas más próximas. Mario tomó su motosierra y no dudó en ayudar a sus vecinos a cortar árboles, tirar agua a las casas e improvisar algunos cortafuegos. A un antiguo amigo suyo, Osvaldo Wilson -quien luego se haría conocido por protagonizar un altercado con el alcalde de la comuna-, lo ayudó a sacar algunas pertenencias, corriendo riesgos incluso de quedar atrapado entre las llamas. Paralelamente llamó por teléfono a su señora, con quien estaba de aniversario de matrimonio ese mismo día, para decirle que se fuera donde su madre, en el cerro Las Cañas, y lo esperara allí.

Mientras Mario seguía ayudando a sus vecinos, el fuego había avanzado a tal velocidad que había alcanzado su propia casa. “Cuando me fueron a avisar, ya era tarde. Llegué aquí y veo

que el fuego venía en las cinco casas que había acá abajo. Yo traté de salvar algunas cosas, apagar, pero no, no hubo caso. Salí nomás”, relata. Aunque lo material no fue lo único que perdió con el siniestro, también sus animales, entre ellos tres burras que tenía al cuidado de un amigo y que arrancó sin liberarlas. “A una de ellas le faltaban 15 días para parir y a la otra dos meses”, detalla.

Sus vecinos, ya resignados a que su casa se quemara, de igual manera intentaron salvar algunos bienes llevándolos a casas de familiares en los cerros más próximos, con el infortunio que esas viviendas resultarían de igual manera incineradas. O a la inversa, personas que sacaron sus pertenencias de los hogares y las llevaron donde un familiar en otro cerro, resultando que sus propias viviendas no fueron afectadas y la de sus familiares sí. Luego de una hora, a Mario lo contactó su hermano para decirle que la casa de su madre, donde lo esperaba su señora, también se había quemado, “la de ella, la de mi hermano, tías, primas, sobrinas, a todos se les quemó en mi familia. Fue una cadena (...) Yo no le doy a nadie lo que pasamos con el incendio. Yo miraba y me acordaba de la película Troya, porque era como unos ramales de fuego”, describe.

Su madre, Rosa Zúñiga, había terminado recientemente de arreglar su casa, colocando baldosas en el piso y cerámicas en el baño. “Estaba orgullosa de su casa”, recuerda Mario. Por eso el día del incendio se rehusaba a salir de ella, debiendo un nieto sacarla a la fuerza por el techo. Rosa no soportó esta enorme tristeza y a los pocos meses se enfermó del corazón. “La operaron, duró dos meses más y falleció. No soportó ver hecho cenizas el sacrificio de toda una vida”, asevera Puga. A pesar de la desgracia que afectaba a su familia, ese día el dirigente se quedó ininterrumpidamente hasta las tres de la mañana en el campamento ayudando en lo que más pudo y mirando con impotencia cómo se quemaba todo su barrio. “No pudimos hacer nada, no había agua, les tirábamos tierra, pero nada”, recalca.

Ese día el fuego consumió 80 viviendas de las más de 90 que albergaba el campamento El Vergel. Cuando Mario vio que nada más se podía hacer, decidió bajar hacia el centro de la ciudad para encontrar a su padre, a quien lo habían sacado unos vecinos de su casa, pero al llegar no conseguía dar con su paradero. “Llamé al vecino que lo había sacado y me dijo que lo había dejado en la asistencia pública, porque con el humo se empezó a ahogar. Lo fui a buscar allá y no estaba, lo habían llevado a un albergue. En la Avenida Francia lo encontré como a las tres y

media de la mañana. Y ahí lo llevamos donde una de mis hermanas que se salvó, en Rodelillo”, cuenta.

En el camino hacia el centro, Mario intentó bajar por una calle más expedita del cerro vecino, Las Cañas, pero éste, igual que La Cruz, estaba completamente envuelto en fuego. “En una parte se estaban quemando las dos casas de la calle y las llamas se unían. Me tapé la cara nomás y pasé corriendo. Tenía que bajar fuera como fuera”, recuerda.

Daisy Cornejo Morales (30) es secretaria del Comité de Adelanto del Campamento Nuevo Amanecer, en el cerro Mariposas. Desde hace años que se dedica a realizar trabajos de costuras para generar dinero, y, precisamente, en eso estaba cuando comenzó el incendio, pero su máquina de coser se detenía intermitentemente producto de breves cortes de luz generados por destellos en las torres de alta tensión cercanas. Según recuerda Daisy, en cada interrupción se incorporaba para ver por la ventana cómo el fuego avanzaba sin contención, quemando todo a su paso en las laderas del cerro La Cruz y haciendo explotar los balones de gas de las casas. “Era como un infierno, todo un cerro en llamas. Estaba de noche y se veía de día por el reflejo de la luz. Nosotros estábamos todo el rato pendientes por si llegaba para acá. Mi hijo, que en ese entonces tenía tres años, me decía: ‘mamá, éntrame, porque acá en la casa no me voy a quemar’. Nunca se me va a olvidar eso”, consigna.

Las siguientes dos horas las pasó rezando y llorando, pidiéndole a su Dios que no permitiera que su esfuerzo de años se hiciera cenizas. Cerca de las once de la noche, vinieron a visitarla los miembros de la iglesia a la que pertenece, en vista de que el fuego se acercaba a pasos agigantados hacia el campamento. Sus compañeros la ayudaron a trasladar algunas pertenencias hasta la parroquia, pero hasta último momento Daisy no se resignaba a perder su esfuerzo de años. Su marido decidió llevar al hijo de ambos hasta la casa de su suegra, mientras ella, atónita, continuaba observando con impotencia lo devastadora que puede llegar a ser la naturaleza. A la una de la madrugada las lenguas de fuego descendieron y abrazaron por ambos

costados al cerro Mariposas, alcanzado así al campamento Nuevo Amanecer y su poblado vecino, Mesana. Daisy recuerda que hasta el último momento tenía fe en que su casa no se quemaría, pero en el caso contrario, su mayor tristeza no era perder las cosas materiales, sino el hecho de tener que volver a vivir de allegada. Eso era un retroceso para ella. “También pensaba en cómo iba a ayudar al resto si yo iba a estar en el suelo igual. Entonces le dije a Dios que si se me quemaba mi casa, me tenía que dar otra mucho mejor, porque no quería volver a ver malas caras, pasar nuevamente por humillaciones, estar hacinados”, asevera.

Después de un buen rato y de darle de comer a sus animales, bajó caminando por el cerro para reunirse con su familia en casa de su suegra. Al llegar recibió el llamado de su cuñada, Blanca, quién con desazón le preguntaba si acaso alguien podría dormir esa noche. Daysi le dijo: “yo, *po*. Yo voy a dormir, porque mañana hay que levantarse temprano a trabajar”. Y así fue, durmió toda la noche con una sola interrupción a las dos de la mañana, producto del llamado de una compañera de su congregación para informarle que se podía estar quemando la iglesia. Eso la preocupó el doble, ya que hasta el momento si se quemaba su casa, por lo menos sus pertenencias estaban a salvo dentro del templo y con ello sus máquinas de coser, que le permitirían seguir trabajando cuando todo esto pasara.

A primera hora del día siguiente llamó a una vecina para saber qué había pasado con el campamento, recibiendo como respuesta que su casa no se había quemado. “¿¡En serio!?”, gritó. “Ahí me acordé del trato que había hecho con Dios, sobre que si se me quemaba mi casa me tenía que dar una mejor, y no quiso, *po*, así que me quedé con mi casa”, bromea. Cuando llegó a verla, verdaderamente parecía un milagro: su casa se había tostado por los cuatro costados, se habían consumido por completo sus dos dispensadores de agua, los cables de la luz, la casa de arriba y las cinco de abajo. Todo el entorno había desaparecido, pero no su casa. “Yo era muy feliz porque apenas pasó ese día pude recostar mi cabeza en mi cama. Estaba toda pasada a humo, no tenía agua, ni luz, pero tenía mi casa”, celebra.

El único cortafuego con el que contaba la vivienda de Daisy era el desmalezamiento en un perímetro de cinco metros que su marido había hecho recientemente, pero con la voracidad de las llamas de aquel día eso no era garantía de nada, incluso algunos vecinos que tenían igualmente limpio sí resultaron siniestrados. En total, en la jornada resultaron consumidas 12 de las 45 viviendas que componían el campamento Nuevo Amanecer, además de la sede vecinal. Por ello

dispusieron el centro de acopio de ayudas en la “casa milagro” de Daysi, quien era inmensamente feliz por poder ayudar a sus vecinos: “Mi casa y el patio estaban repletos de ropa, de comida, no había dónde sentarse. Pero me daba lo mismo, porque podía ayudar a mis vecinos y eso era lo único que me importaba. Yo en la noche me acostaba en mi cama, pero mis vecinos que se quemaron, no; ellos estaban en carpas, de allegados de nuevo, y eso me daba mucha pena. Así que yo feliz de poder cooperarles en lo que me fuera posible”, asegura.

En el campamento Mesana, también del cerro Mariposas, una experiencia similar tuvo Karina Pérez, presidenta del Comité de Adelanto del sector, quien al igual que Daysi logró salvar su vivienda. Ese día sábado estaba en compañía de voluntarios de “Techo Chile”¹ acomodando el patio y segundo piso de la sede vecinal para las elecciones que se realizarían allí al otro día. Los jóvenes voluntarios estaban arriba del techo y divisaron desde lejos el fuego, dándole aviso inmediato a Bomberos. Luego de ello almorzaron todos juntos para recomponer fuerzas perdidas con el arduo día de trabajo. A las cinco de la tarde miraron por la ventana de la sede y se percataron que se estaba quemando un jardín infantil cercano; miraron hacia el otro lado y vieron las llamas desperdigadas por diversos sectores del cerro vecino. “Entonces dijimos ‘cerremos todo y vámonos’”, cuenta Karina.

Al llegar a su casa –ubicada a escasos metros- vio cómo el fuego se acercaba cada vez más, a tal punto que ya estaba consumiendo las primeras viviendas del campamento Nuevo Amanecer. “Me comuniqué con mi hijo que pertenece a la defensa civil y él estaba escuchando las noticias por su radio. Luego me empezaron a contactar de la municipalidad, de la gobernación, de ‘Techo’, de todos lados. Y en un momento me dicen ‘Karina, de aquí a las dos de la mañana esto se quema todo’. Pero yo me rehusaba a dejar mi casa”, relata.

¹ Organización no gubernamental (ONG) nacida en Chile en 1997 y dedicada al combate de la extrema pobreza mediante el acompañamiento social en los asentamientos precarios. Su intervención se basa en el trabajo conjunto entre voluntarios de la organización y los pobladores afectados, y se refleja en la construcción de viviendas de emergencia, sedes vecinales, instalación de dispensadores de agua y en general iniciativas que promueven el desarrollo comunitario en estos asentamientos.

Así fue hasta las diez de la noche, cuando su hija llegó en su auto y prácticamente la obligó a salir de allí. Estuvo toda la noche entre internet, la radio y su teléfono conectándose con su marido, quien decidió quedarse en el campamento y se esforzaba por tranquilizarla, asegurándole que su casa estaba bien aunque ya varios de sus vecinos habían perdido sus hogares. Karina asegura que uno de los factores más decisivos para el sector fue un microbasural cercano, donde se generó la misma situación que en el vertedero El Molle: “como tenía desechos, debajo había gas metano, lo que generó una explosión. Dicen que fue un ‘¡pua!’ y las llamas saltaron, agarrando toda una línea de casas en el campamento”, consigna.

Otra dirigente social que consiguió salvar su vivienda por fortuna fue Luz Flores (66), Presidenta de la Junta de Vecino 186 del cerro El Litre. Esa tarde Luz había asistido con su hijo a una exposición de fragatas navieras en la bahía de Valparaíso, desde donde vieron emerger el humo en la cresta de los cerros. “Y va a empezar el viento”, se dijo. Como buena porteña sabía que esa era la mayor amenaza. Siguieron en lo que estaban, cuando una nieta de la dirigente, que vivía en el cerro La Cruz, la llamó a su celular para decirle que se viniera urgente a la Avenida Francia -una de las principales conexiones entre el centro de la ciudad y los cerros- porque se le había quemado su casa.

- Abuela, ¿dónde estás?

- Con tu tío en el muelle

- Vente pronto a la Avenida Francia, por favor, porque se me quemó mi casa

- ¿Qué? ¿Hay un incendio? Pero si desde acá sólo se ve humo

- Sí, abuela, el fuego está alcanzando todos los cerros de Valparaíso. Las llamas son enormes en el mismo barrio. Vente.

Cuando Luz llegó al lugar reconoció inmediatamente a su nieta, quien estaba en el albergue junto a sus hijos y todos sus animales, entre ellos gallinas y caballos. La escena, según describe, era desoladora: “Era igual que en las películas de ciencia ficción. Caían bolas de fuego y explotaban los balones de gas y las mismas casas. Era impresionante escuchar el llanto de los animales, a mí se me hizo un nudo en la garganta, no podía hablar. Se sentía el dolor. Es algo que no se puede expresar en palabras, se tiene que haber estado ahí para entender lo que fue”.

Debieron permanecer en la Avenida Francia, ya que el acceso hacia los cerros estaba restringido desde temprano. Esa noche durmieron todos en casa de su hijo mayor, y Luz estaba convencida de que su casa se había quemado. Al otro día, a primera hora, subió a pie junto a su familia para constatar los daños. “El escenario era impresionante, todo hecho cenizas. La gente subía con la esperanza, pero no había nada que se pudiera rescatar”, detalla. Pero la dirigente corrió mejor suerte: su casa se había salvado por una gran e inexplicable fortuna, ya que la vivienda vecina resultó completamente consumida. “Cuando llegué vi que mi casa no se había quemado, ¡qué maravilla, qué grandioso es Dios!”, exclamó.

En los meses posteriores algunos pobladores que perdieron todas sus pertenencias no lograron sobreponerse a la tragedia, según cuenta la dirigente. “Muchos vecinos de edad avanzada fallecieron una semana después del incendio producto del dolor. En seis meses fallecieron ocho vecinos y en el año fueron como 17 personas en total que no soportaron la pena de perderlo todo”, cuenta.

Medidas de Gobierno

Ya llegada la noche del sábado 12 de abril, la Presidenta Michelle Bachelet -quien llevaba un mes en su segundo mandato- decretó Estado Constitucional de Catástrofe en la comuna de Valparaíso, permitiendo que las Fuerzas Armadas salieran a las calles para asegurar el orden y colaborar en la emergencia. De este modo, el jefe de la Primera Zona Naval y contralmirante de la Armada, Julio Leiva, tomó el mando de la situación, empleando como primera medida prohibir el funcionamiento de los locales nocturnos y el expendio de bebidas alcohólicas en la comuna.

Uno de los desafíos para las autoridades en esa noche, según recuerda el exgobernador Omar Jara, fue abastecer los albergues con víveres, para lo cual contactaron a eso de la una de la mañana al administrador del supermercado “Líder” ubicado en el centro de la ciudad, quien les permitió comprar allí los alimentos necesarios para distribuir entre los centros de acogida. “Las primeras 48 horas fueron muy complejas, entre otras cosas, por la cantidad de gente que había que atender, que a esas alturas eran 12 mil”, asegura Jara.

Con la entrega de estos alimentos más los que se hicieron llegar durante el día desde todo Chile en forma de ayuda, se concentraron los esfuerzos de dos mil uniformados, autoridades y voluntarios para organizar los albergues y aplicar la ficha EFU (Encuesta Familiar Única de Emergencia), con el fin de obtener cifras oficiales sobre la cantidad de damnificados. Además, se brindó alimentación y atención primaria y psicológica para las víctimas por parte del personal médico regional. Según recuerda la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso, María Graciela Astudillo: “Asistimos a cada albergue con un punto de salud coordinado con la atención primaria para que en cada uno de ellos hubiese entrega de leche y medicamentos, porque teníamos pacientes crónicos y la gente lo había perdido todo, entre ello sus medicamentos. También tuvimos más de 130 voluntarios en salud mental que hicieron esta atención en primera instancia”.

El balance de la jornada, de acuerdo al último informe del día emitido por la Onemi, a las 23:50 horas, cifró en 100 las viviendas destruidas, en 150 las viviendas evacuadas y en 300 las hectáreas afectadas. El incendio se mantenía descontrolado, afectando los sectores del cerro La Cruz, Mariposas, El Litre y Las Cañas. “A las cuatro de la mañana yo miraba las llamas y pensaba ‘¿cómo lo paro?’ Porque también es una responsabilidad”, recuerda el Comandante Gagliardo. Todos los esfuerzos se hacían poco, pese al numeroso contingente que intentaba combatirlo, que a esas alturas alcanzaba las 1300 personas, entre Bomberos con 81 unidades y 500 efectivos, Conaf con 70 combatientes, autoridades, Fuerzas Armadas, personal de la PDI y 23 voluntarios de la Cruz Roja. Además, producto del mismo desastre, se registró un corte de suministro eléctrico que sumió en otro tipo de penumbra a Valparaíso y su ciudad hermana, Viña del Mar.

A primera hora del domingo 13 de abril, la Presidenta Michelle Bachelet arribó a Valparaíso para encabezar a las 10 de la mañana una nueva reunión del COE, anunciando posteriormente la suspensión de su primera gira internacional en Argentina, programada para el martes siguiente. Durante la tarde se dedicó a recorrer la zona afectada y los albergues en compañía del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien había llegado a Valparaíso la noche anterior. En esta oportunidad la Mandataria conversó con varios damnificados; “algunos le contaban sus penurias, mientras otros reclamaban falta de socorro y ayuda oportuna”, informó al respecto La Tercera.

Las primeras informaciones que dio a conocer la autoridad fue la entrega de kits de herramientas para la reconstrucción y un bono de entre \$100 mil y \$250 mil por cada grupo familiar, dependiendo de su tamaño, para la compra de vestuario básico. Adicionalmente se ofrecieron dos alternativas transitorias para los afectados ante la espera de una solución habitacional definitiva: la entrega de subsidios de arriendo por un monto de 200 mil pesos o la construcción de viviendas de emergencia en sus terrenos, lo cual no estaría exento de complejidades, según detalla el director regional de “Techo Chile”, Felipe Ríos:

“Nosotros hicimos una campaña para reunir fondos y comprar las viviendas de emergencia que se necesitaban. Cuando logramos reunir los recursos, la Onemi anunció que ellos ya las habían comprado, agotando el stock disponible en el mercado. Pero la Onemi no cuenta con el equipo para construir las, por lo que se nos asignaron algunas a nosotros y otras a la municipalidad, dividiéndonos por sectores. Ahí nos dimos cuenta que se le entregaban viviendas a la gente, pero no ayuda para construir las, por lo que Techo colaboró en la construcción de casi 500 viviendas movilizandando cerca de 1815 voluntarios”.

Ese mismo día la seremi de Educación, Javiera Serrano, confirmó la suspensión de las clases para el lunes 14 de abril en nivel preescolar, básica y media. Todo esto mientras el fuego, lejos de recular, continuaba su curso, reactivándose a las 15:00 horas en el belicoso fundo El Pajonal, donde el Comandante de Bomberos recuerda haber atacado numerosos siniestros: “Yo tengo 43 años de bombero y durante ese tiempo hemos ido miles de veces a incendios en ese fundo y lo hemos salvado de que se quemara. Ahora se quemó entero y nosotros no metimos ningún carro bomba en ese lugar, porque no estaban dadas las condiciones debido a la nula mantención de caminos. Eso es muy peligroso y significa arriesgar gente”, explica. Junto con esta reactivación se originó un potente brote que alcanzó al cerro Ramaditas, Rocuant y Cuesta Colorada, donde el fuego se apropió de otras 100 casas, elevando considerablemente el número de damnificados, entre ellos, Leslie Herrera Pacheco (24), la presidenta de la Junta de Vecinos del campamento Sor Teresa del cerro Ramaditas.

Cuando aquel domingo de ramos sus vecinos comenzaron a llamar a Leslie por teléfono para decirle que el incendio se estaba acercando al sector, la dirigente intentó calmarlos. “Les dije que se tranquilizaran porque era muy poco probable que llegara tan arriba”, cuenta. La mujer –de oficio comerciante– estaba trabajando desde la madrugada en el centro de la ciudad y siguió en

eso hasta el mediodía del domingo 13 de abril, cuando le confirmaron que el incendio estaba a pocos metros de consumir la vivienda de su madre, ubicada unas cuadras más abajo de la suya, en el ala fundadora del campamento. Dejó a su madre en el centro y subió para intentar rescatar algunas pertenencias.

Al llegar, subiendo por los caminos del vecino cerro Rocuant, vio que la casa de su madre estaba fuera de peligro, pero la fuerza policial apostada en el lugar no le permitió ingresar para rescatar algún bien. “Era un infierno. Tú veías bolas de fuego que volaban, como si pescaras una piedra y la tiraras, pero de fuego”, describe. Según sus recuerdos, no pasaron más de dos minutos y vio cómo llamaradas de fuego abrazaban la casa de su madre. Entre lágrimas llamó a su hermana, que también vive cerca, para contarle lo sucedido. “Yo decía ‘¿por qué no se quemó la mía?’, porque yo soy joven, puedo salir adelante, pero mi mamá ya es mayor y nosotros no tenemos buena situación como para ayudarla”. Pero cuando Leslie volvió al centro para reunirse con su familia, una prima la llamó por teléfono para contarle lo imposible: que la casa de su mamá no había sufrido ningún daño.

-¿Pero cómo, si yo vi que se estaba quemando?- cuestionó la joven.

- No, está intacta, y las de alrededor igual- aseguró su prima.

Hasta el día de hoy nadie se explica esa situación, pero lo cierto es que efectivamente la vivienda de su madre no resultó dañada. “Se ha salvado cuatro veces esa casa de incendios, se han quemado todas las casas de alrededor, pero la de ella no”, asegura. Luego de recibir esa inverosímil noticia, y aún sin creerla, Leslie se fue junto a su familia al cerro Playa Ancha, donde veía por televisión el voraz avance del incendio. “A las seis de la tarde volví. Revisé mi casa, estaba todo intacto. Pesqué una foto de mi hijo, que tenía tres años en ese entonces, y me la llevé”.

Luego de eso volvió a Playa Ancha y una vez allí la llamaron para confirmarle que su casa se había consumido. “Yo me volví loca, me vine caminando de Playa Ancha para acá porque no pasaba locomoción. Llegué como a la una y media”, recuerda. La escena que vivió al llegar era desoladora. Estaba todo oscuro, y lo único que permitía vislumbrar intermitentemente el camino eran las sirenas de bomberos. Todo su sector estaba en ruinas; las 73 casas que

componían el campamento Sor Teresa, habían desaparecido, incluyendo la suya. “Me dolió porque yo soy comerciante y lo poco y nada que tenía me costó mucho”, cuenta.

Esa noche Leslie no pudo dormir y hasta la salida del sol se la pasó subiendo y bajando el cerro para ver si había cometido algún error de ubicación y en uno de esos intervalos encontraba su casa en pie. Pero no. Al día siguiente se abocó a la tarea de organizar la ayuda y a realizar el catastro de damnificados del sector. “Era fuerte porque todos mis vecinos lloraban frente a mí, me decían que habían perdido todo y yo les decía que nosotros también, pero había que pararse”, recuerda. Lo más doloroso, asegura, fue ver el daño que le provocó a su hijo esta tragedia. “En las siguientes noches él despertaba a media noche llorando y pidiendo uno de sus juguetes. Eso me partía el alma”, consigna.

Así fue cada noche durante los tres meses que vivieron en una carpa, a la espera de poder reconstruir su vivienda, debido a que Leslie y sus vecinos desistieron de albergarse en algún centro de acogida por temor a perder sus terrenos: “Había mucha gente que se estaba aprovechando de nuestra desgracia y querían tomarse los terrenos. Y como nosotros no tenemos papeles, con qué respaldo nos defendíamos, *po*. Son pedazos de tierra que igual nos ha costado tener y no podíamos permitir que viniera cualquier persona, que no se quemó, a quitárnoslos”. Otra oportunidad en la que Leslie vio de cerca el increíble aprovechamiento fue cuando realizaba el catastro de afectados y se le acercaba gente que no era residente del campamento para tratar de incluirse en la lista. “Yo no los anotaba. Pero después iban y se anotaban con las asistentes de la municipalidad, y yo de nuevo tenía que decirles que esa persona no pertenecía al sector. Por eso tuve que hacer como 50 veces el catastro”, precisa.

En aquel entonces el fuego era combatido principalmente por vía aérea con la llegada ocho helicópteros de combate y uno de observación, los que nuevamente y dada la intensidad del siniestro, no dieron abasto, haciendo precisa la obtención de refuerzos internacionales. La ayuda llegó al día siguiente desde Argentina, con una delegación de 25 miembros del Plan Nacional de Manejo del Fuego y seis aviones AT. Junto con ello, la Onemi hizo entrega de 12 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos, agua, mascarillas, carpas, equipos electrógenos con sistemas de iluminación, baños químicos, entre otros efectos. Además, en los sectores que era posible se comenzaron a realizar las labores de despeje de vías, retiro de escombros y normalización del tránsito, el que permanecía suspendido en las zonas aún conflictivas.

Transcurridos ya cinco días desde el comienzo de la tragedia, la Jefa de Estado anunció la entrega de otro bono por un millón de pesos para cada familia damnificada, destinado a la compra de enseres básicos, y extendió una ayuda económica para quienes perdieron su fuente laboral. Aquellos empresarios que tenían sus negocios registrados en Fosis, recibieron una ayuda monetaria de 650 mil pesos y quienes los tenían inscritos en Sercotec, un aporte máximo de 10 millones de pesos. Al día siguiente, el jueves 17, Bachelet nombró dos delegados presidenciales para atender a los damnificados del terremoto en el Norte Grande del país, ocurrido solo 11 días antes del megaincendio, y otro para la reconstrucción de viviendas en Valparaíso. El escogido resultó ser Andrés Silva, militante del Partido Socialista, ex seremi de Vivienda de Valparaíso entre los años 2006 y 2007, y ex director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano entre 2008 y 2010.

Durante el desempeño de su cargo como director del Serviu, esta entidad y el Ministerio de Vivienda (Minvu) debieron afrontar una querrela por estafa y fraude, interpuesta por la empresa RedAlmarza ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. La acusación apuntaba a los perjuicios supuestamente causados a 10 mil 200 personas de escasos recursos que postularon al subsidio de vivienda usada y se les recepcionaron pagos por ventanilla, en circunstancias que las autoridades de Vivienda sabían que ya se había agotado los recursos y que por lo tanto no les podrían asignar el beneficio.² En su nuevo cargo como delegado presidencial para la reconstrucción, Silva también sería cuestionado, debido a que en medio del cumplimiento de su labor adquirió una vivienda avaluada en 330 millones de pesos en el cerro Castillo de Viña del Mar, situación que causó molestia en la población porteña debido a lo paradójica que resultaba.

Luego de este nombramiento, las autoridades decretaron a partir de ese día restricción vehicular en la zona urbana de Valparaíso para facilitar el desplazamiento de los servicios de emergencia ante un eventual y altamente probable rebrote. Durante días e incluso semanas la situación fue de una latente tensión, de hecho, recién el 19 de abril Conaf declaró el incendio como "controlado", mientras seguía haciendo labores de vigilancia y liquidación de puntos calientes, y no fue hasta el 21 de mayo que lo catalogó como "extinto". La restitución de la energía eléctrica también fue algo que tardó más de la cuenta, consiguiéndose reponer el servicio

² Información extraída desde el medio web Anin.

casi en plenitud a fines del mes de abril, mientras paulatinamente se iban abandonando los albergues, que llegaron a recibir más de mil damnificados en el punto más álgido de la catástrofe.

Cadena humana

Al ver la tragedia vivida en el Puerto Principal, miles de personas se hicieron presentes con ayuda humanitaria de diverso tipo: Injuv lanzó la campaña web “Jóvenes por Valpo” para formar cuadrillas de trabajo, consiguiendo más de 15 mil inscritos; los trabajadores de Codelco donaron un día de sueldo y reunieron 20 millones de pesos en enseres; la empresa Esvál entregó 150 millones de pesos en agua para sofocar incendios; “Twitteros solidarios” reunió 30 toneladas en ropa, útiles de aseo y alimentos; empresarios chinos donaron más de cien pares de zapatos; y la Cruz Roja Chilena recibió 40 millones de aporte monetario en su cuenta bancaria lanzando la campaña “Todos por Valparaíso y su gente”, destinada a recolectar leche, alimentos no perecibles, pañales para niños y adultos, artículos de aseo y frazadas.

También la Federación de Sociedad de la Cruz Roja y la Medialuna Roja donaron 300 millones de pesos; “Desafío Levantemos Chile” extendió su programa contemplado para los damnificados del terremoto del norte a los afectados en Valparaíso; el Hogar de Cristo llevó a cabo la campaña “Chile ayuda al puerto” para recolectar aportes a lo largo de todo el país; la Municipalidad de Rancagua entregó 20 millones de peso en abrigo, aseo y alimentos; el actor y director del Centro Cultural Teatro Container, Nicolás Eyzaguirre Bravo -hijo del entonces ministro de Educación-, organizó la iniciativa “Un niño, una mochila”, para recaudar este imprescindible material escolar para los pequeños afectados; y diversos artistas realizaron eventos benéficos para recaudar fondos, entre ellos el mago Olhaberry, Nano Stern y Claudio Narea.

Sobre esta ayuda recibida la dirigente Karina Pérez valora principalmente el aporte cultural que se brindó a la comunidad. “Yo tengo mucho que agradecer a los chiquillos de la casa de la música que fueron los primeros que estuvieron con nosotros, que nos apoyaron al 100%, a Nicolás Eyzaguirre, Joaquín Velasco, Enrique y Mariano. Todos ellos conforman un grupo muy rico en lo que es la entrega a la parte social; nos enseñaron muchas cosas y nos ayudaron con

campañas como una mochila para un niño y una cartera para una mujer, y después a levantar el acto de conmemoración que se hizo en la plaza, donde participaron los niños de la población”.

El más masivo de los eventos organizados se llevó a cabo en el Estadio Bicentenario y llevó por título "Fuerza Chile", pues buscaba recaudar ayuda para el norte y Valparaíso a la vez. Además, la Red de Salas impulsó la iniciativa “Noche Solidaria de los Teatros” que logró agrupar a doce importantes espacios teatrales que donaron a la causa buena parte de lo recaudado en la jornada. Y así, la ayuda fue tan masiva que sobrepasó la capacidad de contención y en algún momento las camionetas y camiones repletos de ayuda comenzaron a entorpecer el tránsito de Bomberos y servicios de emergencia en los cerros, por lo que se decidió almacenar la ayuda en los centros de acopio habilitados en el plan de la ciudad. Según cifras oficiales, llegaron mil toneladas de ayuda humanitaria y para organizarla trabajaron alrededor de cinco mil personas entre funcionarios y voluntarios.

Otra de las ayudas más significativas la prestó la ya aludida ONG Techo Chile, que estaba muy familiarizada con los sectores afectados, especialmente con los campamentos, ya que trabaja con algunos de ellos desde hace años, como lo explica el entonces coordinador de organización comunitaria y actual director regional de la organización, Felipe Ríos: “Nosotros veníamos trabajando desde antes del 2010 con tres comunidades: El Vergel, Sor Teresa y Mesana, ya sea a través de la postulación a subsidios habitacionales para la creación de viviendas definitivas o a través de proyectos comunitarios de menor escala destinados a mejorar la infraestructura en los campamentos, como la construcción de huellas peatonales, sedes comunitarias o la instalación de estanques de agua, etc.”, cuenta.

El día del incendio precisamente estaban algunos voluntarios de la organización ayudando en el campamento Mesana y, cuando divisaron la proporción que estaban tomando las llamas, llamaron a sus compañeros para que vinieran a cooperar. Al reunirse todos los voluntarios para evaluar los daños en la zona alta del puerto, la sensación fue generalizada, según detalla Ríos. “Fue una instancia muy cruda porque nosotros en el trabajo constante con las familias generamos un vínculo muy cercano. En el acompañamiento de cinco o diez años fuimos testigos del esfuerzo que les costó parar sus casas y ver que de un momento a otro lo habían perdido todo de nuevo fue algo muy triste. Además que muchas de estas familias no era primera vez que les pasaba, sino

que era la segunda o tercera vez que por razones de incendio u otras catástrofes perdían sus bienes”.

Desde la organización vieron el incendio como una oportunidad para ordenar los campamentos que tenían serias posibilidades de radicación, es decir, que se urbanice el terreno donde se emplazan al mitigar los riesgos que lo impiden. Entonces, en cuanto se permitió el acceso, subieron a los cerros para ayudar a reconstruir de manera más ordenada los campamentos. El lunes 14, por ejemplo, llegaron a El Vergel, pero se encontraron con la lamentable situación que las casas ya se estaban levantando en el mismo lugar y con los mismos riesgos, por lo que simplemente se avocaron a colaborar en las tareas de despeje y construcción de viviendas de emergencia.

“Manos negras”

Las tristes cifras que arrojó el incendio fueron un total de 15 víctimas fatales, las que en su mayoría eran personas de edad avanzada, con movilidad reducida y residentes en los cerros Las Cañas, La Cruz y Merced; 1042 hectáreas quemadas, 148 de ellas pertenecientes al área urbana; 12 mil damnificados; y 2765 viviendas destruidas completamente más otras 145 que quedaron con daños reparables. El fuego alcanzó a 7 de los 42 cerros que posee Valparaíso, entre ellos el cerro La Cruz, Las Cañas, Merced, El Litre, Ramaditas, Rocuant y Mariposas, resultando los cuatro primeros dañados en un 90% aproximadamente y los otros tres de manera parcial.

Frente a la emergencia se efectuó un potente ataque aéreo mediante 19 helicópteros y 15 aviones, alcanzando un *peak* de 31 aeronaves en combate simultáneo. “Nunca antes se había combatido un incendio con tantas aeronaves en Chile. No se podía ocupar ni una más porque el espacio aéreo estaba copado”, recuerda el actual director regional de la Onemi, Mauricio Bustos. Mientras que por vía terrestre operaron un total de 2500 voluntarios de Bomberos –de los cuales 9 perdieron sus casas en el siniestro–; 357 efectivos de Conaf, 15 técnicos y 11 brigadas; y una cuadrilla argentina.

Respecto al origen del siniestro, en las primeras indagaciones se barajaron dos posibilidades: la primera apuntaba a la generación intencional del mismo y la segunda al

electrocutamiento de dos aves apostadas en el tendido eléctrico que habrían caído encendidas al pastizal. Esta última teoría fue finalmente corroborada por el Laboratorio de Carabineros (Labocar) en febrero de 2015, tras diez meses de investigación. No obstante, los pobladores del lugar permanecen en su mayoría aún escépticos sobre esta versión, pues en la zona donde se originó el siniestro, aseguran, no existe ningún tendido eléctrico de alta tensión. “En el incendio hubo manos negras, porque dicen que se originó por unos pájaros electrocutados y en ese lado no hay cables de alta tensión. Yo conozco eso al revés y al derecho, y no hay cables de alta tensión. Aquí están tapando mucho, por eso ahora vamos a hacer una demanda contra el Estado y van a tener que encontrar responsables”, señala enfáticamente el dirigente de El Vergel, Mario Puga.

Esta postura fue compartida por el entonces director de la Onemi, Guillermo de La Maza, quien al día siguiente del origen señaló a La Tercera que “hay intervención de terceros sin duda y no se debe a un accidente eléctrico. No hay duda de esa tesis que se maneja”, confirmando además que “en el lugar del origen del fuego no hay tendido eléctrico”. Otros vecinos tienen distintas teorías, algunos se inclinan por un accidente originado en medio de una supuesta quema de cables en el vertedero El Molle con el fin de extraer cobre, instancia en la que se les habría escapado el fuego de control a las personas acusadas. Y los últimos apuntan a la intencionalidad, dirigiendo los dardos a privados para quienes, creen, resultaría muy conveniente este incendio, pues les facilitaría comprar terrenos donde construir –que son cada vez más escasos en Valparaíso- y de una manera más económica. Este es el caso de Karina Pérez, dirigente del Campamento Mesana: “Si tú te das cuenta, los últimos incendios de Valparaíso siempre se han producido en campamentos, entonces da para pensar que pueden haber habido intereses de constructoras, intereses de gente más grande, porque hay muchas familias que siempre han vivido juntas y hoy día no están juntas a causa de esto. Es, de alguna manera, desarticularnos”.

Por estas discrepancias es que, como señala el dirigente Mario Puga, se ha originado una nueva investigación, a propósito de una querrela interpuesta por la ciudadanía contra quienes resulten responsables para aclarar responsabilidades en el origen y en el control mismo del incendio. Además, algunos vecinos, como el mismo Puga, aducen una supuesta lentitud de Conaf para actuar en el momento inicial del desastre. “En los incendios anteriores llegaban al tiro los carros bombas, los aviones y helicópteros. Ahora no. Si hubiesen estado antes de que el fuego pasara la carretera, habría sido distinto. Nosotros nos cansamos de llamarlos, para que mandaran

los helicópteros y nos respondían que había mucho viento y no podían trabajar así. ¿Y cómo al día siguiente que había más viento, cuando se estaba quemando Ramaditas y Rocuant, salieron todos los aviones y helicópteros?”, cuestiona.

Sobre esto el director de la Onemi regional, Mauricio Bustos, apunta que urge un reforzamiento en el equipamiento disponible para el primer ataque frente a las emergencias: “Tenemos que trabajar más en reforzar la primera respuesta y en el ordenamiento territorial, eso es lo que quiero destacar. Hay cosas que ya existen y que se hacen bien, el alistamiento temprano, por ejemplo. Como sabemos 4 ó 5 días antes que van a haber condiciones desfavorables, informamos de manera oportuna a todos los organismos, de manera que cuando se declara una alerta temprana preventiva, los municipios saben que el fin de semana van a tener que contar con personas en turnos, conductores de camiones aljibe, por ejemplo; Bomberos evalúa acuartelamiento; Carabineros refuerza los patrullajes, etc. Hay un alistamiento inmediato y una serie de cosas que se van haciendo y se han hecho bien. (...) Entonces, si tenemos un plan adecuado de coordinación, buenos sistemas de comunicación y conocimiento de la región, ¿por qué nos seguimos quemando? Por lo que señalaba antes”, explica.

Una molestia ciudadana más sería causada por la cobertura que realizaron los medios televisivos de comunicación sobre la tragedia, la que fue considerada morbosa y sensacionalista. Esto motivó la elevación de 157 denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra 37 programas televisivos, de las cuales el CNTV accedió a revisar sólo dos casos de manera individual -los más denunciados- y el restó decidió archivarlos. El programa más cuestionado por su tratamiento periodístico fue el noticiero central de Televisión Nacional de Chile (TVN), “24 horas”, en su emisión del 15 de abril. Esto principalmente por una nota donde el periodista Claudio Fariña escarbaba en las situaciones más dramáticas de la catástrofe, abordando a menores de edad con preguntas sensibles. Al respecto una de las denuncias expresa: “Lo particular y más grave de esta nota es la entrevista que le hace a una niña donde le pregunta de forma tendenciosa e insistente respecto de su casa, la cual se había quemado hace algunos días. No le bastó la respuesta inocente de la menor, sino que siguió insistiendo hasta que finalmente la hizo llorar, situación que no fue espontánea, ya que las preguntas del periodista tenían por fin llegar a eso”.

El que le siguió en denuncias al noticiero de TVN fue el especial informativo de Chilevisión emitido el 13 de abril, donde lo más criticado fue la sobreexposición del periodista Iván Núñez a situaciones riesgosas, como enfrentar las llamas, lo que fue considerado morboso por los denunciantes. Además, en un lamentable intento de describir la magnitud de la catástrofe, fue reprochada la colocación del GC “tsunami de fuego” en una de sus notas informativas, lo que fue percibido como algo sensacionalista y burdo por los televidentes.

De las 157 denuncias, sólo una fue ingresada por escrito a través de la oficina de partes del Consejo, y pertenece al Servicio Nacional de Menores (Sename) contra siete coberturas noticiosas de todos los canales nacionales, específicamente por los extractos titulados “Niños impactados por el incendio de Valparaíso” (Canal 13), “Los niños de la tragedia porteña” (TVN), “Los niños también se han visto afectados por incendio en Valparaíso” (Chilevisión), y “Niños ayudan a remover escombros de los cerros tras incendio en Valparaíso” (Mega), entre otros. Bajo el criterio del Sename, en los programas mencionados “queda de manifiesto la invasión a su privacidad” y “se lesiona gravemente la dignidad de los niños y niñas víctimas del incendio”. Finalmente, el CNTV decidió absolver de los cargos a la cobertura del noticiero “24 horas”, en su sesión del 7 de julio de 2014, y declarar “no ha lugar” los cargos contra el especial informativo de Chilevisión, en su sesión del 19 de mayo de 2014.

II

LOS POBRES NO ESCOGEN DÓNDE VIVIR

Cuestionados

Cuando transcurría el segundo día del incendio, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, subió a la parte alta del cerro La Cruz para evaluar la situación en terreno, siendo interceptado por el poblador del campamento El Vergel, Osvaldo Wilson, quien aprovechó la oportunidad para recriminarle por las malas condiciones en las que se vive desde hace años en dicho sector, especialmente por la carencia de agua potable. La respuesta que obtuvo por parte de la autoridad comunal fue más bien un cuestionamiento:

- ¿Te invité yo a vivir aquí?-, increpó el edil.
- No, yo vine a vivir por necesidad, porque somos pobres-, replicó Wilson.

Una situación similar vivió la periodista de Televisión Nacional de Chile (TVN), Mónica Pérez, en un despacho para el noticiero “24 horas” emitido el mismo día, donde preguntaba a un damnificado por qué vivía en una zona de riesgo si es bien sabido que es peligroso. La respuesta que obtuvo fue la misma: “llevamos más de 30 años ahí (...) han habido muchos incendios y esta vez nos tocó a nosotros, ¿qué le vamos a hacer? La gente pobre no puede buscar en otros lados”, señaló el poblador.

No es casual que ambos damnificados en su intento por explicar su situación habitacional apunten a lo mismo: la pobreza, una realidad indiscutible en Valparaíso. Según cifras de un estudio de la oficina de arquitectura y urbanismo, “Atisba”, publicado en La Tercera, “un 57% de las viviendas situadas en estas áreas de riesgo corresponde a inmuebles de familias vulnerables”, cifra que se desglosa en que un 40% corresponden a hogares pobres y un 17% al segmento de extrema pobreza. Estos números son representativos de la realidad que arrastra Valparaíso desde hace décadas, pues, a pesar de ser la tercera economía regional más importante de Chile,

contribuyendo el 8,79% del PIB nacional³, al 2011 presentaba alrededor de un 23% de población pobre según la medición de la pobreza multidimensional elaborada por la Encuesta Casen de aquel año. Índices que se ven fomentados por el alto desempleo presente en la zona, que alcanza un 7,1% y que la convierte en la quinta tasa de desocupación laboral más alta de Chile.⁴

De acuerdo a lo señalado por el doctor en Economía y actual director de Pro Chile en la región, Alejandro Corvalán: “Valparaíso actualmente tiene una participación económica a nivel nacional más baja que la que tenía, por ejemplo, en el año ’60, que era del 14%, pero yo sostengo que si hacemos las cosas bien, ésta será una región a la que le irá bien en el margen”. A juicio del experto, tendría una labor esencial en esto el nivel de inversión privada, que, según explica, es inferior a la que correspondería. “La proyección de inversión privada en Valparaíso de aquí al 2018 es de 6%, cuando deberíamos tener una tasa de inversión equivalente a nuestra incidencia, o sea, un 8%”, detalla.

Dentro de estas malas cifras, dos de los ámbitos sociales más desvalidos en Valparaíso, según la misma medición multidimensional de la pobreza de la encuesta Casen, son la Educación, con un índice de 25,9% y la Vivienda, con un 27,9%. Aquello se ve reflejado en el abultado déficit habitacional que presenta la quinta región, alcanzando una demanda de 38.196 viviendas frente a una oferta anual del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de 12.595 habitaciones en promedio. En la comuna las cifras son similares, pues se presenta un déficit cuantitativo de 9.101 habitaciones (según Censo 2002) para una oferta estatal de 3000 viviendas al año en promedio. Es decir, cada año desde el sector estatal se da respuesta solo a un tercio de la demanda habitacional en la región y comuna de Valparaíso.

Al respecto, el ex presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Sótero Apablaza, explica que “al término de la dictadura cívico-militar, el déficit habitacional bordeaba el millón de viviendas y cada año entre el Estado y los privados se construyen alrededor de 120 mil para todo el país. Considerando que se celebran cerca de 180 mil matrimonios, sin contar los concubinos, evidentemente hay un déficit de habitación real”. Esto, según señala, afecta principalmente a los estratos económicos más vulnerables, ya que “los sectores medios tienen cómo adquirir algún tipo de vivienda, pero los pobres no. Y no se ha podido revertir la situación

³ Cifras del Banco Central de Chile

⁴ Encuesta Nacional de Empleo, INE, 2016.

porque ningún gobierno ha puesto los intereses populares en sus ejes. Prefieren trabajar con los sectores medios, por grupos afines”, asegura.

Efectivamente, de acuerdo a las cifras oficiales, los más perjudicados con este déficit habitacional son los estratos socioeconómicos bajos, pues, según precisa el Minvu en su análisis sobre el déficit habitacional regional de 2013, “la cantidad de hogares con déficit es mayor en los primeros quintiles, mientras que va disminuyendo en relación con el aumento de ingresos de los hogares”. De este modo, no resulta sorprendente que Valparaíso sea la región con más campamentos habitacionales en Chile, con un total de 177 ocupaciones que albergan a 10.714 familias, según el Monitor de Campamentos de la ONG “Techo”. De las 2910 familias damnificadas en el megaincendio, sólo alrededor de 90 tenían su vivienda en situación completamente regular, la mayoría sólo contaba con título de dominio sobre su terreno y alrededor de 400 estaban fuera de toda norma, pues pertenecían a una de estas tomas de terreno.

La existencia de campamentos habitacionales en Valparaíso se arrastra desde hace larga data. Algunas ocupaciones alcanzan los 40 años de existencia, como es el caso del campamento El Vergel del cerro La Cruz. Sobre sus orígenes, el dirigente Mario Puga relata que fue un proceso lento y paulatino: en un comienzo eran un total de 13 familias, y a medida que iban corriendo la voz entre sus círculos de amigos y familiares, se fueron sumando más clanes hasta llegar a ser 98 familias al día del incendio.

Puga es uno de los más antiguos del campamento, alcanzando 30 años de residencia. Y, según cuenta, su llegada se debió precisamente a la falta de oportunidades para obtener un subsidio habitacional: “Yo estuve postulando para los departamentos que están aquí cerca, puse la plata y todo, y no me salió el subsidio. Se supone que era para las personas de más escasos recursos, pero les dieron preferencia a otras personas. Ahí vive gente que tienen tremendos autos, que son de las Fuerzas Armadas. Yo digo ¿las autoridades dónde están? Yo antes del incendio me quería ir, pero como no me lo dieron, me desilusioné. Así que ahora me quedo aquí nomás”.

Antes de construir su propia casa Mario y su familia arrendaban una propiedad en las cercanías del sector y luego de la negativa para obtener el subsidio habitacional pensaron en una mejor manera de invertir ese dinero. “Dije ‘¿por qué mejor no ocupo esa plata en hacer mi

vivienda como corresponde? Y si me echan, me van a tener que sacar con subsidio o algo'. Así que construí mi casa y la fui ampliando", recuerda.

Una situación similar vivió Ingrid Morales en el campamento Mesana del cerro Mariposas. Originalmente ella y su familia también arrendaban una casa en la Avenida Alemania, donde Ingrid aprovechaba de trabajar realizando costuras en un pequeño cuarto que había construido, pero los escasos recursos que lograba reunir no alcanzaban para costear los gastos del mes. "Me vi acogotada económicamente, así que cuando una vecina me dijo que se estaban tomando los terrenos de arriba, desarmé mi cuartito de costuras y con eso me vine a vivir, porque no tenía plata para construir al tiro mi casa. Era un cuartito como de 2x2, donde llegamos con mi pareja y mis dos hijos", recuerda.

Al igual que El Vergel, otro de los campamentos más antiguos de Valparaíso es el Sor Teresa del cerro Ramaditas, que lleva también alrededor de 40 años de existencia y ha debido su expansión a la emancipación familiar de los hijos de sus fundadores. Este es el caso de la dirigente Leslie Herrera, quien cuenta cómo decidió construir su casa aquí, al igual que su abuela y madre: "Yo me fui embarazada de la casa de mi mamá y me fui a vivir a la de mi hermana, que queda al frente. Empezamos a postular a subsidios de arriendo y a ahorrar para comprar una casa, pero nunca nos resultó, porque yo era muy chica, no trabajaba y el papá de mi hijo no nos tenía de carga. Estuvimos más de un año luchando para obtener un subsidio. Buscamos opciones, pero un arriendo costaba 200 mil pesos mínimo y no teníamos los medios. Empezamos a tener problemas por estar de allegados, así que le dije a mi marido que construyéramos lo que fuera, pero que nos fuéramos para tener algo propio".

Así llegaron a vivir unos metros más arriba de sus padres, inicialmente en una casa de dimensiones 2x3 metros que construyeron. "Ahí teníamos una cama, una cocinilla y unos tarros para sentarnos, nada más. A ese extremo", recuerda Leslie. Una vez allí, los jóvenes padres insistieron en numerosas ocasiones en postular al subsidio habitacional, pero siempre recibieron resultados negativos, "así que me cansé y le dije a mi marido que no siguiéramos gastando más plata en papeles y mejor ocupáramos esa plata en construir nuestra casa como corresponde, porque nunca nos iban a dar nada". Y así lo hicieron, con el tiempo fueron consolidando su vivienda y construyendo más piezas, siempre con la idea de que si algún día alguna autoridad los

desalojaba del sitio, tendrían que otorgarles alguna solución. “Pero eso nunca pasó”, concluye la joven.

Un caso similar al de Leslie es el de la dirigente Daysi Cornejo del campamento Nuevo Amanecer en el cerro Mariposas, quien también llegó a vivir a una ocupación debido a la incomodidad que sufría junto a su familia por estar allegados en otros hogares. “Cuando yo me casé vivíamos en un comedor, no teníamos casi nada. Vivimos de allegados en la casa de mis suegros y de mis cuñados, lo que era muy incómodo”, cuenta Daysi. Ello junto a su imposibilidad de costear un arriendo, dado que sólo su marido cuenta con una fuente laboral estable, hicieron que venirse a vivir a una toma fuera su mejor opción, a pesar de los inconvenientes. “Como era de campo, del pueblo Peor es Nada, me daba lo mismo no tener agua, no tener luz, porque sentía que yo sola podía salir adelante”, consigna. Así fue como llegaron a Nuevo Amanecer, el que, según asegura su joven dirigente, es un campamento muy organizado, ya que para poder integrarse un nuevo grupo familiar a éste debe cumplir con tres requisitos: presentar certificados de antecedentes de los integrantes del clan familiar, ser de Valparaíso y estar viviendo en condición de allegado. “Como nosotros cumplíamos con todos los requisitos, nos quedamos”, cuenta.

Contrario a lo que pueda pensarse y como ha sucedido en otras ocupaciones, los vecinos del sector consolidado más próximo a la toma nunca se opusieron a la instalación de ésta, e incluso más, a lo largo de los años los han ayudado y asesorado en el proceso por la radicación, dado que ellos tuvieron el mismo origen en sus respectivos terrenos y por lo tanto conocen los trámites que se deben realizar. Además, les han permitido conectarse irregularmente a sus instalaciones eléctricas, a pesar de que ello ha generado en numerosas ocasiones daños en los transformadores por sobrecarga. “Los vecinos no se quejan porque nos conocen, son familia en muchos casos, y además que ellos empezaron de la misma forma”, explica Daysi.

Según cuenta la joven, nunca ha sentido vergüenza por vivir en un campamento, ya que explica que esto es producto de una necesidad y no del aprovechamiento o comodidad. “A nosotros nos critican por vivir en los cerros, pero si llegamos a esta situación es porque no tenemos otra alternativa con nuestros recursos, porque la mayoría de los que vivimos acá tenemos apenas cuarto medio y algunos ni eso, entonces es esto o vivir aún más con las deudas hasta el cuello”, detalla.

La lucha por la radicación

La realidad al interior de estos campamentos habitacionales “es una batalla del día a día”, según cuenta el actual director regional de “Techo Valparaíso”, Felipe Ríos. Esto debido principalmente a la privación de los servicios básicos en las ocupaciones informales, como el alcantarillado, agua potable y electricidad, por lo que los vecinos deben coordinarse diariamente para subsanar cada una de estas necesidades. “En ese sentido el capital social es gigantesco, ya que salen adelante en conjunto”, explica el voluntario. Un ejemplo de ello es que el abastecimiento de agua se realiza mediante el relleno de estanques contenedores individuales por cada vivienda, labor que se realiza la municipalidad mediante camiones aljibe y que hasta antes del incendio, según detalla el dirigente Mario Puga, se hacía con cierta irregularidad: “Antes del incendio la municipalidad nos venía a dejar agua cada 15 días, a veces una vez al mes. Ahora el municipio nos da semanalmente mil litros y si queremos mil litros más tenemos que pagar \$5.500”.

Así lo confirma también Felipe Ríos y agrega que “cuando hay crisis de agua o cuando llueve mucho y los caminos de tierra impiden el paso de los camiones, a los primeros lugares que deja de llegarles el agua es a los campamentos. Las familias quedan semanas sin agua”. El dirigente Puga reconoce que este sistema de abastecimiento es complicado, sobre todo cuando hay niños en las familias, ya que producto de lo mismo no es posible instalar *calefontes* para temperar el agua, por lo que las duchas son siempre con agua fría. Esta privación del agua se suma a la del alcantarillado, por lo que los habitantes de los campamentos deben verter sus desechos directamente a la quebrada o mediante conexiones irregulares con las redes disponibles.

A raíz de esta precaria situación, sumada a la acumulación de basura, las laderas de los cerros se han vuelto un peligroso foco de infecciones en el lugar. “Nosotros botamos nuestros desperdicios a la quebrada y eso no es higiénico. Yo a mi hijo después del incendio lo tuve tres veces hospitalizado por infecciones”, cuenta Leslie Herrera, del campamento Sor Teresa. Al respecto, la seremi de Salud de Valparaíso, María Graciela Astudillo, apunta que efectivamente esto se ha vuelto un problema en los cerros, ya que “provoca que haya mayor cantidad de

vectores, que son los ratones, pulgas, arañas, zancudos, moscas, garrapatas, etc., que afectan la salud de las personas”.

El único servicio básico que ha resultado ser de más fácil acceso para los campamentos de Valparaíso es la electricidad, ya que la empresa local, Chilquinta, ha dispuesto medidores individuales por cada vivienda en diversas ocupaciones, como es el caso del campamento Mesana del cerro Mariposas, donde se obtuvo la instalación del servicio en el año 2003, según detalla una de sus fundadoras, Ingrid Morales: “En el inicio del campamento, en el año 1995, partimos colgándonos de la luz de los de más abajo, y cuando ellos llamaban a Chilquinta nos sacaban los cables, que eran como 600 metros. Y teníamos que volver a juntar plata para reponerlos. Una vez pasaron como dos o tres veces en la misma semana. Así que optamos porque alguien avisara abajo cuando venía la camioneta y la agarrábamos a peñascazos. Hasta que logramos que Chilquinta nos atendiera y nos entregara medidores en el año 2003”.

Años más tarde en Mesana volverían a ser favorecidos, ya que luego del incendio se les instaló por error la luminaria pública “porque esa instalación iba para otro lado, pero se equivocaron de camino”, cuenta la dirigente Karina Pérez. Suerte con la que no ha contado el vecino campamento, Mesana, ya que hasta la actualidad se encuentran “colgados” a las conexiones eléctricas. Según explica su dirigente, Daisy Cornejo, desde el comienzo de la ocupación que están bogando por la instalación del alumbrado público, para lo cual existen “dos formas: que la municipalidad haga el proyecto o que Chilquinta extienda el alumbrado público y que después nosotros tengamos que dividimos parceladamente el costo”. En estas tramitaciones se encuentran actualmente y aseguran que posterior a la obtención de la luz, al igual que todos los demás campamentos, irán por la más importante y extensa de las batallas: la radicación.

La política del Minvu respecto a los campamentos define que éstos deben ser erradicados cuando los terrenos donde están emplazados no cuenten con las condiciones mínimas de seguridad debido a la existencia de factores de riesgo “no mitigables”, o bien que las obras de mitigación de estos riesgos sean más caras que el monto del subsidio habitacional disponible, o no haya factibilidad de alcantarillado. En el caso de no tratarse de una zona de riesgo o de un riesgo considerado “mitigable”, es decir, que se puede revertir mediante la realización de obras de seguridad, como muros de contención, por ejemplo, el campamento debe ser radicado en la misma zona donde se emplaza, que es el ideal por el que luchan todas las ocupaciones.

Lo anterior se debe a que, dado que es cada vez más escaso el suelo disponible para construir en Valparaíso, las soluciones habitacionales que se les ofrecen son generalmente en otras comunas de la región y por lo tanto al irse pierden sus redes de apoyo y fuentes laborales, como explica la dirigente Daysi Cornejo: “Aquí tengo mis redes, mis lazos familiares y amistosos, y si nos mandan a vivir a otro lado todo eso se pierde. Eso es lo que el Gobierno y la municipalidad no entienden, que es mucho más que una casa, es la comunidad. A mí me gusta conocer a mis vecinos, que nos cuidemos entre todos, el vivir en paz”.

Esta lucha por la radicación es un proceso extenso en el que intervienen distintos organismos del Estado: el Minvu junto con Serviu, el Ministerio de Bienes Nacionales y la municipalidad de Valparaíso mediante su Secretaría de Planificación y Dirección de Obras. Sobre este proceso, el director de “Techo Valparaíso”, Felipe Ríos, explica que contempla numerosas etapas siendo la primera de ellas más compleja para los campamentos que se ubican fuera del radio urbano definido por el plan regulador de la ciudad, ya que la ley impide construir viviendas en suelo rural o destinado a la realización de actividades productivas. Por ello, para otorgar una solución habitacional se debe partir por incluir el terreno en cuestión dentro del radio urbano mediante una actualización del plan regulador, la cual debe estar en concordancia con el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval), que es el ordenamiento superior que define el uso del suelo en toda la región.

De acuerdo a las cifras recogidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su Mapa Social de Campamentos del año 2011, en la región de Valparaíso se estima que un 68% de los campamentos se ubican en zonas donde se permite el uso habitacional, mientras que “un 28% de ellos se localiza en zonas donde no se permite el uso habitacional por estar catalogadas como zona de riesgo o por estar destinadas a equipamiento, actividades productivas, entre otras”. En la comuna de Valparaíso la zona urbana fijada en el plan regulador alcanza casi hasta el camino La Pólvora, por lo cual la gran mayoría de los campamentos no presentan esta dificultad en su proceso por la radicación.

El segundo obstáculo que deben sortear los pobladores en este proceso es la obtención del título de dominio sobre el terreno donde construyeron su vivienda, para lo cual se parte por estudiar la propiedad del sitio, es decir, si pertenecen a un privado o al Estado. Según el mismo Mapa Social de Campamentos del Minvu, en Valparaíso un “41% de los asentamientos se ubican

en terrenos privados, mientras que el 37% lo hacen en terrenos públicos”. Además “se aprecia un alto número de terrenos mixtos, es decir, donde hay uno o más propietarios público o privado”, señala el estudio. Entre los terrenos de propiedad pública la mayoría pertenece al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Bienes Nacionales y a las municipalidades de la región.

En el caso de que el terreno en cuestión pertenezca a un privado, las familias por cuenta propia tramitan su regularización a través del Ministerio de Bienes Nacionales con la aplicación del decreto de ley 2695, que favorece como poseedores de un terreno a quienes llevan más de cinco años viviendo en el mismo. Al respecto el seremi de Bienes Nacionales de la región, Rodrigo Vergara, explica que este es un proceso que se realiza de manera individual por cada ocupante, que dura en promedio 18 meses y en el cual se estudian diversas cosas, como el avalúo fiscal de la propiedad (que no puede superar las 380 UTM en zona urbana) y la identidad y dirección del presunto propietario legal, a quien por medio de una carta se le notifica que hay una persona tratando de regularizar dicho sitio y se le otorga un plazo de 60 días para oponerse. Además en medio de este proceso se le solicita a la municipalidad que extienda un certificado de riesgo, donde se detalla si la propiedad en trámite está ubicada en una zona de riesgo o no, “y de ser así, el terreno no es regularizado”, asegura Vergara.

En ese sentido, actualmente el ministerio estaría trabajando en coordinación con el municipio para “evitar generar con estas regularizaciones de terreno lo que por mucho tiempo generó, que fue la distorsión de la planificación urbana”, señala el seremi. Esto debido a que en el proceso se trabaja con los roles de las propiedades, y por lo tanto se desconoce si la ubicación física del terreno en regularización corresponde a una quebrada, ladera, área destinada a parque o a otros fines distintos a la vivienda. Y por otro lado, este mecanismo de regulación genera títulos de dominios originarios (nuevos) y no traslaticios (traspaso de un dueño a otro), por lo que “no tienen ningún tipo de limitación, por ejemplo, sobre las normas de mínima subdivisión”, explica Vergara.

Estas regularizaciones de sitios no destinados o aptos para la habitabilidad ha sido una de las críticas que se han hecho en las últimas décadas desde distintos sectores a las administraciones locales, acusando que aquello respondería a supuestos fines de aprovechamiento o clientelismo político. Por ejemplo, el diputado por la zona, Joaquín Godoy, en una entrevista otorgada al diario La Segunda el 14 de abril de 2014, manifestó que la falta de ordenamiento

territorial en la zona alta de Valparaíso no era culpa de la actual administración municipal del alcalde Jorge Castro, sino “de la ‘Era’ de Hernán Pinto, quien permitió la construcción en lugares inadecuados e inseguros, y los regularizó por razones políticas”.

Sobre esto el aludido ex alcalde Pinto explica en entrevista para esta investigación que “ahí hay un contrasentido, porque en esa época el ministerio de Bienes Nacionales no le consultaba al municipio si era posible entregar un título o no, porque no estaba establecido en ninguna parte que debían hacerlo así. Y, además, no existían instrumentos reguladores que fijaran las zonas de riesgo, por lo tanto éstas no estaban definidas”. Según agrega Pinto, “más o menos en el año 1996 recién se empieza a hacer un trabajo conjunto entre el municipio y Bienes Nacionales respecto de esto”.

De acuerdo a las cifras que entrega el seremi Vergara sobre la regularización de terrenos dentro de la zona afectada por el incendio, a la fecha se habrían entregado alrededor de 27 títulos de dominios en total mediante la aplicación del decreto 2695. No obstante, desde el campamento Mesana aseguran que en el año 2009, y a pesar de estar ubicados en zona de riesgo (bajo torres de alta tensión), se les entregaron títulos de dominio a 50 familias del campamento, los que, según explica la dirigente, Karina Pérez, “están mal dados, porque como aquí no hay una urbanización de terreno, es como que somos dueños del terreno donde vivimos, pero no podemos vivir aquí”. En efecto, la regularización de los terrenos mediante Bienes Nacionales sólo otorga la posesión del mismo y no garantiza una intervención estatal para consolidar las viviendas ni urbanizar el entorno.

Para ello, de acuerdo a lo explicado por el seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe, las familias en posesión de su título de dominio deben postular al programa de construcción de vivienda en sitio propio. En el caso de no contar con título de dominio, el Estado mediante el Minvu, Serviu o la municipalidad realiza un estudio de prefactibilidad técnica, donde se hace un catastro de todas las viviendas, un anteloteo, se estudia la factibilidad de los servicios sanitarios y se analizan las condiciones del lugar, es decir, si es zona de riesgo o no, y luego acuerda la compra del terreno con su dueño o en algunos casos especiales consigue su expropiación.

No obstante, en algunos casos que no se consigue llegar a acuerdo con el propietario del terreno ya sea por el monto económico ofrecido o porque simplemente éste no quiere vender. En estas situaciones se opta por un sitio aldeaño que resulte ser más económico o que sea de propiedad fiscal. Según explica el actual director de la Secretaría de Planificación de la

municipalidad de Valparaíso (Secpla), Tomás Ochoa, esto es un verdadero problema “porque es una negociación asimétrica: cuando el Estado le va a comprar a un privado, éste siempre lo vende a precios exorbitantes. Por ejemplo, ahora tenemos que comprar uno para la ampliación de un consultorio, un terreno que sabemos que no vale más de 40 millones de pesos, pero el dueño nos lo vende en 300”, detalla. Además, el seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe, señala que “hay sectores donde los privados han estimulado la implantación de tomas”, con el fin de presionar al fisco para la compra del sitio, por lo que se ha decidido no comprarles.

Una vez definido el lugar donde se trabajará para regularizar al campamento se procede a la creación de un proyecto habitacional financiado con recursos del Ministerio de Vivienda y con ahorros de las familias. La realización de estos proyectos contempla en primer lugar la mitigación de los riesgos en los casos que corresponda y luego el ordenamiento de las viviendas, lo que sería lo más complejo de todo el proceso según el Secpla Ochoa, debido a las exigencias legales existentes para hacer un loteo: “Por ejemplo, de acuerdo a las disposiciones, la calle tiene que medir 12 metros, cada lote no puede ser inferior a 200 metros cuadrados y el frente predial no puede medir menos de 10 metros. Pero resulta que en Valparaíso tenemos calles con anchos variables y terrenos cuyo frente predial es una puerta. Entonces en el intento de calzar con la norma no alcanzan todas las familias del campamento dentro del espacio, por lo cual quedan algunas rezagadas”.

Esto ha generado oposición al interior de algunos campamentos y ha derivado en la paralización de las gestiones durante años. Asimismo, otro elemento que ha causado el estancamiento de algunos proyectos es la falta de interés de las constructoras privadas para involucrarse en estas soluciones habitacionales. Sobre esto el director regional de “Techo”, Felipe Ríos, explica que “las licitaciones se lanzan, pero muchas resultan desiertas, porque a las empresas no les resulta atractivo participar, ya sea por la indefinición de los parámetros o porque consideran poco atractivos los montos ofrecidos por el Estado”.

Un tercer factor que ha causado el estancamiento de algunas obras es la deficiencia presupuestaria de los servicios estatales involucrados, lo cual, según Ríos, se debería a la relegación de las familias de campamentos, ya que “éstas siempre se han visto estigmatizadas como familias que no tienen mucha incidencia política, ni influyentes, ni votantes, por lo que en Viña y en Valparaíso los recursos desde hace muchos años se han enfocado prioritariamente en el

centro de la ciudad y cuando se debe hacer algún recorte presupuestario la primera opción siempre es restar de los recursos destinados a los proyectos de campamentos”. Este es el caso del campamento Sor Teresa del cerro Ramaditas, donde su dirigente, Leslie Herrera, asegura que desde el comienzo de la ocupación diversas autoridades del municipio y la gobernación les han prometido la ejecución de un mismo proyecto en el sector:

“Durante los 40 años que lleva la población nos han dicho que viene un proyecto para construimos edificios. Acá ha estado Pinto y Castro, y ambos nos han venido a mostrar los planos del mismo proyecto, casas bonitas, y nos dicen que para el otro año sale. Hace como cinco años nos dijeron que el proyecto estaba listo, que salía sí o sí. Empezaron a urbanizar, pero quedaron en las puras luminarias y se pararon las obras, supuestamente, por falta de recursos en ese momento. Pero nos aseguraron que al otro año terminaban, y no pasó nada. Después, a los seis meses del incendio, empezaron a hacer prueba de suelo, y ahí quedó de nuevo. De eso ya han pasado dos años y medio, y ni siquiera han puesto una piedra”.

En el caso de Sor Teresa los terrenos donde están ubicados pertenecen a la municipalidad de Valparaíso, luego de haber sido expropiados a su dueño posterior al incendio. Según asegura su dirigente, las autoridades les habrían confirmado que el terreno estaba apto para ser edificado, por lo que sólo faltaría contar con los recursos para la ejecución del proyecto. “La municipalidad creo que estaba trabajando con Serviu en este proyecto, pero en Serviu cuando me han atendido me dicen que la municipalidad es la que extiende los permisos de edificación. Yo pido reuniones con ellos, pero no me reciben, entonces no puedo saber qué es lo que pasa”. Sobre esto el seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe, confirma que la paralización de la obra se debe efectivamente a una “caída presupuestaria global del proyecto”, pero que se está en conversaciones con la empresa constructora para encontrar alguna solución. De esta forma algunos campamentos tardan años en ver terminados sus proyectos y otros aún están a la espera de que llegue su turno para la integración formal a la ciudad.

EL HISTÓRICO FOCO DE INCENDIOS

Todo jugando en contra

El megaincendio de Valparaíso es recordado -debido a las pérdidas humanas y materiales que generó- como el peor en la historia de Chile y de Valparaíso, lo que adquiere particular relevancia en una ciudad que destaca por ser víctima constante del fuego. Sin ir más lejos, un año antes de la tragedia, el 23 de abril de 2013, los cerros La Cruz y Mariposas habían sido afectados por otro incendio forestal que consumió alrededor de 45 hectáreas y más de 30 viviendas del lugar. Y sólo dos meses antes de éste, el 14 de febrero de 2013, había tenido lugar otro que destruyó otras 284 viviendas en el sector de Rodelillo y Placeres y que dejó más de mil personas damnificadas y 50 heridos. Asimismo el 14 de enero de 2008, cuando se incineró nuevamente parte del cerro La Cruz, destruyendo un total de 70 viviendas y cobrando la vida de cuatro personas, entre ellas un bombero. Esta tendencia a generar siniestros ha sido causada por diversos factores naturales presentes en la zona, siendo algunos de ellos agravados a lo largo de los años por la intervención antrópica.

El primero de ellos tiene que ver con la alteración del clima, ya que Valparaíso al estar situado en la zona central de Chile no posee un clima naturalmente caluroso ni una vegetación autóctona ignífuga, sino que presenta un clima templado mediterráneo con estación seca prolongada y vegetación originaria resistente al fuego. Pero han tenido lugar ciertas situaciones que han aumentado la sequedad y erosión del territorio, como el precedente ancestral al que hace referencia el experto Miguel Castillo: “Los bosques de Chile central estaban preparados para el fuego, pero en períodos alejados de ocurrencia. El problema fue que con el cambio en el uso del suelo por parte de los colonizadores y la posterior civilización, que quemaba los cerros para la instalación ganadera y agrícola, se generó una fragmentación acelerada de estos paisajes, provocando que las especies vegetales autóctonas cambiaran su estructura, cobertura, altura, sobrexposición y su velocidad de recuperación ante la quema. Es decir, ésta no es una zona naturalmente ignífuga, pero el hombre aceleró los patrones de incendio y la vegetación tuvo que reaccionar ante ello para sobrevivir”.

Una segunda alteración climática la traería el fenómeno denominado “calentamiento global”, el cual provoca que aquellas estaciones secas se estén volviendo cada vez más intensas y duraderas en el tiempo, incrementando así la erosión y desertificación del suelo. A esto apunta el arquitecto y docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Mauricio Puentes Riffo: “Antes marzo era el mes más seco, ahora es abril, después será mayo. Y cada año la estación seca se va haciendo más prolongada, lo que significa que el suelo con su cobertura tiene cada vez más capacidad para retener al fuego”.

Adicionalmente, en el período estival Valparaíso cuenta con la presencia del “viento sur”, como denominan los porteños a aquel vendaval proveniente del sector de Laguna Verde -ubicado a 15 km- y que sopla durante varios días en la cresta de los cerros, contribuyendo aún más a la desertificación del lugar. Pero lo que lo vuelve más peligroso es la inusitada fuerza que posee, ya que alcanza una velocidad superior a los 30 nudos (55 kilómetros por hora) con la que pone a prueba la fortaleza de todo lo que se cruza a su paso y se alza como un enemigo nefasto cuando se intenta combatir un incendio, pues aviva las llamas y las conduce a su antojo.

Este viento y la sequedad en la zona vuelven propicia la formación constante de focos de incendios, siendo crítica la situación en los meses más álgidos del año, y ha derivado en que Valparaíso tenga prácticamente una marca registrada como consigna de alerta, según cuenta el Jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ricardo Valdés: “Los organismos de emergencia, que ya somos camaradas, hemos patentado el “3-30”: cuando en un día se presentan 30° de temperatura, 30% de humedad ambiente y 30 nudos de velocidad del viento, sabemos que vamos a tener problemas y nos alistamos”. En efecto el “3-30” hizo gala el día del megaincendio, pues estos tres índices de alerta fueron alcanzados e incluso sobrepasados, creando el contexto perfecto para que se generara y propagara un incendio.

A los factores naturales que facilitan la formación de fuego se suman ciertas disposiciones urbanas que tienen que ver con la forma de expansión histórica que ha tenido Valparaíso, la cual, como hemos visto, ha sido desde siempre espontánea, conducida por sus habitantes y fomentada por la pobreza. Desde la cota 100 de los cerros (cien metros sobre el nivel del mar) hacia arriba, en su gran mayoría la urbanización ha sido precedida por tomas de terreno y la posterior instauración de campamentos habitacionales, como lo detalla Juan Purcell Fricke en su libro *Visión de Valparaíso 1953 – 2011*: “la periferia ha persistido en una movilidad,

haciéndose hacia los límites de la ciudad a partir de los emplazamientos. Estos, en muchos casos informales, han trazado -a veces de manera burda y desde la emergencia- el tejido urbano que será luego asumido por la ciudad cuando la periferia haya avanzado a otro nuevo límite”.

Este crecimiento inorgánico ha ocasionado, entre otras cosas, la peligrosa aproximación de las viviendas al denso bosque ubicado en las afueras de la ciudad, aumentando de esta manera la probabilidad de que se genere un “incendio de interface”, como denomina Bomberos a aquellos donde hay un tiempo muy breve para que el fuego pase del bosque a las casas, es decir, para que de un incendio forestal se transforme en uno estructural, como sucedió en la tragedia que motiva esta investigación. Según recuerda el comandante Gagliardo: “Cuando yo entré a Bomberos, en el año 1972, teníamos 30 minutos para llegar antes de que un incendio pasara del bosque a las casas; ahora tenemos dos minutos”.

Asimismo, debido a que la población periférica en su gran mayoría posee un escaso poder adquisitivo, estas viviendas junto con emplazarse en una zona riesgosa, son construidas con materiales ligeros y sin las adecuadas medidas de mitigación de riesgos que exige la ley, como la distancia mínima y elaboración de muros cortafuegos entre las propiedades, lo cual en presencia de un incendio vuelve muy complicado impedir el paso del fuego desde una propiedad a otra o bien salvar una vivienda cuando ésta ya ha sido alcanzada por las llamas, dado el escaso tiempo que tardan los materiales ligeros en consumirse.

Según apunta el doctor en Arquitectura, Mauricio Puentes, este incumplimiento con las normas de construcción también se debe a la inaplicabilidad en Valparaíso de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de Chile (OGUC), que establece los criterios para construir en una ciudad, como anchos de calles, pendientes máximas admisibles, ángulos de rasantes, entre otras. Según Puentes: “Valparaíso es muy particular en cuanto a su topografía y por lo tanto aplicar la norma general es prácticamente imposible. Si Valparaíso cumpliera con la norma, no podría existir. Y eso es culpa de la norma que no reconoce las particularidades topográficas del territorio. Por ejemplo, la ley exige un 12% de pendiente máxima para construir y en Valparaíso todas las pendientes tienen más que eso. Chile tiene un sistema legal tan centralizado que la ordenanza no permite las particularidades”.

Precisamente la ubicación, estrechez e incluso inexistencia de caminos en el lugar fue uno de los principales entorpecedores para la labor de los servicios de emergencia ante algún evento,

según cuenta el comandante Gagliardo: “En Valparaíso las calles son muy estrechas, y más encima si se le está quemando la casa a uno, llegan diez primos con diez autos y los estacionan donde pueden. Así el carro bomba no puede pasar y el carro cisterna no puede maniobrar, entonces hay una serie de cosas que se complican”.

Junto con ello, el encargado Valdés, apunta al mal mantenimiento de las cuatro vías que conectan el centro de la ciudad con la zona alta, que bien podrían subsanar esta deficiencia: “Tenemos cuatro caminos transversales a la pólvora: Las Torres, que llega a Rocuant; El Vergel, en el cerro La Cruz; Mesana, en el cerro Mariposas; y Violeta Parra, en el cerro Yungay. Todos llegan al plan. Entonces, yo presenté un proyecto en la Secpla que consistía en limpiar estas vías y repararlas para mantenerlas en buena forma. Costaba 35 millones de pesos, pero ocurre que en la zona alta de estos caminos los terrenos pertenecen a privados y por lo tanto no se pueden invertir dineros públicos en ellos”.

Otro obstáculo ante alguna situación compleja lo provoca la lejanía entre los sectores más vulnerables y los servicios de emergencia y hospitalarios. Por ejemplo, la distancia entre Bomberos y la zona alta de Valparaíso en 2013 alcanzaba en promedio los 2.488 metros, según un estudio realizado por “Techo Chile” en la región. Además, y como si fuera poco, el día del megaincendio quedó en evidencia a la falta de agua que presenta el sector, lo que impidió nuevamente el accionar de Bomberos. Esta carencia se vincula a dos cuestiones: la inexistencia de las conexiones sanitarias en los campamentos, dada su condición, y el mal mantenimiento que presentaban los grifos cercanos el día de la tragedia, pues algunos estaban secos y otros manipulados.

A ello apunta el profesor de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla: “Hay una entidad que tiene una responsabilidad tremenda en lo que pasó por no disponer del insumo necesario para combatir el incendio, que es el agua. El encargado de ello es la empresa sanitaria –Esval-, que es privada. Ellos arguyen que no tienen la obligación legal de tener surtidos los grifos con agua las 24 horas del día, pero es una obligación moral”. También en esto, como señala Valdés, jugó en contra la altura. “El problema con los grifos fue la pendiente. Los grifos siempre van por una red y por la presión sólo respondió el primero de ellos porque ya se estaban sacando miles de litros de agua de él”, explica. Frente a esta carencia hídrica, los

pobladores se las ingeniaron para sacar agua de un pozo ubicado en las cercanías y lanzarla con baldes hacia las llamas.

Por último, un agravante adicional en el incendio fue la acumulación de basura en las laderas de los cerros, la cual, además de generar focos infecciosos y plagas de ratones, sirvió como un nuevo combustible para el fuego. En 2009 Conaf y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), firmaron un convenio para la erradicación de microbasurales, en el marco del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV). El objetivo principal, según se describe en el documento de presentación del proyecto, apuntaba a “la limpieza integral general y eliminación de microbasurales y una campaña de comunicación para mejorar los hábitos de manejo de residuos por parte de la población”.

Según datos entregados por Ciper en su reportaje “El historial de negligencia y corrupción que hizo arder a Valparaíso”, publicado el 16 de abril de 2014, originalmente fueron destinados \$1.779 millones para la ejecución de este programa, pero sólo se utilizaron \$780 millones, con lo que se lograron reconvertir 102 microbasurales. El resto de recursos fueron redestinados a “acciones de mayor visibilidad”, como “la remodelación del Museo Baburizza en el Cerro Alegre, y la reparación y compra de ascensores”, consigna el reportaje.

De este modo, y pese al trabajo realizado, al 2014 existían alrededor de 200 microbasurales que albergaban 300 mil toneladas de basura, lo que es originado por los mismos habitantes del lugar, quienes se escudan en la baja frecuencia con la que pasa el camión recolector del municipio o de lleno la inexistencia del servicio. Aunque también, según denuncian los pobladores, son ocasionados por depósitos acarreados de manera masiva en vehículos particulares e incluso municipales para ahorrarse el dinero que se les cobra en un vertedero autorizado.

En relación a ello, un año antes de la tragedia, el 3 de mayo de 2013, se emitió una denuncia en el programa “Tu voz local” del canal regional Quintavisión, sobre un vertedero ilegal de basura y escombros generado en sector de El Vergel, cuestión que fue constatada en terreno por el senador Ricardo Lagos Weber en el marco de la campaña “Yo limpio mi ciudad”, impulsada por el Comité Ecológico de Valparaíso (Coeval). En la transmisión televisiva, el presidente del Centro Comunitario Las Cañas, Mauricio Salazar, aseguró que “nosotros hemos hecho campaña, sacado fotos, tenemos videos en el *facebook* del Centro Comunitario Las Cañas,

en el cual encontramos a camiones municipales botando basura en el lugar. Es un vertedero de la municipalidad”. Mientras que el presidente del Coeval apuntó los dardos a las empresas inmobiliarias: “son empresas constructoras las que vienen a botar basura acá para evitarse el cobro en el vertedero El Molle”. La nota cierra consignando que “la situación es riesgosa y propicia para incendios, más aún cuando existen casas cercanas, pero una forma de evitar y aminorar dichos riesgos es con cortafuegos y limpieza de quebradas, en este caso, de suma urgencia”.

Toda esta sumatoria de disposiciones urbanas creó un cuadro perfecto para que la ciudad se viera totalmente vulnerable ante la inclemencia de las llamas y los habitantes del lugar no tuvieran más opción que evacuar sus barrios y viviendas, sin lograr rescatar otra propiedad más que la vida. Pero es tiempo ya de abordar aquello que albergó el comienzo del fuego y que brindó al mismo la potencia devastadora que le permitió arrasarse con todo a su paso: el bosque.

El bosque: una bomba de tiempo

Cada cierto tiempo Conaf junto al equipo de Emergencia de la Municipalidad realizan visitas a los grandes fundos privados de Valparaíso para evaluar la existencia y mantenimiento de los caminos internos, vías de acceso, cortafuegos y el cercado del predio para evitar la formación de microbasurales en su interior, según cuenta el encargado Valdés: “nosotros estamos permanentemente vigilando que esto se cumpla, la última inspección la hicimos hace dos meses en el Fundo Las Cenizas”, detalla, y agrega que “últimamente se ha tomado más conciencia sobre este tema”.

Lo anterior debido a que el día del megaincendio los cinco predios privados comprometidos, como se ha señalado, se encontraban en deplorables condiciones arrastradas desde hace décadas, según confirma el Jefe del departamento de fiscalización y evaluación ambiental de Conaf Valparaíso, Leonardo Möder: “Hay propietarios de estos predios que los tienen mantenidos por muchos años con una administración ausente. Incluso más, yo podría decir que algunos de los predios están en el abandono”. Aunque ésta no es una deficiencia exclusiva de las propiedades privadas, sino que existen terrenos de propiedad fiscal que se encuentran en iguales o peores condiciones, a pesar de lo peligroso que resultó ser esto para la ciudad.

Pero más allá de estas cuatro disposiciones, Conaf no cuenta con facultades legales para exigir una participación más enérgica de sus propietarios en el cuidado de los fundos: “En el Estado de Chile no hay ninguna ley que imponga algún tipo de manejo a un predio, por lo tanto la Conaf no tiene facultades legales para establecer medidas obligatorias para los dueños de predios que se encuentren en la zona de interface. No es como en Europa, donde si tú dejas un predio en abandono, el Estado te cobra un mayor impuesto”, explica Möder. La solución que propone la autoridad forestal para este problema es la reconversión silvocultural del bosque, es decir, volver a la vegetación nativa “cuando fueron plantadas las especies exógenas a lo mejor no era una mala idea en ese entonces, porque había más agua y lluvia, pero en este contexto de sequía en el sector y cambio climático, es necesario volver a las especies nativas”, asegura.

El origen de estas plantaciones se vincula al de la propia Conaf, ya que ésta fue concebida originalmente como una corporación destinada a “contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”, es decir, entre sus objetivos figuraba aportar al incremento de las plantaciones en Chile. Valparaíso al estar en la costa ofrecía una humedad favorable para el crecimiento de estos bosques, por lo que se decidió crear una empresa privada con patrocinio estatal mediante Conaf: la Forestal Valparaíso.

La primera tarea de esta alianza público-privada fue reemplazar el bosque autóctono por eucaliptus, una plantación de origen australiano que destaca precisamente por su afinidad con el fuego, como explica el profesor Puentes: “El eucaliptus es introducido desde Australia y en ese país los bosques al ser perennes y no caducos generan un suelo de hoja ácida, a diferencia del bosque nativo que genera un suelo muy fértil que permite que broten otras especies. Como generan este suelo ácido y los árboles necesitan renovarse de alguna manera, lo hacen naturalmente con el fuego, por eso es un bosque ignífugo; le gusta el fuego porque con él se renueva”. Además de ello, esta plantación presenta un comportamiento pirotécnico frente a las llamas, como explica el ingeniero forestal Miguel Castillo: “el eucaliptus tiene un comportamiento distinto al pino frente al fuego, porque tiene muchos aceites naturales, por lo que en presencia del fuego, se enciende muy rápido y enseguida literalmente explota”.

Luego de plantar masivamente la vasta zona de Peñuelas, el bosque fue abandonado por falta de competitividad con la madera del sur, donde los árboles estaban listos para ser procesados en 7 años mientras que en Valparaíso tardaban 25. De este modo, la Forestal

Valparaíso dio paso a la venta de los terrenos y los que no consiguió vender fueron quedaron en los remanentes que aprovecharon algunos latifundistas, como es el caso del fundo El Pajonal. “Esos son fundos privados que fueron forestados con recursos del Estado y que después nadie los desforestó, ni se hizo un manejo del bosque. Entonces ahí hay una desidia producto del abandono”, consigna Puentes. Así, mientras la ciudad crecía inorgánicamente hacia el bosque, éste también se acercaba hacia ella, con toda esa carga calórica encima y sin ningún tratamiento interno.

Esto explica por qué la comuna de Valparaíso está cubierta en un 30% de su superficie total por plantaciones forestales y que sea la segunda región de Chile con más incendios de este tipo entre 1976 y 2015, alcanzando un total de 36 mil 462 siniestros y 310 mil 505 hectáreas quemadas, según los registros históricos de Conaf. No obstante, a pesar de ser superada por la región del Bío Bío en este índice, es sin duda la comuna y región del país que obtiene los peores resultados ante estos eventos, dada la escasa cercanía entre el bosque y las viviendas, como precisa el ingeniero Miguel Castillo: “la complicación es que los terrenos involucrados son muy cercanos al área urbana, por lo tanto los incendios, aunque sean más pequeños, resultan ser más graves por las pérdidas materiales y humanas que generan”.

Según Castillo, la complejidad para dar una solución al problema que genera el bosque radica en el alto costo que significaría la deforestación del mismo: “La premisa de cortar todo es impracticable y es carísimo, escapa a cualquier presupuesto”. Ante ello el docente propone un manejo del bosque que permita “bajar la carga de combustible de manera de no generar un cortafuego, sino un cortacombustible, es decir, un cambio gradual en combustible liviano en las cercanías de las casas y a medida que se va alejando ir aumentando la carga hasta llegar al bosque nativo”.

Además del cuestionado mantenimiento de los bosques, otra situación de riesgo resulta del no cumplimiento de las labores de limpieza en los cerros donde, además de la basura, se hayan toneladas de maleza. En relación a ello, Conaf todos los años emite en cada región del país un oficio donde se aconseja a las autoridades locales sobre las medidas preventivas para disminuir los riesgos de incendios forestales en el período estival. En el caso en cuestión, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Conaf (Fenasic), Daniel Ariz, aseguró a El Mostrador un día después de la tragedia que las sugerencias de Conaf para Valparaíso en aquel entonces eran “construir cortafuegos y erradicar microbasurales. Sin

embargo, y como ha sido la tónica de los últimos años, nada se hizo, aduciendo falta de financiamiento. Tal vez con el manejo de la vegetación, la limpieza de quebradas y la confección de cortafuegos no se habrían quemado tantas viviendas”.

No obstante, al ser consultado al respecto el Jefe de Emergencias de la municipalidad apuntó que la complicación para atender estas sugerencias de Conaf nuevamente se debe a la propiedad de los terrenos: “No es nuestra responsabilidad dar respuesta a esto porque, según lo que indica Conaf, a nosotros nos correspondería desmalezar como 70 km lineales de terreno, pero de esos, cien metros pasan por espacios públicos, todo el resto son privados. Meto maquina ahí y mañana estoy en sumario. Entonces ahora estamos trabajando con la comunidad: ellos desmalezan y nosotros recogimos la basura. Así lo hemos hecho lo último cuatro años”.

A este riesgo e indefensión que presenta Valparaíso frente a los incendios forestales se suma otro que dice relación con los deslizamientos de tierra o remoción en masa generados luego de la lluvia, que atentan directamente contra las deficientes construcciones ubicadas en las laderas y cercanías de las cuencas hidrográficas. Sobre esto el encargado Valdés explica que “la ley indica que a 50 metros de la cuenca no se puede construir, y aquí tenemos gente viviendo en la cuenca misma. Cortan el talud del cerro y se fabrican una meseta para construir su casa. Ese corte es nefasto, porque al producirse una lluvia mayor, las aguas se sumergen en la tierra, como una esponja, y cuando termina la tormenta y sale el sol, el agua se evapora y la tierra queda con esos hoyitos, provocando los deslizamientos”.

La única manera de contar con mayor seguridad frente a este fenómeno es realizando en cada construcción las medidas de mitigación de riesgos que sugiere la ley, como muros de contención, pero nuevamente aquello se ve impedido por el escaso poder adquisitivo de la población que se asienta en estos lugares. Ello se ha intentado subsanar con iniciativas surgidas desde la municipalidad, según cuenta Valdés: “En el 2006 yo era director de operaciones y el alcalde Cornejo pidió un fondo especial para hacer obras de mitigación en forma de subsidio para esa población. Llegó a una instancia más alta y dijeron que no, porque no se puede invertir en privados. Y se acabó”.

Estos dos grandes riesgos que amenazan a Valparaíso y su gente han sido objeto de estudio desde hace años por distintas áreas del círculo académico y de los organismos de

emergencia, dando lugar a numerosos estudios al respecto. Entre ellos, habían algunos que advertían con sorprendente precisión sobre la alta probabilidad de que un desastre como éste ocurriera, como es el caso del que integró en 2010 el ingeniero forestal y doctor en Recursos Naturales y sostenibilidad, Miguel Castillo, titulado “Estudio de análisis de la vulnerabilidad de áreas urbano-forestal desde el punto de vista socioeconómico y el impacto de los incendios forestales, una aplicación a la provincia de Valparaíso, Chile”.

En este estudio se determinó el grado de vulnerabilidad que presenta el sector medio y alto de Valparaíso ante un incendio forestal, contemplando tres variables de análisis: “Riesgo (probabilidad de iniciación de incendios); Peligro (conflictividad en la propagación de los eventuales incendios que se originen); y Daño Potencial (pérdidas e impactos que podrían generarse con la propagación del fuego)”⁵. La conclusión que obtuvo Castillo y su equipo fue una alarmante predicción: “Los sectores de mayor riesgo, señalados en el orden oeste-este corresponden a Playa Ancha, Cerro Mariposas, Monjas, La Cruz, Las Cañas, Florida, Merced, La Virgen, Ramaditas, Las Zorras, Rodellillo, Placeres y Esperanza”⁶.

A similar conclusión llegó el ya aludido académico de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso y Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Uriel Padilla, en su tesis doctoral “Análisis de la vulnerabilidad por remoción en masa e inundación. Caso de estudio: cuencas de la ciudad de Valparaíso”, presentada en abril de 2012, exactamente dos años antes de la tragedia.

En este trabajo el docente definió diez cuencas hidrográficas que confluyen en el centro de la ciudad y en función de sus características físicas, sociales y ambientales las ponderó con un grado de riesgo ante estos eventos, desde “muy alto” hasta “bajo”. Y concluyó que las personas más vulnerables, es decir, aquellas con menor poder adquisitivo, habitantes de una vivienda de material ligero, con deficiente accesibilidad a los servicios básicos, y localizada en zonas de alta peligrosidad, estaban en una situación de riesgo mayor ante un desastre natural. De esta forma, el

⁵ Rodríguez y Silva, Francisco; Alvear, Guillermo; Castillo, Miguel; Molina, Juan; Cerda, Claudia; Toral, Manuel; Herrera, Miguel Ángel; González, Luis Alberto. “Estudio de análisis de la vulnerabilidad de áreas urbano-forestal desde el punto de vista socioeconómico y el impacto de los incendios forestales. Una aplicación a la provincia de Valparaíso, Chile”, pág. 21.

⁶ ídem, pág. 41

estudio determinó que la Cuenca N°8, contenedora de los cerros Rocuant, San Roque, Santa Elena, O'Higgins, La Virgen y Ramaditas, entre otros, presenta un riesgo "muy alto" o "rojo".

Lamentablemente el tiempo les dio la razón a los profesionales: cuatro y dos años después de sus respectivas publicaciones, el incendio causó estragos en las zonas señaladas, siendo que estas mediciones -aseguran- fueron conocidas oportunamente en su momento por distintas autoridades locales y centrales. En el primer caso, el docente Castillo asegura que esta información se hizo llegar a Conaf y las municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar; mientras que el profesor Padilla presentó su trabajo a personal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Dirección de Asistencia Técnica de la Municipalidad de Valparaíso. Luego de ello, realizó también una segunda presentación frente al Colegio de Arquitectos de la región y al año siguiente frente a la Cámara Chilena de Construcción.

Es decir, diversos organismos sensibles a la materia estaban en conocimiento desde hace años de la situación de riesgo en la que vivía y vive aún la población más vulnerable de Valparaíso. La excusa recurrente que han entregado las autoridades locales para no realizar las transformaciones urbanas necesarias que permitan dar una mejor respuesta ante estos eventos, es siempre la falta de recursos económicos, algo real, pero que tiene su origen en diversas causas.

IV

EL SAQUEO Y EL OLVIDO

El abandono de Valparaíso

La pobreza de los habitantes de Valparaíso es un fiel reflejo de las malas cifras económicas que presenta la ciudad desde hace décadas, las que se han ido gestando y agravando producto de diversos acontecimientos históricos. El primero de ellos fue el terremoto y posterior tsunami de 1906 que causó la destrucción casi total de la ciudad y la consecuente interrupción del vanguardismo que caracterizó a Valparaíso durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este desastre, además de agudizar la deficiencia habitacional que ya arrastraba la ciudad, dio comienzo a la fuga de los grandes oligarcas e inversionistas que pujaban el progresismo. Empresarios, banqueros, comerciantes, industriales, entre otros, emigraron de Valparaíso junto a sus familias y servidumbre hacia Santiago o la ciudad vecina Viña del Mar para aprovechar la iniciativa inmobiliaria que allí se estaba gestando bajo el alero de la familia y corporación Vergara.

El objetivo era construir la “Ciudad Jardín”, una disposición urbana ordenada, de grandes calles y veredas, con viviendas aisladas y patio alrededor, estilo *chalets*, algo que Valparaíso evidentemente no podía ofrecer. “Esto era muy pretencioso y demandado por las familias con recursos que ya no querían el hacinamiento que ofrecían los cerros”, apunta el arquitecto y docente Mauricio Puentes. De este modo, las familias con mayores recursos económicos dejaron sus emprendimientos y viviendas, y las alquilaron por habitación a un alto precio, dando paso por un lado a la tugurización de la vivienda y por otro al primer gran abandono de Valparaíso: el privado.

Un segundo embiste económico llegaría sólo ocho años más tarde, en 1914, con la apertura del Canal de Panamá, lo cual significó la pérdida de protagonismo de la “Joya del Pacífico” en el comercio marítimo internacional al dejarla fuera de ruta. Ello fue un duro golpe para una ciudad que basaba su desarrollo en la actividad mercantil y el comercio, sector

económico que años más tarde recibiría un nuevo debilitamiento como polo de desarrollo para la ciudad, debido a la modernización o mecanización del puerto y la consecuente supresión de fuentes laborales que ello significó. Se estima que la proporción de mano de obra en el puerto es un trabajador de hoy por cuatro de aquella época.

Pero era Valparaíso de aquel entonces una ciudad que contaba con fuerte amparo estatal que se veía reflejado en la ejecución de importantes inversiones públicas como, por ejemplo, la construcción en 1917 del molo de abrigo, que es un rompe olas que facilita la carga y descarga de buques al impedir el movimiento y el golpeo de la embarcación contra el muelle. En las décadas siguientes, gracias también a los importantes liderazgos políticos con los que contaba la ciudad, como Salvador Allende, Luis Corvalán, Radomiro Tomic, Luis Bossay, Pedro Ibáñez, entre otros, se consiguió continuar con este apoyo estatal, implementándose iniciativas como el Plan Intercomunal de Valparaíso (PIV) en 1965, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Según describe el arquitecto y urbanista, Iván Poduje, en su texto “Valparaíso a la deriva Auge y caída de una ciudad de vanguardia”:

“El PIV delimita las zonas residenciales e industriales de dichas comunas, regula los usos del borde costero y propone una nueva red vial para conectar las zonas portuarias, industriales y residenciales del área metropolitana. De acá surgen ideas que tendrían gran incidencia en el futuro de la región, como la vía elevada en Avenida España, la circunvalación La Pólvora – Las Palmas – Ruta 60 o un nuevo acceso por Cabritería destinado a potenciar una futura expansión portuaria hacia Yolanda y Caleta Portales”.

Junto con ello, importantes empresas tenían sus faenas en la ciudad, como la Compañía Sudamericana de Vapores, Compañía Chilena de Tabacos, Carozzi, galletas Hucke, conservas Aconcagua y empresas del rubro mecánico, entre otras. Estas contaban con gruesas cifras gracias a la estrategia económica proteccionista a la manufactura local vigente en la época. “Había un desarrollo manufacturero importante porque el sector estaba protegido, es decir, si alguien quería importar algo de otro lado, el arancel moda era el mismo valor del producto. Por ejemplo, si éste valía \$100, se pagaban otros \$100 de arancel”, detalla el doctor en Economía, Alejandro Corvalán, actual Director de Pro Chile en la región.

Con la instauración de la dictadura cívico-militar del año 1973 se implantó un cambio de estrategia económica, pasándose del sistema de sustitución de importaciones a uno neoliberal o de libre mercado, que suprimió todas las protecciones a la industria local. “Esa apertura trajo un impacto directo que se refleja en que al año ‘60 el PIB regional de la manufactura era del 43%, o sea, dentro de la estructura económica regional era altísima. En el 2010 era del 20% aproximadamente. Y hoy la cifra no supera el 14 ó 15%”, precisa Corvalán.

Esta transformación significó el golpe de *knock out* para la región de Valparaíso, ya que las industrias que habían logrado subsistir a la crisis del ‘70 no tenían la capacidad para competir en este nuevo escenario y, en ese sentido, la cercanía de Valparaíso con la capital comenzó a jugarle en contra. Algunas empresas locales desaparecieron y otras emigraron hacia el centro de consumo ubicado en Santiago, según precisa el también doctor en economía y concejal de la comuna, Iván Vuskovic: “Tener empresas emplazadas en otras regiones para prestar servicios en Santiago no era muy conveniente del punto de vista económico. Por eso todas las empresas se retiran de esta ciudad hacia la capital con el fin de ser más competitivas”. Junto con ello, y en la misma lógica del modelo, todo el robusto cuerpo estatal se contrajo, lo que significó la reducción de los recursos presupuestarios para sus reparticiones, inversiones y planificaciones estratégicas en todas las regiones y ciudades de Chile, lo cual fue sentido con mayor crudeza en las zonas complejas como la ciudad puerto. De esta manera se dio paso al segundo gran abandono de Valparaíso: el público.

Esta reducción presupuestaria, irónicamente, vino aparejada al traspaso de mayores responsabilidades a las municipalidades, como la administración de la educación pública y la atención primaria de salud, lo cual fue generando un endeudamiento progresivo que hasta el día de hoy la Ilustre Municipalidad de Valparaíso no consigue revertir. Una prueba de ello es la abultada deuda que mantuvo durante años la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) con los profesores de las escuelas públicas por concepto de cotizaciones previsionales, la cual ascendía en 2015 a 15 millones de dólares, según cifras entregadas por el concejal y presidente de la Comisión de Finanzas de la Municipalidad de Valparaíso, Iván Vuskovic, quien explica el origen de este déficit de la siguiente forma: “Si consideramos solo en educación, dado como está hecho el tema estructuralmente, para pagar los sueldos se necesitan 200 millones adicionales a los que nos pasa el ministerio, y sin pagar las cotizaciones previsionales. Pagando las cotizaciones

son 500 millones. Entonces en total son 6 mil millones al año de desfalco que genera la educación municipal”.

Con el retorno a la democracia se evidenció el mal pie en el que quedó la ciudad luego de la dictadura, alcanzando un alto nivel de pobreza y desempleo. Según señala el doctor Corvalán, “en los ‘90 había estudios que decían que en esa época en Valparaíso no había población ABC1, lo que en términos sistémicos quiere decir que una ciudad completamente habitada sólo por pobres está condenada a morir”. La intervención estatal más potente llegaría en el gobierno de Ricardo Lagos, donde se seleccionó a la ciudad para la ejecución del plan Bicentenario. En el marco de esta iniciativa, según detalla el arquitecto Poduje en su ya citado texto, se concesionó el puerto, se construyeron las autopistas y el Metro Regional, se creó un terminal de cruceros en un área ocupada por bodegas y se propuso una reconversión parcial del borde costero, transformando en paseo el antiguo muelle Barón.

Además de estas inversiones se consiguió el nombramiento de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el 2 de julio de 2003, reconocimiento que permitió acceder a un crédito del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) por cerca de US\$73 millones destinados a recuperar las zonas patrimoniales deterioradas. Para este efecto se elaboró el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), el cual comenzó su ejecución durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

El PRDUV tenía como objetivo fundamental “contribuir a la revitalización de la ciudad de Valparaíso, poniendo en valor el patrimonio urbano como fundamento de nuevas actividades económicas y sociales, que beneficien a la población”. Para ello se definieron cuatro ejes de trabajo, focalizados primordialmente en el centro de la ciudad, su casco histórico y los cerros más emblemáticos. Estas cuatro líneas de trabajo eran: Recuperación Urbana, destinado al mejoramiento de vías, espacios públicos, recuperación de bienes inmuebles públicos y privados (ascensores, edificios simbólicos, viviendas, etc.), y al equipamiento de la ciudad para el retiro de residuos sólidos y control de plagas; Desarrollo Económico y Socio-cultural, destinado a promover la inversión y la puesta en valor del patrimonio; Desarrollo Institucional de la

Municipalidad de Valparaíso, orientado a reorganizar y fortalecer al municipio; y Comunicación y Participación, dirigido a diseminar información referente al Programa en la ciudad⁷.

Sin embargo, esta gran inversión pública no generó un cambio sustantivo en la realidad local, debido, a juicio del concejal Vuskovic, a la negligente implementación del proyecto. “Yo tengo la idea de que ahí se malgastó mucha plata. Se contrataron especialistas que venían a Valparaíso para hacer estudios de las cosas más inverosímiles, y no se concluyó ninguna obra concreta, real, factible. Se recuperó en parte el museo Baburizza y se hicieron otras inversiones, como en el aseo, pero no existe ninguna gran obra del PRDUV que podamos reconocer. Nada contundente, nada significativo”, asegura.

En efecto, en un estudio encargado por la Subdere a la empresa consultora MG para evaluar los resultados del programa, se concluyó que de las 94 iniciativas programadas originalmente sólo 47 finalizaron todas sus etapas, 3 comenzaron a ejecutarse y luego fueron despriorizadas y 44 iniciativas no completaron todas sus etapas de desarrollo por diversas situaciones. “De estas iniciativas inconclusas 17 de ellas no tuvieron ningún tipo de desarrollo”, consigna el documento. Entre las justificaciones que entrega la Directora de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, Paulina Kaplan Depolo, sobre la no realización de algunas obras destinadas a la recuperación del patrimonio, figura la burocracia que envuelve al tema en Chile: “Muchas de las obras del PRDUV no se pudieron realizar porque era mucha la burocracia. Los proyectos primero tenían que ser aprobados en Santiago, después tenían que pasar por el Consejo de Monumentos Nacionales, después por la Dirección de Obras de la municipalidad, luego se tenían que licitar los proyectos y finalmente se realizaba la obra. Entonces así algunas de ellas se fueron atrasando”.

Otro de los problemas que tuvo la ejecución del PRDUV, según las conclusiones obtenidas por la consultora MG, fue la “falta de coordinación entre las diferentes instituciones públicas que intervinieron en el programa y la ‘participación ciudadana’, que debería haber sido más efectiva y vinculante, en cuanto a la definición y priorización de las iniciativas”. Precisamente, en las consultas realizadas a los porteños sobre el Programa, éstos calificaron las iniciativas implementadas como “específicas-dispersas y no muy representativas para el habitante

⁷ Según informe solicitado por la Subdere a la consultora MG para evaluar los resultados del programa.

común de la ciudad”, al considerar que “están más focalizadas en el turista que visita” y no en el habitante porteño, “que tiene otras necesidades prioritarias, como por ejemplo mejor accesibilidad y un transporte público eficiente”, detalla el informe.

Luego de este Programa, la administración y conservación de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad quedó a cargo exclusivo de la municipalidad de Valparaíso, la cual, como hemos visto, no cuenta con los recursos económicos necesarios para dar respuesta a esta tarea de gran envergadura y en la práctica sólo se ha resuelto postulando proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a cargo de la Subdere. Respecto a esta deficiencia el concejal Vuskovic apunta que: “El Patrimonio lo solicitó Chile, no la ciudad. Y la glosa patrimonial que está en el presupuesto de la nación son 2500 millones de pesos, que tenemos que compartir con las antiguas salitreras y con Chiloé. Entonces, es muy pequeño, considerando que sólo en la recuperación de un edificio de Valparaíso, el Mercado Puerto, se van a gastar 5 mil millones de pesos”.

Así las cosas, hasta la actualidad la comuna no logra nivelar el vuelo y su municipio aún mantiene una deuda del orden de los 6 mil millones de pesos aproximadamente, según cifras entregadas por Vuskovic. Además de la ya detallada incapacidad para dar respuesta al traspaso de la educación y el escaso apoyo económico estatal, los motivos para este déficit son múltiples y variados. Por un lado, se vincula al encarecimiento de todos los servicios en la ciudad, dada su natural topografía: “Un ejemplo de ello es el retiro de desechos con el camión de aseo, el cual en Santiago puede trabajar diez años, pero en Valparaíso a los cinco ya está inservible y se debe cambiar”, detalla el concejal del Partido Comunista.

Por otro lado, según indica el mismo, existe una merma en los ingresos percibidos por la municipalidad, dado que “la mitad de las casas de Valparaíso está exenta del pago de contribuciones o impuestos territoriales. Como el 50% no paga contribuciones, tampoco paga por el retiro de aseo, porque se cobran juntos. Y con lo que paga la otra mitad no se alcanza a cubrir la totalidad del servicio”. Es por ello que la autoridad comunal insiste en que Valparaíso debería contar con un presupuesto especial y con mayores libertades para autogestionarse, con el fin de revertir la atadura de manos que legó la dictadura a las administraciones comunales. Según sus cálculos, Valparaíso necesita entre 5 mil y 10 mil millones de pesos más de ingresos para estabilizarse económicamente y una nueva normativa que reconozca a las municipalidades como

agentes dinamizadores de la economía: “Según la teoría del modelo, la municipalidad no debería jugar ningún rol económico, pero en Valparaíso resulta que somos el empleador número uno de la ciudad. La planta municipal debe ser del orden de los 2500 trabajadores y la Cormuval otros 2500 ó 3000. Además a eso agrégale todos los servicios que compramos. Entonces, ningún empleador nos supera”, sentencia Vuskovic.

A ojos de otras autoridades, este deterioro económico y material en la ciudad ha sido también fomentado por una decadencia política a nivel regional y comunal, como señala el exgobernador de la provincia de Valparaíso, Omar Jara: “la precariedad de la ciudad tiene que ver con la precariedad de sus gobiernos locales. Esta debe ser una de las ciudades con menos recambio político desde los ‘90, y por lo tanto hay poca innovación, pocas ideas nuevas para sacar a Valparaíso adelante”. Una de las expresiones de esta falta de profesionalismo político, a juicio de la ex autoridad, es la gestión municipal de las últimas décadas. “Yo creo que la municipalidad no es un instrumento efectivo a nivel local porque ha caído en un clientelismo, en una baja bien notoria del punto de vista de su profesionalismo para abordar ciertas temáticas. La mayoría de los alcaldes han llegado a la municipalidad sin programas, sin contenidos y así es muy difícil después evaluar si cumplieron o no”, agrega Jara.

En la misma línea, el ex presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Sótero Apablaza, opina que la falta de liderazgos y profesionalismo político conduce a la falta de una mirada estratégica a largo plazo para la ciudad, y entrega un ejemplo de gestión eficiente en medio de una precariedad económica similar: “El alcalde de Guayaquil recibió la ciudad en igualdad de condiciones y convenció a la gente de reunir 80 millones de dólares para crear iniciativas de atractivo turístico y desarrollo económico en la ciudad. Juntaron la plata, hicieron las obras y la ciudad tiró para arriba. O sea, es posible, pero aquí falta ese liderazgo. Necesitamos líderes que vayan formando un programa político, social”.

Esta deficiente gestión municipal en Valparaíso motivó una acusación por notable abandono de deberes en contra del alcalde, Jorge Castro (UDI), interpuesta ante el Tribunal Electoral Regional el 17 de julio de 2014 y firmada por los concejales Iván Vuskovic (PC), Paula Quintana (PS), Ruth Cáceres (RN) y Zuliana Araya (PPD). Entre los puntos reclamados figuran la no ejecución de proyectos financiados con fondos externos y destinados al desarrollo comunal (especialmente en el caso del PRDUV) y el impago hasta esa fecha de las cotizaciones de los

profesores (en tramitación actualmente con fondos del gobierno central y el municipio). Además de la no actualización del Plan de Desarrollo Comunal (terminado al año siguiente), la inconclusión o mala realización de obras en la ciudad, la modalidad de tratos directos sin licitación y la desviación de fondos SEP (Subvención Escolar Preferencial) hacia otros fines.

Sobre estos últimos tres puntos el concejal Vuskovic explica que la mala ejecución de obras en la comuna responde a “pura negligencia (porque) cuando se hacen obras por parte del municipio se debe contar con personas que se llaman ‘hitos’, unos funcionarios municipales que controlan el cumplimiento del contrato firmado con la constructora. Para cada proyecto tenemos uno de esos, entonces que las obras queden mal es pura negligencia”, afirma. Uno de los casos que resaltan en estos incumplimientos es el de la plazuela Ecuador, donde los colectiveros del sector lograron reunir siete años antes un aporte de 10 millones de pesos para mejorar su infraestructura y a la fecha de presentación de la acusación la obra aún no había sido finalizada.

En entrevista para esta investigación el alcalde Jorge Castro reconoció esta falencia, atribuyéndola a una mala planificación presupuestaria original en los proyectos: “Es muy difícil decir que las situaciones salgan parejas entre todo lo que tú tienes que ver, organizar, fiscalizar, etc. Tenemos un porcentaje de obras en las que partimos con mucho ímpetu y después nos dimos cuenta que poner el alcantarillado iba a ser más caro, que tenemos que tener un troncal, que tenemos que traer una empresa privada, que una vecina nos hizo un juicio dos años por ocupar el frontis de su casa, en fin”.

Otro de los motivos entregados por las autoridades comunales al respecto es el incumplimiento por parte de las empresas privadas contratadas. En ese sentido, el entonces director de la Secretaría de Planificación de la comuna (Secpla), Luis Parot, explica que para contratar los servicios de pavimentación, por ejemplo, se debe tramitar al precio establecido por el Serviu, lo que genera que las empresas más grandes y consolidadas no se vean atraídas por la oferta económica y sean las empresas emergentes o al borde de la quiebra las que se someten a concurso para adjudicarse las obras.

Sobre el punto de la no actualización del Pladeco, Vuskovic señala que es “inexcusable y motivo suficiente para la destitución del alcalde. Nos hemos demorado más de siete años en hacer el Pladeco y éste debería tener una ejecución anual. ¿Cómo se justifica? *Care palo*”, reclama.

Esta falencia tiene directa relación con la ya abordada carencia de planificación y mirada estratégica para modelar el futuro de Valparaíso.

Sobre las adjudicaciones de obras sin un concurso público de por medio, el concejal señala que hay ocasiones en que esto se justificaría, ya que hay trabajos que todo el Concejo sabe que existen sólo dos empresas en la región capaces de realizarlos, por lo que resultaría mejor ahorrarse el trámite burocrático que retrasa las adjudicaciones. No obstante, asegura que “hay algunas ocasiones en que no es igual de evidente”. Además Vuskovic manifiesta su inquietud con la forma de llevar a cabo algunas licitaciones, ya que “puede que éstas estén apegadas a la ley, pero no se ponen por delante los intereses de la ciudad. Yo creo que influyen intereses de los privados en la toma de decisiones en los temas relevantes de Valparaíso”.

En cuanto a la desviación de dos mil millones de pesos provenientes de la ley SEP⁸ hacia otros fines, como pagar algunos años de cotizaciones adeudadas a los docentes, el alcalde Castro explica que “cuando tú tienes (fondos) SEP y ves que en el mes a mes no estás alcanzando a cubrir lo necesario, te duele mucho más el no pagar las cotizaciones a los profesores, porque después te demandan las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) con costa”. Si bien es cierto que esta figura no es del todo irregular, dado que la ley permite destinar hasta un 15% de los recursos SEP en fines distintos a los originalmente establecidos, la Cormuval excedió ese monto en \$402.624.185, según un informe de la Contraloría General de la República emitido en octubre de 2013.

Como consecuencia de esto la entidad fiscalizadora exigió a la Corporación el reintegro de estos dineros al programa. Además en el mismo informe de Contraloría se detectó que la Cormuval descontó dineros del fondo SEP y no pagó con éstos las cotizaciones de los profesores, como lo había declarado ante el Ministerio de Educación (Mineduc) y lo argumentado por el mismo edil: “la Cormuval declaró y no pagó los descuentos efectuados por concepto de cotizaciones previsionales por un total de \$18.710.940, no obstante éstas fueron rendidas al MINEDUC, por lo que corresponde que esa entidad regularice el pago de las mismas, como también del resto de los docentes cuyos descuentos han sido rendidos con cargo a los recursos SEP y que fueron declarados y no pagados por esa Corporación Municipal”.

⁸ La ley SEP ordena la entrega de fondos estatales a los municipios para que se inviertan en mejoras en la educación de los estudiantes más vulnerables de los establecimientos públicos.

Pero la utilización de los recursos SEP para fines distintos de los establecidos por la ley no fue sólo cuestión de la Corporación, sino también de los colegios beneficiados con estos recursos, según el mismo informe del organismo fiscalizador: “El examen realizado permitió determinar que fue rendida con cargo a los recursos SEP, la suma de \$14.909.201, por la adquisición de bienes y/o servicios tales como, agendas, hervidor, alfombra, alimentos, cine, implementación de áreas verdes, entre otros, conceptos de gastos que no se relacionan con las acciones aprobadas en los respectivos PME (Programa de Mejoramiento a la Educación)”.

Esta situación fue reconocida por el alcalde, entregando además nuevos antecedentes: “se hicieron cosas que no tenían que ver directamente con la formación de los niños (...) como paseos de fin de año, comidas, etc. Estos fueron observados por la Contraloría y fueron corregidos”. No obstante, asegura que en la actualidad “el uso de los recursos SEP ha sido ejemplar”.

La endémica corrupción

El problema con el manejo de los fondos públicos en Valparaíso no es algo exclusivamente circunscrito a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, sino que las malas prácticas se extienden al Gobierno Regional y a las empresas públicas, donde desde los años '90 se han venido descubriendo numerosos desfalcos de dinero. Esto ha venido a ser como el broche de oro para la mala situación económica local, ya que los seis casos de malversación de fondos públicos ocurridos en estos años suman en su conjunto más de 4 mil 500 millones de pesos.

El primer caso conocido desde el retorno a la democracia fue denunciado en abril de 1993 por el entonces diputado Raúl Urrutia (RN), quien en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras detectó irregularidades en las contrataciones de la Refinería de Petróleos de Concón (RPC), perteneciente a la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) e interpuso una querrela contra quienes resulten responsables de estas irregularidades. Al ser ésta una empresa estatal, a poco andar el Consejo de Defensa del Estado se acopló a la demanda y asumió la representación del fisco ante el tribunal, y por su parte la RPC inició una demanda civil con el fin de ser compensada por los perjuicios económicos causados en su contra.

Durante el proceso, la fiscalía decidió acusar a seis personas: el ex gerente de la RPC, Marcos Vásquez –quien fue sobreseído tras su muerte-; el ex secretario general de la industria, Claudio Soto; y los empresarios Francisco Zárata Valenzuela, Carlos Chamorro Tapia, Marcos Díaz Espíndola y Oscar Mohor Abuaud. Esto ya que se descubrió que el contratista Francisco Zárata en representación de su empresa Zárata y Cia. Ltda., se concertó en reiteradas ocasiones con el fallecido exdirector, Marcos Vásquez, y el exsecretario, Claudio Soto, entre los meses de diciembre de 1990 y agosto de 1992, para celebrar alrededor de nueve contratos (entre iniciales, renovaciones y prórrogas) por obras de desmalezamiento y cortafuegos en la industria, siendo estas adjudicaciones hechas sin apego a la normativa interna vigente de la estatal y en las cuales:

“...tampoco se observaron procedimientos de buena administración para asegurar la transparencia del proceso y los intereses de la empresa, conocida abreviadamente como RPC, lo que lleva a concluir que se trató de procedimientos de licitación aparentes, en que se observó cierto formulismo, pero en verdad todo ello fue para vincular al contratista Zárata con la empresa y después prolongarle su contratación en el tiempo, con la vaguedad en: la extensión de las hectáreas a desmalezar, el valor a pagar por metro cuadrado y tiempos a utilizar en la tarea, entre otros aspectos”.⁹

Para esta licitación Soto “seleccionó firmas con escasa experiencia que incluso habían perdido todas sus propuestas anteriores sobre prevención de incendios”¹⁰ y máxime que, según las declaraciones otorgadas por Zárata ante el fiscal, éste fue invitado a participar mediante una carta y visitó los terrenos donde se realizaría el trabajo, mientras que los demás participantes de la licitación señalaron haber sido invitados telefónicamente y haber tenido que realizar las cotizaciones sin visitar el terreno, sin conocer las superficies a desmalezar y en un plazo menor a 48 horas. Ello derivó en que los contratos fueran poco precisos en las especificaciones del trabajo por hacer y se tuviera que incurrir en un pago excesivo de horas extraordinarias, lo que en conjunto le significó a la industria un sobre costo de \$169.674.932 por las obras.

De esta manera se determinó que los engaños sufridos por la refinería iban desde la presentación hasta la defraudación. Lo primero “por realzar la necesidad y la urgencia de las

⁹ Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 12 de septiembre de 2007.

¹⁰ *idem*

tareas de desmalezamiento”¹¹ y lo segundo “por la vinculación de un contratista, que sólo en apariencia podría haber sido considerado como el mejor calificado para los trabajos que se le asignaron, y que sólo en apariencia había sido elegido en un proceso de licitación regular”¹². El caso fue tramitado en primera instancia en el Segundo Juzgado del Crimen de Viña del Mar, asignándose una jueza con dedicación exclusiva, la magistrado Berta Froimovich, quien luego de nueve años de investigación, el 21 de noviembre de 2002, decidió condenar a Zárate a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de una multa de 20 UTM más las costas del juicio. No obstante, fue beneficiado con la medida de reclusión nocturna.

Por su parte, el ex secretario Soto fue sentenciado a 41 días de presidio, suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de la misma cifra que Zárate, pero recibiendo el beneficio de la remisión condicional de la pena. Junto con ello, se acogió la demanda civil interpuesta por la RPC con el fin de obtener una indemnización monetaria por los hechos, condenándose además a Soto, Zárate y su empresa al pago solidario de \$162.648.048 pesos a la estatal. Mientras que los otros cuatro acusados fueron absueltos de los cargos que se les imputaba.

Los sentenciados Soto y Zárate posteriormente interpusieron un recurso de casación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, obteniendo el 12 de septiembre de 2007 la elevación de la pena, pues en esta segunda instancia la Corte manifestó discrepancias con el primer fallo y condenó a Francisco Zárate Valenzuela por estafa a 541 días de presidio menor en su grado medio, a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa. No obstante, esta vez se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando en libertad vigilada.

El exsecretario de la RPC, Claudio Soto Barría, fue condenado por fraude al fisco a 541 días de presidio menor en su grado medio, la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de 16 millones de pesos, correspondiente al diez por ciento del perjuicio causado, más las costas de la causa, estipulándose además que en caso de no contar con

¹¹ ídem

¹² ídem

el dinero para pagar la multa, se le sumarían días de reclusión sin exceder los seis meses. Pero también Soto reunió los requisitos para ser beneficiado con la remisión de la pena, quedando al igual que Zárata en libertad vigilada durante el lapso de la condena. Junto con ello, la Corte ratificó la sentencia del Segundo Juzgado del Crimen, sentenciando a Soto y Zárata a pagar la suma de \$162.648.048 a la RPC en compensación de los perjuicios económicos causados a la empresa.

La causa fue nuevamente apelada en la Corte Suprema por los condenados, pero los ministros de la Corte Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo, ratificaron el 24 de marzo de 2009 el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, obteniéndose de esta manera el cierre definitivo del caso, luego de 16 años de tramitación judicial. Según consignó El Mercurio de Valparaíso en una información publicada el 28 de noviembre de 2002, la hipótesis del Consejo de Defensa del Estado era que estos dineros se habían desviado para financiar campañas políticas. Por ello, el tribunal citó a declarar a varios políticos y autoridades de la zona, entre ellos el ex senador Juan Hamilton (DC), el actual diputado Aldo Cornejo (DC) y el entonces alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto (DC). “Además, se revisaron numerosas partidas de cuentas bancarias, hasta que el Máximo Tribunal prohibió a la magistrado continuar dichas diligencias. Sin embargo, pese a la acuciosa investigación realizada, no se pudo comprobar el denunciado desvío de fondos”, consignó el medio.

El segundo caso de malversación de caudales públicos fue el denominado “Empleos Brujos”, una irregularidad denunciada el 11 de diciembre de 2005 ante el Ministerio Público por el alcalde de Quillota, Luis Mella, quien detectó que se estaban pagando con recursos del Programa de Generación de Empleos (PGE) obras que nunca se realizaron en el cerro Macaya. Por ello el edil denunció ante la fiscalía su sospecha de que los fondos del PGE -impulsado a nivel central por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social e implementado a nivel regional por la Intendencia de Valparaíso- estaban siendo desviados para fines distintos al dispuesto por el Estado, que era principalmente la creación de obras o acciones locales que representarían un claro beneficio comunitario y cuya ejecución generara fuentes laborales para personas que reunieran la doble condición de estar cesante y ser jefe de hogar, en miras a paliar el alto nivel de desempleo presente en el país, y particularmente en regiones como Valparaíso.

El Ministerio Público comenzó una investigación al respecto, conducida en primera instancia por el fiscal Pablo Bravo y en segunda por el entonces fiscal regional, Jorge Abbott, actualmente Fiscal Nacional. Las indagatorias duraron 10 años y se enfocaron en recabar pruebas sobre estas desviaciones de fondos públicos y en determinar si habían sido generadas para financiar campañas políticas, descubriéndose distintas aristas del caso que vinculaban a varios personeros políticos de la zona, entre ellos el entonces candidato a diputado por el Partido Socialista, Marco Enríquez-Ominami Gumucio (MEO), al diputado Rodrigo González Torres (PPD) y a la entonces diputada Laura Soto González (PPD), quien anteriormente había sido senadora y dos veces diputada por la quinta región.

En el caso de la diputada Laura Soto, se logró establecer que su campaña parlamentaria se vio favorecida mediante la colaboración del entonces Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Quinta región, José Manuel Mancilla López, de quien dependían tareas como la tramitación administrativa de los PGE ante el Ministerio del Trabajo, seleccionar los proyectos a ejecutarse, obtener los fondos de dicha cartera, elaborar los convenios, seleccionar a los contratistas a cargo de la ejecución del proyecto y a sus beneficiarios, además de supervisar la correcta ejecución de las obras. Estos deberes fueron incumplidos por el ex seremi Mancilla en el año 2005, ya que simuló ante el Ministerio del Trabajo la creación de dos proyectos denominados “Apoyo en gestiones administrativas a entidades públicas”, en los cuales se seleccionó, contrató y benefició a personas que no cumplían con las condiciones exigidas por el programa, destinándose los recursos estatales a fines distintos de los establecidos por el fisco.

Para cumplir su cometido y desviar estos fondos a la campaña electoral de Soto, el seremi Mancilla incluyó en las nóminas de trabajadores beneficiados con el programa a 30 brigadistas de dicha campaña que trabajaron en esta labor a jornada completa –mañana y tarde-, es decir, sin tener posibilidad alguna de realizar el trabajo por el que se les contrató y se les remuneró con fondos de estos dos programas de absorción de cesantía. Para estos efectos Mancilla escogió una “empresa contratista dócil (y) afín al plan criminal”, que se prestó por cuatro meses para pagar en las dependencias del comando de la ex parlamentaria las remuneraciones a los brigadistas y no en su propia oficina, como naturalmente debía ocurrir. Según consigna la acusación del Ministerio Público: “Esos pagos se hicieron en ese lugar para ponerse a cubierto del descontento que en los pares, trabajadores hacendosos adscritos a otros proyectos de esta empresa contratista despertó

ver a sus pares con atuendos de campaña, ir a pagarse a las oficinas de la empresa contratista de los Vargas sin haber desarrollado efectivamente labores por las cuales fueron contratados”.

La empresa contratista escogida fue “V&V”, propiedad de Luis Vargas Leiva y Sergio Vargas Pérez, quienes se adjudicaron la ejecución de estos dos proyectos por un monto total de \$9.468.000, obteniendo a cambio como utilidad cerca de 500 mil pesos cada uno. En este fraude también participó el yerno de la candidata y en ese entonces Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Uziel Valle Venegas, quien fue el encargado de solicitar a Mancilla que realizara esta simulación y a la vez participó en la selección de los brigadistas. “Uziel Valle no es principiante porque algunos de los brigadistas que se ocuparon en la campaña parlamentaria en diciembre del 2005 para Laura Soto González, su suegra, lo habían sido antes para la campaña a Concejal de su cónyuge Marisol Paniagua Soto, lo único que cambia es que para aquella campaña se utilizó otro contratista Guiseppe Malatesta Valladares, ya acusado por el Ministerio Público”.

Ante las indagatorias que estaba realizando la fiscalía en su contra, Valle “intentó influir en los testigos del Ministerio Público para que no fueran a declarar a la BRIDEC, o bien para que si lo hacían, dijeran que no habían desarrollado labores de campaña o que lo hicieron en la tarde pero que en la mañana se dedicaron a barrer, lo que fue una mala estrategia, ya que barriendo tampoco se cumple con el programa, ya que lo que hay que hacer es Apoyo en Gestión Administrativa en Entidades Públicas”. La ex esposa de Valle e hija de la entonces diputada Soto, Marisol Paniagua, quien en aquel periodo ostentaba el cargo de concejala de la municipalidad de Valparaíso, también fue acusada por la fiscalía de participar en este ilícito, ya que colaboró en la selección de los brigadistas, realizando entrevistas y organizando los grupos y sus labores. Asimismo el jefe de campaña Cristian Garrido Dinamarca y el jefe de gabinete de la diputada, Luis Gatica Polanco, quienes cumplieron las mismas funciones que Paniagua.

Por su parte, la principal aludida, Laura Soto González, en aquel entonces se encontraba en ejercicio de su cargo como diputada, por lo que debió ser desafortada. Soto esgrimió en su defensa que no tenía conocimiento de las gestiones que se realizaban en su comando, cuestión que fue refutada por la fiscalía. Según la acusación, todos los imputados estaban enterados del origen de estos dineros y contribuyeron de distintas maneras al desfalco.

Por ello, la fiscalía pidió para José Manuel Mancilla López una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, por los delitos reiterados de fraude al Fisco, más una multa del 50% del perjuicio total causado, inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público y el pago de las costas de la causa. Para Laura Soto González, Marisol Paniagua Soto, Luis Gatica Polanco, Uziel Valle Venegas y Cristian Garrido Dinamarca, solicitó una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, por los delitos reiterados de estafa, más multas de 15 UTM por cada delito atribuido, suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y el pago de las costas de la causa. Y para Luis Vargas Leiva y Sergio Vargas Pérez, una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, por los tres delitos imputados, esto es, los dos delitos reiterados de estafa y el delito de estafa, más multas de 15 UTM por cada delito atribuido, suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y el pago de las costas de la causa.

No obstante, en la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2008 por la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso integrada por los magistrados Christian Le-Cerf Raby, María del Rosario Lavín Valdés y María Cruz Fierro Reyes, se absolvió de los cargos a Laura Soto, Cristian Garrido, Sergio Vargas y Luis Vargas, y se condenó a quien fuera sindicado como el artífice principal del delito, el ex seremi José Manuel Mancilla, a dos años de presidio menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, además del pago del 15% del perjuicio causado.

Asimismo sentenció a Uziel Valle y Marisol Paniagua a dos años de presidio menor en su grado medio, suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y al pago de 14 UTM. Y Luis Gatica, Sergio Vargas y Luis Vargas fueron condenados como cómplices del delito continuado de estafa a 100 días de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena y al pago de 11 unidades tributarias mensuales. Además, se condenó a todos los sentenciados a pagar de manera solidaria las costas del juicio.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los condenados fueron beneficiados con la remisión condicional de la pena, dado que reunían los requisitos para ello, es decir, todos quedaron en

libertad condicional. Frente a esta sentencia, cuatro de los cinco condenados interpusieron un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, pero todos ellos fueron rechazados. Finalmente, se acogió la demanda civil de indemnización interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en representación del fisco contra Valle, Paniagua, Gatica, Mancilla, Vargas Leiva y Vargas Pérez, ordenándoseles cancelar en forma solidaria al fisco los \$9.468.000 defraudados. Pago solidario del que quedaron excluidos Laura Soto y Cristian Garrido por ser absueltos del ilícito penal que se les atribuyó en la acusación del Ministerio Público.

En la arista del caso que involucró a Marco Enríquez-Ominami, se indagó la participación de su jefe de campaña, Edgardo Lepe, quien también fuera ex presidente del PS regional y ex jefe de gabinete de su padre, el entonces senador Carlos Ominami. Al respecto la fiscalía logró demostrar que hubo una concertación entre Lepe y el ex seremi Mansilla, por lo que el primero fue condenado a “541 días por el delito de estafa, sumado a una multa a beneficio fiscal de 21 Unidades Tributarias Mensuales”, de acuerdo a lo informado por La Nación el 25 de septiembre de 2009. Asimismo, el activista de la campaña de Enríquez-Ominami, Luis Fernández Sarmiento, alias “El Luiggi”, fue condenado a 541 días de cárcel más el pago de una multa por 5 UTM y el reintegro de los dineros malversados, luego de ser hallado culpable por el delito de estafa. Misma condena que recibió el ex concejal de Viña del Mar, Max Leonidas Bastidas Pinilla (PPD) y el entonces secretario del diputado Rodrigo González, Fernando Demetrio Avendaño, de acuerdo a lo informado por la web de la Radio Bío Bío el 15 de febrero de 2011.

Luego de estos escándalos de corrupción, Marco Enríquez-Ominami de igual manera resultó electo diputado, participando en la Cámara en las comisiones de Ética y Conductas Parlamentarias, Educación y Cultura. Al término de su período parlamentario renunció al Partido Socialista y se presentó como independiente a la elección presidencial de 2009, compitiendo contra Eduardo Frei y Sebastián Piñera, donde obtuvo un 20% de los votos. Posteriormente fundó el Partido Progresista, cuya declaración de principios publicada en su sitio web paradójicamente señala la profunda molestia por “la desigualdad, las injusticias, la prepotencia y el afán de ganancia y lucro a costa de la calidad de vida, los derechos laborales de los trabajadores, y el respeto del medio ambiente”, y agrega que “trabajaremos incansablemente por generar condiciones de trabajo dignas, seguras, estables y justas”.

Para las elecciones presidenciales de 2013, Marco Enríquez-Ominami también se presentaría como candidato, ocasión en la que acaparó el 10% de los sufragios. En estos comicios nuevamente saldrían a la luz supuestos financiamientos irregulares a la campaña de MEO, esta vez mediante la supuesta entrega de boletas ideológicamente falsas a la empresa Soquimich (SQM) por parte de la firma “Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL”, propiedad de su colaborador más cercano, Cristián Warner. Según investiga la fiscalía, en total se trataría de 34 boletas y facturas que totalizarían 362 millones de pesos, de acuerdo a las cifras entregadas en el sitio web del noticiero T13. En esta investigación el líder del PRO fue formalizado el 19 de octubre de 2016, al ser sindicado como facilitador del supuesto delito, ya que se detectaron transferencias desde la empresa de Wagner hacia colaboradores su comando. No obstante, en la actualidad nuevamente se perfila como uno de los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2017. Por su parte, la exdiputada, Laura Soto, se reincorporó a la Cámara en enero de 2009 luego de su desafuero y se presentó nuevamente a la reelección en diciembre del mismo año, no resultando electa. Mientras que el diputado Rodrigo González aún se encuentra en ejercicio de su cargo, al haber sido reelecto consecutivamente en los comicios de 2010 y 2014.

El tercer gran caso de malversación de fondos públicos fue denunciado en 2010 por el recién asumido intendente durante el gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Celis. En esta ocasión el delito fue perpetrado al interior de la administración regional anterior, a cargo de Iván de la Maza (DC), y consistió en la malversación de mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este programa es administrado en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y constituye la principal contribución financiera que hace el gobierno central a las regiones para el desarrollo de proyectos destinados a mejorar la infraestructura social, como capacitaciones, adquisición de equipamiento, recuperación de edificios de valor histórico o patrimonial, saneamiento sanitario, desarrollo urbano, mejoramiento de barrios, etc.

En la ocasión investigada por el Ministerio Público de Valparaíso se procesó al entonces jefe del departamento de finanzas del Gore, Lorenzo Leiva Tapia; al encargado de supervisión y elaboración de informes de gestión entre 2008 y 2010, Jaime Lorca Rocca; y al trabajador del servicio administrativo y del Gabinete del ex intendente De la Maza, Julio Medina Correa. En el

desempeño de sus funciones a Lorenzo Leiva le correspondía dirigir la administración financiera y ejecución presupuestaria del FNDR y emitir u ordenar a otros funcionarios la emisión de los cheques de la cuenta corriente donde reposaban estos recursos, por lo tanto Leiva conocía perfectamente “las falencias del sistema o proceso de control y seguimiento de los proyectos del Fondo”, según consta en la acusación judicial en su contra.

De este modo, y aprovechándose de dichas falencias, emitió y liberó con costo a la cuenta corriente del Gore entre febrero y marzo de 2008 cinco cheques a su nombre: cuatro por un monto de \$500.000, los cuales fueron cobrados el mismo día en el Banco Estado por el propio Leiva, y otro firmado por él, pero relleno por el funcionario Jaime Lorca, por un monto de \$10.682.000. Los dos primeros cheques contaron con la segunda firma requerida para su emisión, proporcionada por Gabriel Aldana Domainge, y para los siguientes se ésta fue falsificada. Fue así como Jaime Lorca se introdujo en este fraude, ayudando en la confección de los cheques y, aprovechando que era el encargado del control contable y registro computacional del FNDR, realizando maniobras para desaparecer o por lo menos ocultar estos egresos con el fin de evitar la detección contable del delito.

En los meses siguientes Leiva y Lorca continuarían con la estafa, emitiendo nuevos cheques el 17 de julio y 10 de noviembre de 2008, esta vez a nombre de René Cerda López, por el monto de \$25.495.055 y \$70.829.293 respectivamente. Luego, el 20 de agosto y 30 de septiembre del mismo año y el 13 de enero y 13 de marzo de 2009, Leiva firmaría otros cuatro cheques rellenos por Lorca ascendentes a \$40.164.880, \$41.165.939, \$62.920.208 y \$68.173.288 respectivamente, esta vez dirigidos al empresario Eugenio Aubele, quien entregó dos facturas de su empresa Aubele y Henríquez Asociados para justificar los egresos. “El dinero proveniente del cobro por caja de este cheque fue entregado personalmente por Aubele Guerin a Julio Enrique Medina Correa, quedándose el primero de estos con una parte del dinero correspondiente al IVA y PPM de la factura” (menos de 300 mil pesos), según consigna el fallo judicial en su contra. Situación que fue replicada durante el resto de 2009, emitiendo cheques el 23 y 30 de abril, 27 de mayo, 24 de julio, 31 de agosto (dos veces), 30 de septiembre, 12 y 16 de noviembre y 28 de diciembre por montos de \$77.329.624, \$61.659.045, \$53.500.909, \$58.761.841, \$70.458.000, \$70.535.000, \$52.742.920, \$72.466.262 y \$62.211.193

respectivamente, todos a nombre Aubele, aunque en estos últimos casos no se generó ni entregó ninguna factura para respaldar los egresos.

De este modo, entre 2008 y 2009 fueron sustraídos en total \$1.031.457.412, dinero que en su origen estaba destinado al progreso de las provincias y comunas de Valparaíso. A razón de ello la fiscalía consideró que Lorenzo Leiva cometió 22 delitos reiterados de malversación de caudales públicos y dos delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil falsificado. Mientras que Jaime Lorca cometió a juicio de la fiscalía dos delitos de malversación caudales públicos y quince delitos reiterados de malversación de caudales públicos, y Julio Medina, Marcelo Urzúa y Eugenio Aubele dos delitos reiterados de malversación de caudales públicos cada uno.

Por ello el Ministerio Público pidió ante el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso una condena total para Leiva de 23 años y un día de presidio, para Lorca y Medina 15 años y 1 día, para Urzúa 10 años y 1 día y para Aubele 5 años. Además, para todos se solicitó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos u oficios públicos, comiso de los efectos e instrumentos del delito y el pago de una multa de 15 UTM más las costas de la causa. No obstante, el tribunal absolvió a Lorenzo Leiva por el delito acusado de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lo condenó sólo a 10 años de presidio por malversación reiterada, y a Lorca a 8 años sin obtención de beneficios. Mientras que Medina y Aubele fueron condenados a 5 años de presidio cada uno y Urzúa a 4 años, pero se le otorgó a cada uno el beneficio o pena substitutiva de libertad vigilada durante el tiempo que dure la condena. Por último, para todos se ordenó el pago de una multa de 11 UTM, la inhabilitación para ejercer cargo u oficio público y la devolución total de los dineros sustraídos al fisco, esto último al acogerse la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Según se presume, en este caso los dineros malversados también habrían sido destinados a financiar campañas políticas.

Pero la historia no quedaría ahí, sino que continuaría en la intendencia encabezada por Raúl Celis (RN), al objetarse en una auditoría interna del Gore la entrega de miles de millones de pesos a organizaciones sociales sin evaluación previa ni seguimiento posterior a los proyectos. En la ley que rige al FNDR se especifica que el 6% del mismo se puede destinar, mediante concurso

público, a financiar proyectos en el área de Cultura, Seguridad Ciudadana y Deporte, otorgando a cada uno un porcentaje del 2% del fondo. Estos proyectos pueden ser presentados por las municipalidades de la región o instituciones privadas sin fines de lucro, como ocurrió en los hechos investigados.

Sobre las adjudicaciones de estos fondos concursables, se detalla en un informe elaborado por la Contraloría General de la República el 21 de abril de 2014 –a una semana del megaincendio-, que “no existen antecedentes que acrediten que los concursos I y II del año 2012 de las iniciativas de seguridad ciudadana, por un monto de \$ 1.093.106.258, hayan sido evaluados por las comisiones de admisibilidad y evaluación técnica” y se agrega que en virtud de ello “no ha sido posible verificar, en la especie, que la asignación de los aludidos recursos se haya efectuado en forma transparente y competitiva”.

Más aún, en el documento se precisa que “de un total de 1.501 convenios suscritos entre los años 2011 y 2013, de los concursos de cultura, deporte y seguridad ciudadana, por un total de \$ 6.297.309.610, a la fecha de la presente auditoría, 384 de ellos se encontraban pendiente de rendición, por un monto total de \$ 2.233.780.870”, por lo cual a juicio del organismo fiscalizador el Gore actuó con negligencia, ya que entre sus funciones se encuentra “exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o entidades del sector privado y proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, lo que no se advierte que haya ocurrido en la especie”.

De este modo, son en total más de 3 mil 333 millones de pesos entregados a ciegas por la Intendencia de Valparaíso con cargo al FNDR, por los cuales no se recepcionó ninguna rendición hasta abril de 2014. Además, entre los restantes proyectos beneficiados, se encontraron algunas rendiciones parciales o incompletas de los dineros adjudicados, y se detectó que el “Centro de Eventos Doña Anita” de Olmué emitió facturas para cinco iniciativas distintas, las impulsadas por la “Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte”, “Centro Comunitario Alcanzando Sueños”, “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, “Centro Cultural Rucamanqui” y “Comité Habitacional My Dream House La Calera”, por concepto de atención a participantes, muchos de los cuales, según declararon ante la Contraloría, nunca asistieron a ningún evento o no a todos en los que figuran como asistentes:

“Del análisis practicado a los listados de asistencia que presentaron las mencionadas organizaciones, se detectaron nombres de beneficiarios incluidos en más de un proyecto, procediéndose a entrevistar a 112 de ellos, los que declararon lo que a continuación se indica: a.1) 45 expresaron que la rúbrica que figura junto a su nombre no es de su autoría, comprobándose que 34 de ellos corresponden al proyecto denominado "Deporte y Entretenimiento Saludables Para el Corazón", organizado por la "Agrupación Cultural, Artística, Recreativa y Ecológica Recrearte", Anexo N° 8. a.2) 39 manifestaron haber participado sólo en una ocasión, sin recordar el nombre de la actividad, no obstante aparecen en más de una nómina, en el mismo, o distintos proyectos, Anexo N° 9”.

Y por si fuera poco, se detectó que en la ejecución de algunas iniciativas participaron candidatos políticos a las elecciones municipales de 2012 y parlamentarias de 2013, como los entonces consejeros regionales Cristian Urizar (PS), quien es actualmente diputado, y René Lues (DC), candidato en dos ocasiones a la alcaldía de Viña del Mar¹³. De acuerdo a lo precisado por la Contraloría, 60 personas que asistieron a actividades en el "Centro de Eventos Doña Anita", reconocieron la presencia de Lues en éstas y detallaron que “les entregó calendarios (y) afiches relacionados con su candidatura, solicitando su apoyo y voto en las elecciones municipales de ese año”, lo cual está prohibido por ley y viola además las bases de los fondos concursables.

Por estas irregularidades que suman y siguen se dio curso a una investigación judicial, donde se concluyó que efectivamente tuvo lugar un nuevo fraude al fisco. En esta ocasión uno de los protagonistas fue Sergio Núñez Sepúlveda, quien se desempeñó entre 2010 y 2013 como Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, cargo al cual accedió falsificando un título profesional de ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, y que además le valió para recibir mensualmente el bono de asignación profesional para el sector público por un total de \$12.822.852. En estas nuevas operaciones fraudulentas, Núñez actuó concertadamente con el Administrador del Gobierno Regional y Jefe de Gabinete del Intendente Celis, Enrique Kittsteiner Yovanini, y con el Coordinador Regional de Elecciones del Ministerio del Interior, Claudio Uribe Jamen. Los tres hombres se conocían desde antes debido a que compartían militancia en Renovación Nacional.

¹³ Detalles entregados por Ciper en su reportaje “Corrupción en Valparaíso: Contraloría revela la entrega de \$3.333 millones de manera irregular”, publicado el 5 de mayo de 2014.

Según se pudo demostrar en el proceso, una de las organizaciones favorecidas con dineros del FNDR fue “Valparaíso Joven” -propiedad de Uribe- a la cual se adjudicaron más de 134 millones de pesos para la realización de cuatro proyectos sociales que nunca fueron ejecutados, a saber: una capacitación de los vecinos para la seguridad en Viña del Mar, otra para los vecinos de Valparaíso, un Proyecto Enfoques para la seguridad ciudadana y un campeonato intervecinal de fútbol. “Estando los fondos en la cuenta de Valparaíso Joven, Claudio Uribe concurrió al Banco Estado, por instrucciones de Núñez y Kittsteiner, retiró el dinero y lo entregó a estos últimos, en efectivo, en dependencias del Gobierno Regional”, detalló la fiscalía en el proceso judicial.

Ante el vencimiento del plazo para que la organización rindiera cuentas por los dineros públicos traspasados, Uribe hizo llegar al Departamento de Auditoría del Gore en junio de 2013 ocho facturas por un total de 109 millones de pesos aproximadamente, que fueron llenadas bajo las instrucciones de Kittsteiner y obtenidas por obra de César Mellado Muñoz, representante legal de la empresa Audita. Todas estas facturas ideológicamente falsas detallaban en sus glosas supuestas prestaciones de servicios por parte de Audita a Valparaíso Joven, las cuales en realidad nunca existieron.

Otra organización que se involucró en este fraude fue el Círculo de la Prensa de Valparaíso, mediante su presidente, el periodista Alfredo Larreta Lavín, quien presentó al Gore un proyecto para la publicación de una revista de difusión cultural solicitando para su ejecución un monto de 6 millones y medio del 2% concursable en el área de Cultura, siendo rechazado. No obstante, unos días después Kittsteiner se contactó con Larreta y le propuso presentar un nuevo proyecto postulando esta vez al 2% del fondo para Seguridad Ciudadana y solicitando 21 millones 700 mil pesos, de los cuales él se quedaría con 8 millones 700 mil y los restantes 13 millones serían desviados por Kittsteiner a otros fines.

De este modo y conforme a lo acordado, Larreta reformuló su proyecto como una revista sobre prevención y seguridad ciudadana y se adjudicó los más de 21 millones. Una vez traspasada esta cifra a la cuenta corriente del Círculo de Prensa, su presidente giró un cheque al portador por 13 millones y se lo entregó a Claudio Uribe, quien personalmente concurrió al Banco Estado para cobrarlo. Esta vez el proyecto sí se realizó, la revista fue editada y distribuida y se entregaron facturas y boletas de honorarios para la rendición de cuentas ante el Gore.

Ante estos vicios, el Ministerio Público decidió acusar a Sergio Núñez por ejercicio ilegal de la profesión, uso malicioso de instrumento privado falso y malversación reiterada de caudales públicos, solicitando para él una condena en total de 13 años y 1 día de presidio y el pago de dos multas de 8 y 15 UTM cada una. Mientras que a Enrique Kittsteiner y Claudio Uribe los imputó por malversación reiterada de caudales públicos y fraude al fisco, pidiendo para el primero 13 años y 1 día de presidio y el pago de una multa de 10 UTM más el 50% del perjuicio causado al fisco, y para Uribe, al ser considerado cómplice y no autor de los delitos, más de 8 años de presidio y el pago de una multa de 10 UTM más el 20% del perjuicio causado y las costas de la causa.

No obstante, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en el fallo dictado el 12 de agosto de 2014, sólo concedió para Núñez 8 años de presidio, el pago de una multa total de 16 UTM y la devolución al fisco de los más de 12 millones de pesos que obtuvo por la asignación profesional que no le correspondía. Mientras que para Enrique Kittsteiner sentenció una pena total de 8 años y 1 día de presidio y al pago de una multa de 5 UTM más el 20% de lo defraudado, es decir, 2 millones 600 mil pesos. En caso de no tener cómo pagar este monto, el Tribunal ordenó que se le sumara un día de reclusión por cada tercio de una UTM, sin que pueda excederse de los seis meses. Sin perjuicio de ello, se le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva durante el tiempo al que fue condenado. Y a Uribe Jamen se le condenó a 5 años y 541 días por los dos delitos en los que participó en calidad de cómplice, más el pago de una multa de 3 UTM y el 10% de lo defraudado (1 millón 300 mil pesos), siendo también beneficiado con la libertad vigilada intensiva por el tiempo que dure su condena.

Finalmente, los magistrados accedieron a la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado para obtener una compensación por el perjuicio causado a las arcas fiscales, y ordenaron para los tres condenados el pago solidario de los \$147.700.000 malversados en total del FNDR y, en el caso de Kittsteiner y Uribe, a la inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y a perpetua para Núñez. Este último un mes después (en septiembre de 2014) interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso aduciendo que el delito por él cometido no se configura como malversación reiterada, sino que continuada, lo cual reduciría la tipificación del mismo. No obstante, la Corte rechazó el recurso y revalidó la sentencia dictada en primera instancia.

De acuerdo a informaciones entregadas por Ciper respecto a este tema, los dineros defraudados habrían sido literalmente repartidos al interior del Consejo Regional (Core), según uno de los “libros de cuotas” que fue encontrado en el notebook de Sergio Núñez, incautado junto a otros 9 equipos de la Intendencia durante los peritajes. En este documento se detallaban los porcentajes que le correspondía por cada proyecto aprobado a cada uno de los consejeros regionales, entre ellos el ahora diputado Cristian Urizar (PS), quien tuvo que declarar en dos ocasiones ante la fiscalía, al igual que su jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS).

Con todas estas desviaciones de fondos públicos resulta paradójico que las autoridades atribuyan a la escasez de recursos las obras de mejoramiento social, económico y de seguridad que se requerían y aún se requieren con intensidad en Valparaíso, y con mayor preponderancia en la zona alta de la ciudad.

UN FUTURO EN CONSTRUCCIÓN

Las propuestas para la reactivación

Frente a la precaria situación en la que se encuentra la otrora Joya del Pacífico, desde distintos sectores se han alzado propuestas para impulsar el progreso de Valparaíso, aprovechando la gran cantidad de motores de desarrollo que posee, en tanto es una ciudad universitaria, bohemia, cultural, patrimonial y portuaria a la misma vez. Una de ellas es la que ha trabajado el Colegio de Arquitectos de Valparaíso y que dice relación con conseguir un equilibrio armónico entre todos estos ejes de desarrollo. “¿Qué ciudad tiene todo lo que nosotros tenemos? Y sin embargo somos una de las ciudades más pobres de Chile”, recalca el miembro director del Colegio de Arquitectos y recientemente electo concejal por la comuna, Claudio Reyes Stevens.

En ese sentido el profesional explica que una de las propuestas que tiene la delegación en miras al 2036 es la construcción de un gran parque metropolitano en la zona alta de Valparaíso, que cumpla la doble misión de rescatar la flora y fauna autóctona que ha sido desplazada por las indiscriminadas plantaciones exógenas y servir de resguardo ante incendios forestales, además de incrementar la cantidad de áreas verdes por habitante, índice en el cual Valparaíso es también una de las ciudades más desfavorecidas a nivel nacional. La idea sería replicada en el borde costero con la construcción de un parque borde costa que devolvería a los porteños el acceso al mar, para lo cual sería imprescindible el soterramiento de la línea de metro que circula por ahí.

Junto con ello, esta línea de metro sería reconducida hacia el centro de la ciudad, transformando cada plaza de la misma en una estación. Según explica Reyes, estas iniciativas requieren de una cooperación mutua entre el sector público y el privado, junto con la elaboración de un contundente Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), que es la carta de navegación con la que se define hacia dónde avanza la ciudad. Y que además estas definiciones sean consensuadas con la ciudadanía. “Somos los porteños los que deberíamos definir qué ciudad queremos”, consigna el profesional.

Otra visión respecto a lo mismo es la que presenta el director de ProChile regional, Alejandro Corvalán, quien coloca el acento en potenciar la denominada “Economía Patrimonial”, aprovechando la cercanía con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Para estos fines sería preciso disponer un amplio despliegue que se aboque a dar acogida y buena recepción al turismo nacional e internacional, lo que se traduce en la implementación de hoteles, residenciales, centros gastronómicos, oficinas de turismo, etc. “En mis años en la Corfo, a fines de los 90, uno de los análisis que hacíamos es que en la ciudad no había hoteles. Entonces desarrollamos, en este concepto de economía de patrimonio, los hoteles boutique, y toda la expansión del cerro Alegre la desarrollamos a partir de ese enfoque. Hicimos subsidio al activo fijo, a la inversión, pero si no se hace bien, sin una mirada, la capacidad de carga se hace insostenible para la ciudad”, explica el economista.

Junto con ello, propone que Valparaíso se profile como un polo de innovación y desarrollo tecnológico, aprovechando la variopinta y gran cantidad de casas de estudios y centros de formación técnica presentes en la ciudad. En la misma línea, el recientemente reelecto concejal por la comuna, Iván Vuskovic, precisa que “hay mucha gente que viene a estudiar acá, pero como no hay condiciones de trabajo posteriores, esa gente se va. Por eso somos una ciudad que año a año pierde habitantes en vez de ganar”. En ese sentido, el concejal cree que el Estado debiese incidir con proyectos para retener y así aprovechar a esas masas de jóvenes, y perfilar a la comuna como una industria creativa, una ciudad de desarrollo intelectual y amable con su gente.

En cuanto al reimpulso de la actividad portuaria de Valparaíso -que alguna vez significó su único sustento, pero que hoy está cada vez más alicaída debido, entre otras cosas, al protagonismo que ha adquirido el puerto de San Antonio-, se ha vuelto imprescindible expandir la infraestructura portuaria disponible, dada la aparición de buques de enorme envergadura denominados TransPanamá. Estas embarcaciones alcanzan los 400 metros de largo y pueden transportar hasta 8 mil containers de carga, lo que constituye una desventaja para un puerto pequeño como éste. A partir de esa necesidad es que han surgido propuestas muy controversiales encabezadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), de origen estatal, siendo la principal de ellas la expansión portuaria denominada Terminal 2 (T2), que busca construir un nuevo muelle de atraque de 785 metros de extensión que abarcaría desde el actual espigón hasta la altura de la

calle Edwards, es decir, justo frente a la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Es precisamente eso lo que ha causado revuelo y la férrea oposición de la ciudadanía porteña, ya que para este efecto se pretende además construir una explanada de aproximadamente 17,95 hectáreas destinada a la transferencia de carga, es decir, en términos sencillos, a apilar miles de containers frente a la ciudad. El proyecto fue concesionado por la EPV a la empresa Terminal Cerros de Valparaíso S.A. (TCVAL), controlada por el Grupo OHL, el cual ha enfrentado durante este año una demanda en México por una “serie de discrepancias y diferencias” por ajustes de costo en la construcción del Viaducto Bicentenario que ascienden a 296 millones de pesos (16.2 millones de dólares)”, según informó el medio azteca Expansión el pasado 23 de agosto. Por estas discrepancias, el Estado mexicano multó a la filial de OHL en ese país por 38.3 millones de pesos (2.9 millones de dólares).

De acuerdo a los datos entregados por TCVAL en su sitio web, el T2 representaría una inversión de 500 millones de dólares, crearía alrededor de 3 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta y aumentaría el PIB regional anual en US\$101 millones y el de la comuna de Valparaíso en US\$43 millones”. Además, permitiría “duplicar la capacidad actual de transferencia del Puerto, incrementando su competitividad y situándolo entre los principales puertos de Sudamérica”. Sin perjuicio de ello, en el Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) solicitado por el Comité de Patrimonio Mundial y realizado el consultor colombiano Juan Luis Isaza, quedó claramente establecido que el proyecto T2, generará en la zona patrimonial de Valparaíso “un impacto alto, permanente e irreversible”, el cual “no es posible mitigar”. Por ello, el TCVAL y la EPV proponen implementar algunos proyectos para la ciudad a modo de compensación por los eventuales perjuicios que se causarán, destinando para ello, según declaran, “UF 4.400 anuales durante los 30 años que dura el periodo de concesión”.

Sobre este tema el arquitecto Reyes explica que como Colegio se han acercado a conversar con la empresa para proponerle la realización del proyecto, pero en un lugar donde se genere menos impacto: “Nosotros no nos oponemos a la expansión portuaria, sino que proponemos que se ubique en un mejor lugar, como frente a la playa San Mateo, que es la proyección natural del puerto. Además esa es una área protegida con un murallón de cerro que impediría en caso de tsunami que los contenedores ingresaran a la ciudad”. Pero estas propuestas

no han sido consideradas debido a que incrementarían el costo del proyecto, dado que en el lugar señalado no se cuenta con “aguas abrigadas”, por lo que se tendría que realizar un nuevo molo de abrigo, lo que incrementaría exponencialmente su costo.

Entre los férreos opositores al proyecto se encuentra el también recientemente electo concejal y presidente del movimiento Puerto para Ciudadanos, Daniel Morales, quien apunta a la reducción de empleos que traería aparejada la concreción de esta expansión portuaria. “Para que se instale el T2 tienen que sacar el dique flotante, que es un astillero que otorga un gran número de empleos, y además se reducen los lancheros, porque no puedes tener lanchitas entre estas operaciones marítimas. Anteriormente ya habían sacado la caleta de pescadores de la Sudamericana, que daba 500 empleos, entonces cuando se argumenta por la generación de empleos que otorgaría este proyecto, en realidad es como que se crean 500, pero se eliminan 1000. Un absurdo”, señala.

Otro punto es el de la contribución económica directa que dejaría la aceleración portuaria para Valparaíso, sobre lo cual Morales señala que “la actividad portuaria es del gobierno central. La EPV es como un tentáculo que viene de Santiago para acá, no tiene una participación económica en la ciudad. El 2015 ingresaron por concepto de impuestos aduaneros 3 mil 661 millones de dólares y de eso 0 peso quedó asignado de manera directa a la ciudad”. Esto es corroborado por el concejal Vuskovic, quien detalla que el puerto “lo que deja para Valparaíso es una miseria; nos pagan 180 millones por semestre por concepto de patente”. Por ello se está proponiendo una “Ley de Puertos”, que ordene que la actividad portuaria contribuya económica y directamente a las ciudades que la albergan y que por lo tanto sufren los perjuicios que dicha actividad conlleva.

El segundo proyecto impulsado por la EPV para la modernización del puerto de Valparaíso fue la concesión de la gran explanada de 12 hectáreas que se ubica en la costanera frente al cerro Barón y el histórico Barrio El Almendral. Esta vez la empresa que se adjudicó el espacio para ejecutar algún proyecto fue Mall Plaza, e ideó la propuesta “Puerto Barón” que consiste básicamente en construir un centro comercial de gran envergadura conocido como “*Mall Barón*”. La inversión inicial para su concreción asciende a los 200 millones de dólares y contempla la creación de un paseo urbano de 840 metros de largo y 40 metros de ancho, 2 plazas urbanas, conexiones a dos estaciones ferroviarias y la renovación del Muelle Barón.

Sobre esta iniciativa el estudio elaborado por Isaza determinó que su impacto sobre la zona patrimonial es “leve cuando no neutro”, postura con la que discrepan las organizaciones ciudadanas, ya que allí se emplaza un inmueble de conservación histórica: la bodega Simón Bolívar. De hecho, durante las primeras excavaciones –realizadas en octubre de 2013- fueron hallados vestigios arqueológicos, por lo que las obras debieron ser paralizadas hasta la puesta en marcha de un plan de gestión arqueológica. Además, según lo señalado por el arquitecto Reyes, la ficha de protección asociada al inmueble “determina que lo único histórico de la construcción son los arcos de hormigón armado que conforman el espacio central de la bodega, el esqueleto, y el resto no es nada. Entonces el *mall* recoge esos marcos de hormigón, los conserva como su espacio central y mañosamente al lado pretende poner las cajas que forman su estructura. O sea, ¿qué rescate histórico podría haber de ese inmueble? Eso es para la risa”, reclama. El profesional además apunta a la desigual batalla que tendría que lidiar el comercio minoritario contra este gran centro comercial:

“En Europa, por ejemplo, todos los *malls* los están construyendo fuera de la ciudad, porque generan un impacto en el entorno urbano de tal magnitud que son verdaderos hoyos negros que absorben al pequeño comercio de los alrededores. Ellos hablan que van a generar miles de empleos, pero esos son los mismo que van a restar al pequeño comercio, especialmente del barrio El almendral. Además, todos estos centros comerciales trabajan con una patente que tributa en Santiago, acá solo pagan una pequeña patente territorial. Y por último las condiciones del negocio del *retail* no provocan ninguna potenciación de la economía local, ni de la manufactura, porque todos sus productos son importados”.

En virtud de ello, propone generar en la bodega Simón Bolívar un centro de exposiciones de la manufactura local y un gran centro de conversiones para potenciar el turismo de congresos, lo que redundaría en la activación económica de distintos rubros locales. A criterio de los arquitectos, estos dos controversiales proyectos han contado con el apadrinamiento a nivel central, regional y comunal, lo que les ha permitido sortear todas las etapas y conseguido todos los permisos recurriendo a subterfugios. Según ejemplifica Reyes:

“En el caso del *mall*, para obtener el permiso de edificación se necesita que la construcción enfrente una vía troncal o expresa, es decir, una vía de a lo menos 30 metros de ancho. En Valparaíso no hay ninguna, y en el contorno de ese terreno está la línea férrea, por lo

tanto es insalvable. Si hoy un arquitecto cualquiera fuera a pedir un permiso para construir algo así, lo mandarían a la China, porque esos terrenos no tienen salida. Entonces contemplaron varios terrenos y pidieron que se aplicara la figura de conjunto armónico, por tanto ahí hay una irregularidad. Si el proyecto no contara con un apoyo de alto nivel, difícilmente se podría haber aprobado en las condiciones en que se está aprobando”.

Actualmente los proyectos están vigentes y en tramitación, y según los términos pactados en la licitación las dos empresas involucradas -TCVAL de OHL y Mall Plaza- serán las encargadas de construirlos, gestionarlos y explotarlos hasta el 2045. A pesar de lo sugerido por el experto Isaza en su ya citado EIP, donde señala que “estos dos proyectos se suman a las condiciones de un Sitio de Patrimonio Mundial que actualmente presenta unas muy desfavorables condiciones de conservación y gestión, con evidencias de abandono y de un muy avanzado y continuo deterioro, sin contar con un Plan de Gestión, lo cual, evidentemente, va en desmedro de su Valor Universal Excepcional”.

El Plan Maestro para la reconstrucción

Mientras esas son las disputas que se están librando para definir el futuro del centro y la reactivación económica de Valparaíso, en la zona afectada por el megaincendio de 2014 la preocupación central de los porteños es cómo renacer de las cenizas y volver a construir sus barrios y viviendas. Para ello, en los días posteriores al desastre, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la puesta en marcha de un Plan Maestro, que consistía en una inyección total de 510 millones de dólares entre el 2014 y 2021 con aportes de distintos ministerios, entre ellos Vivienda, Obras Públicas, Transporte e Interior. Los componentes de este plan contemplaban tres escalas de intervención: Ciudad, destinada a mejorar la accesibilidad, transporte y seguridad de los sectores afectados y del resto de Valparaíso; Barrio, orientada a reconvertir urbanamente los sectores y sus quebradas; y Vivienda, enfocada a la recuperación habitacional mediante la disposición de subsidios de reconstrucción o erradicación.

En la escala Ciudad se comprometieron obras como el mejoramiento vial de los cuatro caminos que unen el centro con la zona alta de la ciudad (Cuesta Colorada, El Vergel, Mesana y Aquiles Ramírez), un estudio integral de las quebradas (en estado de licitación), una inversión en

obras hidráulicas de cauces primarios (ya adjudicado), un plan de tratamiento forestal (sin ejecución hasta el momento), la construcción de una unidad operativa de control de emergencias (en elaboración), la implementación de una alerta sonora de emergencias (ejecutado), un circuito integrado de Transporte Público (ejecutado) y la disposición de 18 estanques de agua (ejecutado) y de una red de grifos de doble capacidad (ejecutado).

Sobre las mejoras destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante un incendio, como los estanques australianos, el Comandante de Bomberos de Valparaíso, Enzo Gagliardo, explica que éstos tienen una capacidad de 240 mil litros de agua, miden 20 metros de altura y fueron ubicados en 18 puntos estratégicos de la zona alta, abarcando desde el sector de Laguna Verde hasta el camino a Quintay. “Fue un tremendo trabajo. Esto tuvo un costo de 440 millones de pesos que nos depositaron a Bomberos”, comenta el Comandante. La mantención y llenado de estos estanques correrá por cuenta de la institución y le permitirá abastecer a los carros cisternas que son más pequeños que los aljibe contratados por la Onemi en los casos de alguna emergencia. Estos últimos cumplirán la labor de rellenar los estanques, mientras que los otros serán los encargados de introducirse en los terrenos estrechos de Valparaíso.

Además se inauguró un nuevo cuartel de Bomberos en el cerro Playa Ancha y se dispusieron ocho puntos de abastecimiento a una red de alta presión que atraviesa todo el centro de la ciudad por la avenida Colón y Argentina. “Entonces estos carros se abastecen ahí, que es la zona más ancha de Valparaíso, y tiran diez mangueras, colocamos otro carro y otras diez mangueras más, otro carro, y así. Esto nos va a permitir trabajar con tranquilidad, poder hacer más, porque era muy dificultoso armas desde el plan de la ciudad hacia arriba”, explica Gagliardo. Y agrega sobre los nuevas alertas de emergencia que se trata de unos monopostes que resisten terremotos grado nueve y vientos de 140 km por hora, alcanzan una altura de 15 metros con 20 parlantes de 100 watts de potencia cada uno, y fueron también distribuidos en distintos puntos de la ciudad para entregar información. Estos servirían tanto para informar una alerta de tsumani como para llamar a los bomberos a los cuarteles frente al desarrollo de un incendio. “Tenemos uno en Laguna Verde, en el cerro Las Cañas, en el cerro O’Higgins, otra en la calle Brasil, en el muelle Prat, en la Estación Barón y en la Caleta Portales”, precisa el bombero.

Paralelamente y con recursos de la reconstrucción, entre 2015 y 2016 la Conaf desarrolló una nueva versión del Programa de Control de Microbasurales destinado a “concientizar y educar

a los/as habitantes de los territorios intervenidos en la comuna de Valparaíso sobre la importancia del cuidado y protección del medioambiente”. Para ello se realizó una limpieza en los 148 microbasurales catastrados, junto a charlas y talleres sobre educación ambiental. Sólo en 2015 el programa consiguió intervenir 10 puntos, entre ellos el cerro Las Cañas, Merced, Placeres, San Roque, Ramaditas, Toro, Cordillera, Alegre, Polanco y Rodelillo, de donde se extrajeron 581,49 gracias al trabajo de 160 operarios. Adicionalmente, la institución recibió como refuerzo la llegada de uno de los tres aviones AT que se comprometieron desde el Ministerio del Interior para el combate de incendios forestales.

Respecto a las obras viales para mejorar la accesibilidad a la zona alta, la mayor inversión es el mejoramiento y prolongación de la Avenida Alemania, en tanto es la principal estructura de desplazamiento y accesibilidad de los cerros. Por ello se pretende que abarque la totalidad de éstos extendiendo sus tramos existentes e “incorporando dos viaductos que articulan la continuidad: uno que salta la vía Santos Ossa y otro entre los cerros Barón y Placeres, por sobre la quebrada Cabritería”, explica el plan de inversión elaborado por el Gobierno. Junto con ello, se propuso la construcción del Camino del Agua, una vía paralela a la Avenida Alemania que se conectaría con las cuatro vías transversales anteriormente detalladas. No obstante, aún ninguna de estas obras ha sido concretada.

En cuanto al destino del bosque exógeno se decidió realizar “un estudio integral de los paños forestales, el que posibilitará la ejecución de obras para generar condiciones de seguridad y control respecto a especies introducidas, altamente pirógenas”. No obstante, dicho estudio tampoco presenta algún nivel de avance hasta la fecha, al igual que la ofrecida unidad operativa para control de emergencias que concentraría en el mismo edificio –localizado entre el Camino del Agua y La Pólvera- a Bomberos, Conaf y la Onemi.

En la Escala Barrio lo priorizado por el plan de reconstrucción fue definir dónde y qué se reconstruiría, dada las condiciones de riesgo en la que se encuentra gran parte de la zona afectada. Para estos efectos se fijaron tres categorías: zonas de exclusión, donde no se permitiría reconstruir viviendas y se reconstruiría el lugar construyendo vialidades y/o parques urbanos; zona intermedia, donde se podrían construir viviendas, pero realizando obras de mitigación de riesgos como muros, accesos, facilidades peatonales, etc.; y zonas seguras, donde sólo se deben revisar las condiciones de acceso y equipamiento con el fin de mejorarlas.

Para ello se repusieron pavimentos que resultaron afectados con socavones o deslizamientos de tierra a raíz del incendio, se construyeron escaleras y muros de contención, y se definieron algunas “zonas seguras”, que son lugares comúnmente utilizados como canchas de fútbol o miradores y que frente a alguna emergencia servirán para el encuentro y resguardo de los vecinos. También se equipó con radios a los dirigentes sociales y se les capacitó sobre las acciones a seguir frente a una emergencia. Además, se otorgaron cuatro programas Quiero Mi Barrio destinados al mejoramiento del espacio y equipamiento público, proyectos que en su mayoría se encuentran recién en etapa de diseño y algunos con una ejecución de entre 5 y 15%.

Precisamente este retraso en las obras ha sido el principal problema con las escalas Barrio y Ciudad, a juicio del Secpla Tomás Ochoa. “Yo diría que la escala Vivienda tiene un cumplimiento aceptable; en Barrio hay un retraso gigante, hay obras que están recién partiendo; y en Ciudad no se ha hecho nada”, asevera, agregando que como municipio se han reunido con el ministro de Obras Públicas, quien les ha asegurado la ejecución de los proyectos, “pero es todo muy lento. Por ejemplo, se ofreció un plan de mejoramiento de quebradas y hace un mes recién se adjudicó el estudio, ni siquiera las obras”, señala el secretario.

Sobre esta demora el seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe, explica que se debe a que el presupuesto mayor de estas dos escalas lo llevan los proyectos de extensión de la Avenida Alemania y la construcción del Camino del Agua. En el primer caso surgió un contratiempo con la ponderación de la rentabilidad social del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social, situación que ya se encuentra superada, según afirma Uribe. “Ya estamos ejecutando una primera etapa de la Avenida Alemania, que la hemos tenido que segmentar para cumplir con la recomendación técnica, y lo mismo con el Camino del Agua, que se verá próximamente materializado”, asegura la autoridad.

Además de la recomposición de los barrios, los cerros y la ciudad, uno de los desafíos más grandes de la reconstrucción fue, sin lugar a dudas, volver a levantar las casi 3000 viviendas que fueron destruidas por las llamas, cifra que representa la totalidad de la oferta habitacional que genera el Mínvu en un año para toda la comuna. Sobre esto, el delegado presidencial para la reconstrucción, Andrés Silva, explica que: “Cuando me tocó ser seremi de Vivienda en la región de Valparaíso en el año 2006, nos dimos cuenta que desde el año 97’ que no se generaba oferta habitacional en la ciudad, por lo que generamos un plan para construir 3000 viviendas sociales al

año, lo que obviamente se ocupó de manera inmediata y eso ahora venía de nuevo a la baja. Entonces el incendio nos dejó ver una carencia mayor, que era que no teníamos oferta de vivienda disponible en Valparaíso, por lo que el Minvu tuvo que hacer una convocatoria especial para que se presentaran proyectos y así construir cerca de 600 u 800 viviendas adicionales que dieran respuesta a esta necesidad”.

En la entrega de beneficios para la recomposición de las viviendas afectadas se ofrecieron tres soluciones distintas, en virtud de la condición y posesión del terreno involucrado y el nivel de daño sufrido por la propiedad: 1) En caso de habitar una zona segura (situación del 43% de los damnificados) o de riesgo mitigable, y ser propietario del terreno, se brindó un subsidio para reconstruir la vivienda junto a un monto adicional para la realización de las obras de mitigación y regularización de papeles en los casos que correspondía. 2) En caso de habitar una zona de riesgo no mitigable, se brindó la opción de adquirir una vivienda usada o nueva con un subsidio habitacional de UF 900 que entregó el Minvu, ya sea en Valparaíso o en cualquier otra parte de Chile, o bien la construcción en otro terreno con un subsidio de UF 1130. Claro que la oferta de viviendas nuevas era muy escasa, por lo que la mayoría debió esperar la realización de los proyectos que comenzó a ejecutar el Minvu, brindándose ante esta espera viviendas de emergencia o un subsidio de arriendo de 200 mil pesos vigente hasta la actualidad. 3) Y en caso de poseer una vivienda con daño reparable, se otorgó un subsidio de UF 200 para su recuperación.

Cabe recordar que sólo el 36% de las familias eran propietarias de donde vivían, de los cuales sólo el 3% tenían sus papales en norma, es decir, contaban con permiso de edificación, su vivienda había sido recepcionada por la Dirección de Obras de la municipalidad y habían hecho las posesiones efectivas en los casos que correspondía. El resto lisa y llanamente se encontraba fuera de toda norma. Para los habitantes que decidieron y se les permitió reconstruir su vivienda en el mismo lugar, se les otorgó un subsidio de UF 900, que es superior al entregado normalmente, ya que como señala el delegado Silva “en Valparaíso es más difícil construir una vivienda que en cualquier lugar de Chile, porque aquí el costo del muro de contención a veces es mucho más alto que de la vivienda misma. Entonces se generó este subsidio diferenciado”.

Para estas reconstrucciones se ofrecieron tres alternativas: la autoconstrucción, es decir, que las propias familias reconstruyeran sus viviendas y rindieran los gastos por avances o una vez

finalizada la obra; 2) la construcción de un “condominio familiar” con un subsidio de 1130 UF, que es una nueva adaptación a la realidad local porteña, ya que en algunos lotes existía más de una vivienda (por lo general derivadas de la emancipación familiar); y 3) la reconstrucción asistida, donde se involucró a constructoras privadas que ofrecieron distintas casas tipos, permitiéndosele a cada familia escoger cuál le acomodaba más.

Según el delegado Silva, las dos situaciones más complejas que tuvo que enfrentar en el desempeño de esta labor fue, en primer lugar, atender la fase de catastro por la total devastación en la que quedó el sector “y en segundo lugar fue estar en una constante tensión entre las expectativas y realmente lo que uno puede entregar. Había vecinos que reclamaban porque en un mes aún no se le instalaba el baño, el problema es que antes del incendio tampoco tenían porque no había alcantarillado. Entonces tú no podías llegar, respondiendo la emergencia, a resolver un problema estructural que tiene décadas”, apunta.

Los 510 millones de dólares ofrecidos por el Gobierno para la reconstrucción de Valparaíso contemplan la ejecución de proyectos entre el 2014 y 2021, porque “haberlo planificado para cuatro años era mentir; no se puede dar solución a todo lo que hay que atender en tan poco tiempo”, asegura Silva, y por lo tanto cree que “serán los porteños los encargados de defender los proyectos comprometidos si es que no hubiese voluntad de continuarlos en un eventual cambio de gobierno, pero yo creo que hay consenso de que es una situación de la que hay que hacerse cargo”.

En la actualidad, de las 2910 familias afectadas por el megaincendio, sólo un tercio, 1029 familias, ya se encuentran viviendo en su nueva casa. El 47% de ellas prefirió adquirir una vivienda nueva o usada y el 36% reconstruir su vivienda. Poco a poco se ha ido recomponiendo el tejido urbano y social que fue devastado ese fatídico 12 de abril y que le significó a 12 mil personas perderlo todo, incluyendo la vida a 15 de ellos. Un desastre que fue causado por múltiples realidades: la preexistencia de factores naturales proclives, políticas públicas deficientes o inexistentes, irregularidades, una cultura nefasta, un gran nivel de pobreza, y un largo etcétera. Pero que afortunadamente las autoridades y los habitantes de la periferia porteña han entendido como una oportunidad para hacer las cosas mejor y de esa manera revertir, en alguna medida, el gran estado de abandono en el que se encontraba -y aún se encuentra- Valparaíso y toda su gente.

BILIOGRAFÍA

Fuentes bibliográficas:

- EDWARDS, J. (1989). Valparaíso, la ciudad del viento. *Editorial Universitaria*.
- PADILLA, U. (2012). Análisis de la vulnerabilidad por remoción en masa e inundación. Caso de estudio: cuencas de la ciudad de Valparaíso. *Pontificia Universidad Católica de Chile*.
- PURCELL, J. (2014). Visión de Valparaíso 1953 – 2011. *Ediciones universitarias de Valparaíso. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*.
- RODRÍGUEZ Y SILVA, F, ALVEAR, G, CASTILLO, M, MOLINA, J, CERDA, C, TORAL, M, HERRERA, M, GONZÁLEZ, L. (2010). Estudio de análisis de la vulnerabilidad de áreas urbano-forestal desde el punto de vista socioeconómico y el impacto de los incendios forestales, una aplicación a la provincia de Valparaíso, Chile. *Universidad de Córdoba*.
- URBINA, M. (2001). Los ranchos de Valparaíso en el siglo XIX: aproximaciones a un estudio sobre vivienda popular urbana. *Revista Notas Históricas y Geográficas*, N° 12, págs. 225-242.
- URBINA, M. (2002). Los conventillos de Valparaíso, 1880-1920. Fisonomía y percepción de una vivienda popular urbana. *Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, págs. 49-113.
- URBINA, M. (2006). El impacto del terremoto de 1906 en las viviendas populares de Valparaíso: una síntesis. *Revista CA, Ciudad y Arquitectura*, N° 126, págs. 30-31.
- URBINA, M. (2007). El terremoto de 1906: cambios y permanencias en el habitar popular de Valparaíso. *Revista Archivum*, N° 9, págs. 327-335.
- VELA-RUIZ, P. (2009). ¿Valparaíso o pirópolis? Historia de una gestión ineficaz en el control de los incendios. 1843-1927. *Revista Archivum*, N° 9.
- VICUÑA MACKENNA, B. (1873). Historia de Valparaíso. *Obras completas de Vicuña Mackenna*. Universidad de Chile.

Documentos:

- BANCO CENTRAL. (2015). Cuentas nacionales de Chile, PIB Regional 2015, pág. 6. Disponible en: file:///C:/Users/Valon/Downloads/CCNN_PIB_regional2015.pdf
- CNTV. (2014). Acta de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Televisión del día 30 de junio y 14 de julio de 2014.
- CNTV. (2014). Casos fiscalizados a partir de denuncias ciudadanas tras incendio en Valparaíso.
- CONAF. (2016). Programa de Control de Microbasurales, comuna de Valparaíso.
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (2013). Informe número 30/2013 sobre Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social.
- CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. (2007). Fallo emitido el 12 de septiembre.
- CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. (2009). Fallo emitido el 5 de enero de 2009.
- CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. (2013). Fallo emitido el 30 de septiembre de 2013.
- CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. (2014). Fallo emitido el 26 de septiembre de 2014.
- CORTE SUPREMA DE CHILE. (2009). Fallo emitido el 24 de marzo.
- GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO. (2015). Consolidado Damnificados Familias de Campamento.
- INE. (2016). Encuesta Nacional de Empleo 2016, pág. 6. Disponible en: file:///C:/Users/Valon/Downloads/empl_FWGtAi3X.pdf
- ISAZA, J. (2016). Estudio de impacto patrimonial, EIP, para el sitio denominado área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, Chile, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, relacionado con los proyectos Terminal Cerros de Valparaíso, TCVL, y Puerto Barón.

- MG CONSULTORES. (2012). Evaluación final Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso.
- MIDESO. Encuesta Casen 2013, pág. 7 y 25. Disponible en:
[http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/RESULTADOS REGIONALES SOBRE LA MEDICION POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2009-2013.pdf](http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/RESULTADOS_REGIONALES SOBRE LA MEDICION POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2009-2013.pdf)
- MINISTERIO DEL INTERIOR. (2014). Plan de inversiones, reconstrucción y rehabilitación urbana. Disponible en: <http://www.interior.gob.cl/media/2014/09/PLAN-DE-INVERSION-VALPO-2014-2021.pdf>
- MINVU. (2011). Mapa Social de Campamentos, pág. 97.
- MINVU. (2013). Déficit habitacional, Casen 2013, pág. 4. Disponible en:
file:///C:/Users/Valon/Downloads/An%C3%A1lisis_D%C3%A9ficit_Habitacional_2013_MAULE01.pdf
- MINVU, OBSERVATORIO HABITACIONAL. Déficit habitacional cuantitativo con base en Censo 2002. Disponible en:
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewji9eySmJfQAhVBj5AKHSGvCRsQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.observatoriohabitacional.cl%2Fincjs%2Fdownload.aspx%3Fglb_cod_nodo%3D20080527131440%26hdd_nom_archivo%3Dd%25C3%25A9ficit%2520habitacional%2520por%2520regi%25C3%25B3n%2520y%2520comuna_Censo%25202002.xls&usg=AFQjCNHkdVfsEO7qrmkDyFNr0YYKOLK3ZA&sig2=Hh5nShZJA7KTAaMQIn9ofA
- ONEMI. (2014). Informes técnicos sobre incendio forestal conflictivo en comuna de Valparaíso.
- TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VALPARAÍSO. (2013). Fallo emitido el 29 de mayo de 2013.
- TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VALPARAÍSO. (2014). Fallo emitido el 12 de agosto de 2014.

- TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE VALPARAÍSO. (2008). Fallo emitido el 23 de septiembre de 2008.

Entrevistas

- APABLAZA, S. Ex presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso.
- ASTUDILLO, M. Seremi de Salud de Valparaíso.
- BUSTOS, M. Director regional de Onemi.
- CASTILLO, M. Docente del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile.
- CASTRO, J. Alcalde de la comuna de Valparaíso.
- CORNEJO, D. Habitante del campamento Nuevo Amanecer del Cerro Mariposas.
- CORVALÁN, A. Director regional de ProChile.
- FLORES, L. Habitante del cerro El Litre.
- GAGLIARDO, E. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
- HERRERA, L. Habitante del campamento Sor Teresa del Cerro Ramaditas.
- JARA, O. Ex gobernador provincial de Valparaíso.
- KAPLAN, P. Directora de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso.
- MÖDER, L. Jefe del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de Conaf Valparaíso.
- MOLINA, R. Jefe del Departamento de Manejo del Fuego de Conaf Valparaíso.
- MORALES, D. Concejal de Valparaíso y presidente del movimiento Puerto para Ciudadanos.
- MORALES, I. Habitante del campamento Mesana del Cerro Mariposas.
- OCHOA, T. Director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso.
- PADILLA, U. Académico de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso.

- PAROT, L. Ex director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso.
- PÉREZ, K. Habitante del campamento Mesana del Cerro Mariposas.
- PINTO, H. Ex alcalde de la comuna de Valparaíso.
- PUENTES, M. Arquitecto y docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- PUGA, M. Habitante del campamento El Vergel del cerro La Cruz.
- REYES, C. Concejal y director del Colegio de Arquitectos de Valparaíso.
- RÍOS, F. Director regional de “Techo Chile” en Valparaíso.
- SILVA, A. Delegado presidencial para la reconstrucción de Valparaíso.
- URBINA, X. Historiadora y académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- URIBE, R. Seremi de Vivienda de Valparaíso.
- VALDÉS, R. Jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso.
- VERGARA, R. Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso.
- VUSKOVIC, I. Concejal y presidente de la Comisión de Finanzas de la Municipalidad de Valparaíso.

Páginas web

- <http://papeldigital.info/lt/?2014041301#2>
- <http://papeldigital.info/lt/?2014041401#>
- <http://papeldigital.info/lt/?2014041501#2>
- <http://papeldigital.info/lt/?2014041601#2>
- <http://papeldigital.info/lt/?2014042101#2>
- <http://papeldigital.info/lt/?2014042201#2>
- <http://historicos.la2da.cl/FlashObject/FlippingDetailPage.aspx?IsInternal=true&SupplementId=0&BodyID=0&dt=14/04/2014>

- <http://historicos.la2da.cl/FlashObject/FlippingDetailPage.aspx?IsInternal=true&SupplementId=0&BodyID=0&dt=15/04/2014>
- <http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/04/15/los-informes-que-advirtieron-sobre-los-riesgos-de-incendio-en-valparaiso-y-que-nadie-escucho/>
- <http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/04/15/43-denuncias-completa-el-cntv-por-difusion-del-incendio-de-valparaiso/>
- <http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20021127202212/pags/20021127222801.html>
- <http://www.quintavision.cl/portal/03/05/2013/tu-voz-local-3-mayo-2013/>
- <http://web.archive.org/web/20141006153239/http://www.24horas.cl/nacional/minuto-a-minuto-incendio-en-valparaiso-deja-severos-danos-1179050>
- <http://www.24horas.cl/noticiarios/24horascentral/24-horas-central---lunes-14-de-abril-1182058>
- <http://www.anin.cl/nota/67/2148/querella-estafa-complica-al-delegado-presidencial-para-reconstrucci%C3%B3n-valpara%C3%ADso>
- <http://ciperchile.cl/2014/04/16/el-historial-de-negligencia-y-corrupcion-que-hizo-arder-a-valparaiso/>
- <http://ciperchile.cl/2014/05/05/corrupcion-en-valparaiso-contraloria-revela-la-entrega-de-3-333-millones-de-manera-irregular/>
- <http://www.t13.cl/videos/politica/caso-sqm-se-acusa-marco-enriquez-ominami>
- http://www.losprogresistas.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1409&Itemid=12
- <http://expansion.mx/empresas/2016/08/23/infraiber-dice-que-sancion-contra-ohl-mexico-es-insuficiente>
- <http://www.biobiochile.cl/noticias/2011/02/15/confirman-condena-contr-ex-concejal-de-vina-del-mar-por-desvio-de-fondos-pge.shtml>
- <http://www.lanacion.cl/noticias/pais/condena-de-541-dias-de-carcel-para-ex-sermi-de-valparaiso-por-desvio-de-fondos/2009-09-25/182730.html>
- <http://www.conaf.cl/quienes-somos/historia/>
- <http://www.conaf.cl/gobierno-entrego-el-primero-de-tres-nuevos-aviones-para-combatir-incendios-forestales/>
- <http://miradorparalareconstruccion.cl/wp/estado-de-avance/>

- <http://www.tcval.cl/>
- https://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmId=848
- <http://www.techo.org/paises/chile/resultadosenc2015/>
- <http://chile.techo.org/cis/monitor/>



Prof. Raúl Rodríguez O.
Jefe de Carrera Escuela de Periodismo
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

A continuación le comunico a usted la evaluación de la memoria de título "**MEGAINCENDIO EN VALPARAÍSO** La historia de precariedad y corrupción que devastó al Puerto Principal" de la estudiante *Valentina Andrade*, trabajo guiado por la profesora *Tania Tamayo* en la categoría Reportaje Periodístico:

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1.1	Pertinencia y relevancia del tema	Pertinente y relevante	10%
1.2	Investigación y reporteo	Calidad y atingencia del reporteo.	40%
1.3	Estructura y presentación	Correcta	25%
1.4	Redacción	Correcto estilo de escritura, ritmo y narración	25%

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0

Item	Nota	Valor
1.1	7,0	0,7
1.2	7,0	2,8
1.3	7,0	1,8
1.4	7,0	1,8
Nota Final		7,0



COMENTARIO

La investigación periodística de la alumna Andrade es un aporte a la realidad y coyuntura nacional. En ella se aprecia un acabado reporte en temáticas relevantes para la tragedia acaecida en Valparaíso, integrándole un contexto informativo más allá del buen relato del incendio. Andrade trabaja el tema de la corrupción, de las negligencias administrativas y las condiciones humanas, muchas veces a la deriva de los habitantes del puerto que no vieron apoyo concreto y sistémico de parte de las autoridades.

Gran investigación que pudiese ser posteriormente publicada.

Atentamente,

Tania Tamayo Grez

Santiago, 29 de diciembre de 2016



Prof. Raúl Rodríguez O.
Jefe de Carrera Escuela de Periodismo
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

A continuación le comunico a usted la evaluación de la memoria de título "Megaincendio en Valparaíso", *trabajo guiado por la profesora Tania Tamayo* en la categoría Reportaje Periodístico:

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1.1	Pertinencia y relevancia del tema	Interés público y enfoque.	10%
1.2	Investigación y reporteo	Técnicas de reporteo, calidad y cantidad de fuentes, rigurosidad en el tratamiento de la información	40%
1.3	Estructura y presentación	Coherencia narrativa, fluidez y formato.	25%
1.4	Redacción	Estilo narrativo, recursos estilísticos y calidad de la redacción	25%

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9–3.0

Item	Nota	Valor
1.1	6.5	0,7
1.2	6.0	2,4
1.3	5,7	1,4
1.4	5,7	1,4
Nota Final		5,9



COMENTARIO

Se trata de un trabajo que se inscribe a esta altura en un capítulo de la memoria porteña, de esta ciudad que jamás fue fundada. Pareciera que no tiene ley y que aquí todo puede pasar. Por eso, resulta tan atractivo el trabajo de reporteo y sobre todo de denuncia que se realiza desde el Capítulo 2 hasta el Capítulo 4. Hay una forma de hilar la información muy prometedora por parte de esta estudiante, que implica lograr analizar y concatenar datos a gran escala. Sin embargo, se pierde el foco de la historia que está presentado en el Capítulo 2, donde las autoridades públicas logran con su desatino sacar de la voz de los pobladores la frase "los pobres no escogen donde vivir". Creo que a un periodismo que intenté acercarse a paradigmas tan complejos como la pobreza desde una perspectiva de clase necesita sin duda alguna profundizar sobre ciertos tópicos transformando aquello en historias. A esta tesis le faltó trama. Todos los antecedentes e informaciones y también entrevistas están presentadas en cuanto a bloque de concreto que estructura la denuncia, pero falta la historia, el haber leído esto y quedar indignada, el lograr entrar a la profundidad de esa pobreza que no escoge donde vivir, el haber recorrido solo con la imaginación de lectora empedernida esos cerros de Valparaíso quemándose a fuego. La voz narrativa en el periodismo puede usarse para, precisamente, levantar una historia que nadie puede olvidar. Y este texto tiene aún las condiciones necesarias para ser transformado en una historia inolvidable. Para ello, solo falta el arrojo y la seguridad de la voz que narra, que hasta ahora me demuestra que es capaz de trabajar con responsabilidad y cumplir una tarea, pero necesito el desborde, una propuesta periodística, una forma de relatar que me resulte particular y decidida a que no olvide, a que no soporte, a que me indigne con la injusticia presentada. Clave aparte es la forma de tratar a las fuentes. Ojo con las complacencias y esos acercamientos tibios, sobre todo cuando se trata de voces como las del "Techo Valparaíso". Espero que esta tesis sea revisada otra vez, reescrita, para que salga de acá una historia más pujante que el fuego que levantó el megaincendio.



Revisar el título no estaría mal. Seguro se encontrará algo más atractivo una vez desarrollada la historia.

Atentamente,

Verónica Torres

Profesor/a

Santiago, 27 de Diciembre de 2016



Prof. Raúl Rodríguez O.
Jefe de Carrera Escuela de Periodismo
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

A continuación le comunico a usted la evaluación de la memoria de título "Megaincendio en Valparaíso. La historia de la precariedad y corrupción que devastó al Puerto Principal" de la estudiante **Valentina Andrade Lillo**, en la categoría Reportaje Periodístico:

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1.1	Pertinencia y relevancia del tema	Interés público y enfoque.	10%
1.2	Investigación y reporteo	Técnicas de reporteo, calidad y cantidad de fuentes, rigurosidad en el tratamiento de la información	40%
1.3	Estructura y presentación	Coherencia narrativa, fluidez y formato.	25%
1.4	Redacción	Estilo narrativo, recursos estilísticos y calidad de la redacción	25%

Excelente 7.0-6.5; Muy Bueno 6.4-6.0; Bueno 5.9-5.0; Aceptable 4.9-4.0; Deficiente 3.9- 3.0

Item	Nota	Valor
1.1	7,0	0,7
1.2	7,0	2,8
1.3	6,5	1,6
1.4	7,0	1,8
Nota Final		6,9

COMENTARIO

El interés público del tema es enorme. La estudiante logra un texto que expone el vínculo entre la situación particular de una ciudad y el modelo económico de un país. En ese sentido, logra darle rostro humano y específico a un modelo (llamado neoliberal o extractivista) que habitualmente es estudiado desde las definiciones abstractas y datos generales. Me gustó mucho el carácter expansivo que tiene, en el sentido que es en primer lugar un estudio sobre el tema de la vivienda, pero termina abarcando las principales dimensiones de la vida en comunidad (lo político, lo territorial, lo social). A partir de ahí, el texto permite matizar poderosamente la afirmación común, tan liviana, de que Chile es uno de los países más modernizados de América Latina.



En cuanto a las técnicas de investigación, se nota un trabajo completo y riguroso. Hay una confluencia de diversas técnicas de levantamiento de información, como las entrevistas, el trabajo de archivos, la revisión de prensa y la pesquisa bibliográfica. A lo largo del texto la autora presenta diversas visiones sobre el fenómeno (pobladores, Estado, empresas, expertos) y sus diversos niveles, con lo que el panorama presentado dista mucho de ser simple. En concreto, encontré articuladas en el texto las miradas: económica, humana, legal, política, social, ecológica, histórica, urbana y arquitectónica. El nivel de detalle en las explicaciones (de todos los temas) es fascinante, realmente el lector queda muy informado sobre el problema urbano de Valparaíso (por ejemplo: cómo funcionan los mecanismos de subsidio y radicación, cómo operan los bomberos, cómo se articulan los distintos organismos públicos, los planes de mejoramiento, etc.). Hay un gran criterio en cuanto al uso de citas, pues tienen el tamaño preciso (muchos estudiantes tienden a poner citas muy largas y ni siquiera las comentan). El texto mantiene un equilibrio entre la opinión formada y explícita de la autora y el despliegue argumentativo de los datos duros. Es decir, es un texto ecuánime.

En relación a estructura y coherencia, es ahí que anoto un punto débil (el único de todo el texto). La sección dedicada a los casos de corrupción en la región es demasiado extensa. Sin duda es un aporte, pero su vínculo con el incendio es indirecto. Podría haberse resuelto con un par de párrafos por cada caso, enfatizando el monto defraudado (ya que ese era el foco). Eché de menos la lista de entrevistados en la bibliografía.

Por último, en cuanto a la redacción, la tesis se lee muy fluidamente. El manejo de conceptos es acertado y no incurre en afirmaciones no respaldadas.

Atentamente,

Jorge Iturriaga

Santiago, 23 de diciembre de 2016